

El proceso de Preparación para REDD+ en Mesoamérica:

Actores, tendencias y temas críticos



333.7
P963

sv

El Proceso de Preparación para REDD+ en Mesoamérica: Actores, Tendencias y Temas Críticos / Nelson Cuéllar, Susan Kandel, Andrew Davis, Desiree Elizondo. -- 1a. ed. -- San Salvador, El Salv. : Fundación PRISMA, 2011.
93 p. : mapas col. ; 28 cm.

ISBN: 978-99923-965-0-6

1. Deforestación – Medio Ambiente -- América Central. 2. Contaminantes ambientales-- América Central. 3. Contaminación del aire. I. Kandel, Susan, coaut. II. Davis, Andrew, coaut. III. Elizondo, Desiree, coaut. IV. Título.

Esta investigación forma parte del Proyecto "Diseñando un Programa REDD que Beneficie a las Comunidades Forestales en Mesoamérica", el cual es desarrollado por Fundación PRISMA y el Grupo CABAL con el auspicio de Fundación Ford y Fundación David and Lucile Packard.

Editor: Nelson Cuéllar

Diagramación: Leonor González y Wendy E. Peña



Esta publicación está liberada bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir Obras Derivadas Igual. Para mayor información: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

© Fundación PRISMA, junio 2011

Esta publicación fue posible gracias al apoyo financiero de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) y de la Fundación Ford.

El Proceso de Preparación para REDD+ en Mesoamérica:

Actores, tendencias y temas críticos

Metodología y reconocimientos

Este informe se basa en entrevistas realizadas entre octubre de 2009 y septiembre de 2010 a diversos actores de entidades gubernamentales, representantes de pueblos indígenas y organizaciones de forestería comunitaria, organizaciones de la sociedad civil, entidades de cooperación e investigación en los países de Mesoamérica. Otra parte de la información contenida en este informe se obtuvo mediante diversos medios (electrónicos e impresos), foros, seminarios y encuentros de diálogo regionales, así como fuentes secundarias que se refirieron a la postura o actividades sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación por parte de actores de interés para este informe. El equipo de trabajo agradece y reconoce el interés de las diversas personas, organizaciones y entidades que brindaron información para este informe.

Autores

Nelson Cuéllar
Susan Kandel
Andrew Davis
Desiree Elizondo

Colaboradores

Sergio Madrid
Ana Peña del Valle
Gmelina Ramírez
Javier Baltodano
Kenya Navas

Equipo del Proyecto

Desiree Elizondo (Coordinadora)
Nelson Cuéllar
Susan Kandel
Andrew Davis



Índice

Introducción	1
Actores, roles y posiciones en la preparación para REDD en Mesoamérica	3
Principales programas de preparación para acciones de REDD	3
El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)	4
El Programa Colaborativo ONU-REDD	6
El Programa REDD-CARD de GTZ-CCAD	8
Actores, roles y posiciones en torno a REDD+	10
Actores Gubernamentales	10
Organizaciones, espacios y redes de pueblos indígenas y comunidades forestales de la región	16
Organizaciones de conservación y otros organismos internacionales	20
ONGs nacionales y locales	21
Universidades y centros de investigación	22
Sector privado, mercados voluntarios y REDD+	24
Tendencias y temas críticos en la preparación para REDD+ en Mesoamérica	27
Preparándose para REDD+... gobiernos y agencias técnicas primero	28
Preparándose para REDD+, pero evadiendo ó posponiendo confrontar la deforestación y degradación	29
¿Preparándose para REDD+ ó para el '+' de REDD?: Relevancia para la adaptación y la inclusión	30
El desafío institucional para REDD+: Más allá de la institucionalidad estatal	30
Las preocupaciones por la equidad y la justicia social en la preparación para REDD+	33
Los derechos: énfasis estratégico en la preparación de las comunidades para REDD+	33
Anexos	35

Introducción

Durante la Conferencia de las Partes (COP-11) realizada en Montreal, Canadá en 2005, tras la nueva evidencia de la importancia global de los bosques en la mitigación del cambio climático, se introdujo nuevamente la reducción de deforestación y degradación (REDD) como tema clave en el proceso de negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). En la COP-13, la CMNUCC aprobó el Plan de Acción de Bali como parte de los acuerdos alcanzados, en los que se incorporó la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), así como la importancia de la conservación forestal, el manejo forestal sostenible y la ampliación de las reservas forestales de carbono, como elementos claves de la mitigación del cambio climático. El desarrollo y el apoyo amplio que recibió REDD en las discusiones internacionales dieron paso a la creación de fondos e iniciativas tendientes a promover la ‘preparación para REDD’ (REDD readiness).

Mesoamérica demuestra un claro interés por prepararse para implementar acciones de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD). Dicho interés incluye a diversos actores, desde los gobiernos y organizaciones de conservación, hasta organizaciones territoriales como los pueblos indígenas y organizaciones comunitarias, entidades de cooperación, universidades y centros de investigación.

El interés no es casual, pues las acciones vinculadas con REDD podrían significar el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales de los gobiernos, sobre todo para la gestión forestal; aunque para otros actores, como los pueblos indígenas y comunidades forestales, REDD podría abrir nuevas oportunidades

para el fortalecimiento de los medios de vida y la construcción de nuevos arreglos institucionales que amplíen las perspectivas de sostenibilidad en los territorios.

Sin embargo, son evidentes las visiones y enfoques diferentes, no sólo entre los diversos países de Mesoamérica, sino también al interior de los mismos, el proceso de preparación para REDD también devela nuevos escenarios de poder de diversos actores que buscan posicionarse frente a eventuales mecanismos de compensación vinculados con la deforestación y degradación forestal evitadas.

Con diversos alcances, los países de Mesoamérica han iniciado su proceso de preparación para implementar acciones de REDD. Dicho proceso es apoyado por diversos programas y organizaciones que han enfatizado la coordinación institucional, aspectos técnicos y metodológicos para el monitoreo de la deforestación y degradación forestal.

Prácticamente sin excepción, el enfoque adoptado en Mesoamérica incluye el “+” (plus) de REDD, lo cual no es casual, pues el rol de la conservación, el manejo forestal sostenible y la necesidad de ampliar los stocks de carbono, son fundamentales para cualquier estrategia REDD en los países.

Este informe evidencia que el proceso de preparación para REDD en Mesoamérica se caracteriza es relativamente generalizado, aunque hay desafíos enormes de información, participación y consulta, pues a pesar de los argumentos formales, los procesos de preparación enfrentan serios retos de mayor apertura y de mayor compromiso con procesos genuinos de consulta a diversos actores relacionados con el sector

forestal, sobre todo, en el caso de los pueblos indígenas y comunidades forestales. Si bien el proceso de preparación para REDD en Mesoamérica es reciente, hay evidencia de que evoluciona con una celeridad importante, también evidencia la urgente necesidad de compromisos decididos por una mayor apertura e inclusión de actores claves, lo cual será fundamental para una mayor legitimidad en los procesos de preparación e implementación de las estrategias de REDD+.

Mesoamérica tiene la oportunidad de desempeñar un rol líder a nivel internacional en el diseño y operación de un esquema REDD+ incluyente, que atienda las causas subyacentes de la deforestación y la degradación, y sobre todo, que integre estratégicamente el rol de los pueblos indígenas y comunidades forestales dentro de los esquemas de REDD+.

Los enormes desbalances en la manera en que se está institucionalizando la agenda de REDD en Mesoamérica, pueden resultar altamente perjudiciales para comunidades forestales y pueblos indígenas, pues además de las falencias de consulta y participación, temas más fundamentales como los derechos y los beneficios, son marcadas ausencias en casi todos los países de Mesoamérica.

En este contexto, REDD ofrece un potencial particularmente estratégico para avanzar hacia una agenda que profundice en las complejidades derivadas de la implementación de acciones REDD, como lo relativo a las causas subyacentes de la deforestación y la degradación forestal y su vinculación con las condiciones de gobernanza territorial; así como otros temas medulares, como la equidad y la justicia social, que requieren de un esfuerzo decidido por atender adecuadamente las dimensiones relativas a los derechos de propiedad, de uso, de acceso, de

manejo y de exclusión por parte de las comunidades forestales indígenas y campesinas, pero también de fortalecer sus estrategias de vida y las condiciones que mejoren la gestión y la gobernabilidad territorial.

Lo anterior constituye condiciones críticas para la implementación de estrategias REDD en Mesoamérica, pues no avanzar en los temas críticos y desafíos fundamentales, puede dar paso a la implementación de acciones REDD basadas en las estrategias tradicionales de conservación como las áreas protegidas (públicas y privadas) y en el fomento al sector privado (productores forestales, productores agrícolas, ganaderos, etc.). En este escenario, los objetivos de reducción de emisiones por deforestación y degradación pudieran ser alcanzados, pero con altos costos sociales, de exclusión y falta de legitimidad, que fácilmente pueden incidir en peores condiciones de gobernanza territorial.

Este informe presenta de manera resumida los principales programas de apoyo al proceso de preparación para REDD en Mesoamérica. Además de una resumida discusión sobre el rol de los países de la región en el proceso de negociación sobre cambio climático, se resume el papel de los principales programas que apoyan a los gobiernos en sus procesos de preparación para REDD. Asimismo, se presenta de manera sintética, la posición y el papel de diversos actores en los procesos nacionales de preparación. Asimismo, se presentan otras iniciativas y actores regionales relevantes en el proceso de preparación para REDD, así como la identificación de las tendencias y temas críticos para estrategias REDD que benefician a pueblos indígenas y comunidades forestales. A manera de anexo, se presenta con mayor detalle un conjunto seleccionado de iniciativas territoriales de preparación para REDD en países de Mesoamérica.

Actores, roles y posiciones en la preparación para REDD en Mesoamérica

PRINCIPALES PROGRAMAS DE PREPARACIÓN PARA REDD

A pesar de que la estructura y naturaleza final de REDD no se haya definido, ello no ha impedido el avance de diversos esfuerzos en los países de Mesoamérica para prepararse para un eventual régimen de REDD, cualquiera que sea su estructuración final. En Mesoamérica, se ha evidenciado un fuerte interés por parte de varios actores, como algunas organizaciones internacionales de conservación, entidades de cooperación y gobiernos de la región, por aprovechar la percibida oportunidad que REDD abre para acceder a nuevas fuentes de financiamiento, ya se trate de fondos o mercados asociados con REDD. Este interés ya se ha traducido en la conformación de fondos para apoyar procesos de preparación para implementar acciones de REDD después del 2012, asumiendo que para entonces habría un segundo período de compromisos de reducción de emisiones, bajo el cual, REDD podría jugar un rol importante para cumplir los compromisos de reducción de emisiones de los países industrializados a través de disminuir la deforestación y degradación forestal.

Con esa lógica, en Mesoamérica distintos fondos ya están apoyando acciones de preparación para REDD, tal como ocurre con el Fondo Cooperativo para el Carbono Forestal (FCPF, en inglés), el Programa Colaborativos de las Naciones Unidas sobre REDD (ONU-REDD) y el Programa Regional sobre REDD que financia la GTZ. Estos fondos y programas se caracterizan por apoyar directamente a los gobiernos en la preparación para REDD, pero también existe

otro conjunto de acciones de preparación promovidas por organizaciones internacionales de conservación como Conservación Internacional (CI), Rainforest Alliance (RA), The Nature Conservancy (TNC) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés), entre otros. Asimismo, diversas organizaciones de la sociedad civil e incluso organizaciones y redes comunitarias desarrollan acciones de preparación para la eventual implementación de acciones de REDD.

En el caso de México, existe un Acuerdo Bilateral con Noruega, firmado en el marco de la Conferencia de Oslo sobre el Clima y los Bosques en mayo de 2010, en la que Noruega lanzó la Alianza REDD+ (REDD+ Partnership). México estima que entre 2010 y 2015 requerirá entre \$90 millones y \$140 millones para apoyar el desarrollo e implementación de su estrategia nacional de REDD+, la construcción de capacidades y la implementación de actividades demostrativas; y a partir del 2011, entre \$20 millones a \$40 millones anuales para el pago basado en desempeño por la reducción de emisiones.

Estos fondos y programas, así como sus modalidades y contenidos de trabajo están marcando fuertemente el proceso de preparación en cada uno de los países de Mesoamérica. Las implicaciones del diseño e implementación son significativas, considerando que las decisiones iniciales ya empezaron a marcar una ruta de abordar el tema de REDD, que en la práctica está excluyendo otras posibles oportunidades. En general, a pesar que REDD+ busca abordar de manera decidida la deforestación y la degradación forestal, e incorporar y beneficiar a los pueblos

indígenas y comunidades forestales, los resultados de las etapas iniciales de preparación en la región, demuestran limitaciones que de no corregirse, pueden reducir sustancialmente las posibilidades de que REDD+ beneficie realmente a los pueblos indígenas y a las comunidades forestales, pero también que reduzcan la deforestación y degradación.

En esta sección destacamos la acción de tres de los principales programas regionales: el FCPF; el ONU-REDD; y el Programa de REDD para Centroamérica y República Dominicana implementado por la GTZ (Programa REDD-CARD), que es implementado a través de la CCAD. Discutimos primero el FCPF, que no sólo fue el primero en iniciar, sino que también ha tenido la mayor presencia en la región. Después, se discuten los programas ONU-REDD y REDD-CARD de GTZ-CCAD, dos programas que se entienden mejor en relación al FCPF.

El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)

En Mesoamérica, el FCPF (Recuadro 1) ha tenido un rol sumamente activo en el proceso de preparación de los gobiernos de Mesoamérica y es el programa con mayor presencia en la región hasta el momento. Todos los países de Mesoamérica, con excepción de Belice, han manifestado su interés por participar en las acciones de preparación auspiciadas bajo este programa. De hecho, a mediados de 2009, todos los países habían sometido sus respectivos documentos de idea para el proceso de preparación para REDD (Readiness Plan Idea Note, R-PIN). Luego de los documentos de R-PIN, únicamente México, Costa Rica y Panamá han sometido sus respectivas Propuestas de Preparación (Readiness Plan Proposal, R-PP), en tanto que el resto las están formulando o han mostrado interés en continuar con el proceso.

Dado su alcance en todos los países de la región y por haber iniciado más temprano, el FCPF juega un rol central en los procesos de preparación para REDD+, independientemente que los países opten por participar en mercados (regulados ó voluntarios) y/o en fondos de carbono. Las opciones vinculadas con los mercados de carbono ha sido uno de los más polémicos en el debate sobre REDD+ en Mesoamérica, no sólo de parte del movimiento ambiental, sino también por organizaciones y pueblos indígenas, incluso en el caso de varios gobiernos de la región, pero existe mucha más flexibilidad cuando se asocian opciones a fondos de REDD, tanto de parte de gobiernos, como de pueblos indígenas y organizaciones de forestería comunitaria. Por otra parte, a pesar que un eventual mecanismo REDD, todavía depende de acuerdos globales en la CMNUCC y de una estructuración final que aún está por definirse, el diseño de los sistemas regulatorios y de un régimen de REDD+ bajo la CMNUCC (u otros marcos regulados o voluntarios), claramente serán influenciado por los actuales procesos de preparación promovidos por el FCPF, así como por otros fondos y programas de preparación. En este contexto, el FCPF busca aprovechar la oportunidad política para desplegar el proceso de preparación para REDD+ de la forma más rápida posible y así mostrar su viabilidad como mecanismo efectivo para contribuir a la mitigación del cambio climático.

Un elemento que ha reducido esta presión de desplegarse rápido son los esfuerzos dentro del mismo FCPF, que ha buscado incorporar las perspectivas de pueblos indígenas y comunidades forestales, ya sea por motivos auténticos o por buscar protegerse de críticas en los procesos de preparación para REDD+. A pesar de estos esfuerzos, el impulso dominante en la región ha sido la implementación acelerada de los programas, lo cual ha derivado en varias debilidades importantes con serias y preocupantes consecuencias para los pueblos indíge-

nas y comunidades forestales de la región. Una de ellas se relaciona con los procesos de consulta en general, así como de las salvaguardas, que a pesar de haberse afirmado que todas las políticas operacionales del Banco Mundial aplican para REDD+, todavía no se ha esclarecido cómo, aplicarán en el proceso de preparación

de REDD, aunque se ha planteado que esto también sería incluido a través de las evaluaciones ambientales y sociales estratégicas (SESA, por sus siglas en inglés).

A pesar de que el FCPF estableció en octubre de 2008 un Programa de Desarrollo de Capacida-

Recuadro 1 Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques

En 2006, después de la COP-11 realizada en Montreal, Canadá el Banco Mundial inició un proceso de consultas enfocado en proponer un mecanismo que se encargara de las actividades de reducción de emisiones por deforestación y degradación (conocido como REDD). Yen 2007, la Declaración de la Cumbre del G-8 realizada en Alemania, apoyó que el Banco Mundial propusiera, desarrollara e implementara un mecanismo global para propiciar acciones colaborativas entre países del G-8, países en desarrollo, sector privado, ONG y otros actores, para impulsar acciones relativas a REDD. En el marco de la COP-13, desarrollada en Bali, Indonesia, en 2007, el Banco Mundial anunció el lanzamiento del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) y a mediados de 2008 ya había iniciado sus operaciones. El objetivo del FCPF consiste en apoyar a países tropicales y sub-tropicales de América Latina y el Caribe, África y Asia, a prepararse para implementar acciones de REDD en el segundo período de compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, después del año 2012. Para ello, el FCPF incluye dos mecanismos: el mecanismo de preparación y el mecanismo de financiamiento. El FCPF opera como el mecanismo de preparación (con al menos \$115 millones comprometidos por 11 países donantes); en tanto que el mecanismo financiero correspondería a un Fondo de Carbono (con al menos \$55 millones comprometidos entre la Comisión Europea, Alemania, Noruega, el Reino Unido y The Nature Conservancy).

Bajo el mecanismo de preparación, el FCPF apoya a los países en la construcción de capacidades para la elaboración de escenarios de referencia de emisiones a partir del análisis del cambio en el uso de la tierra y de las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, la elaboración de las estrategias nacionales REDD; y el diseño de un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación para REDD. Las actividades de preparación incluyen dos fases: la formulación y la preparación. La fase de formulación incluye la elaboración de la Nota sobre la Idea de Plan de Preparación (R-PIN, por sus siglas en inglés) y la Propuesta de Preparación (R-PP, por sus siglas en inglés). 37 países han sido seleccionados en base a la presentación de sus respectivos R-PIN. La fase de preparación consiste en la ejecución de la Propuesta de Preparación. Los países exitosos en la etapa de preparación para REDD, podrán optar a participar bajo el mecanismo de financiamiento, (también conocido como Fondo de Carbono), el cual financiaría remuneraciones a los países seleccionados, según acuerdos concertados para reducir de manera evidente las emisiones por la reducción de la deforestación y la degradación forestal.

En octubre de 2008, el Comité de Participantes del FCPF acordó apoyar el Programa de Desarrollo de Capacidades para REDD, con el objetivo de promover la participación efectiva de los pueblos indígenas y de comunidades forestales en los procesos de preparación para REDD, de modo que se asegure una receptividad social y política. Con esa lógica, dicho Programa se orienta a que los pueblos indígenas y las comunidades forestales mejoren su conocimiento sobre cambio climático y sobre REDD; participen en los procesos de preparación de las estrategias REDD; y que participen y contribuyan efectivamente en las negociaciones internacionales sobre el papel de REDD en el régimen climático post-2012, entre otros.

des para REDD, con el fin de promover la participación efectiva de los pueblos indígenas y de comunidades forestales en los procesos de preparación para REDD, ha dado poco apoyo a este mecanismo.¹ Pero más relevante aún, es el hecho de que los gobiernos mismos no hayan estructurado de manera clara y decidida, mecanismos serios de consulta y participación como parte importante de los procesos de preparación de sus propuestas, incluyendo los R-PIN, pero sobre todo, los R-PP. Hay excepciones, como México, que ha incluido organizaciones de forestería comunitaria, aunque muchos menos, organizaciones indígenas.

A nivel de las estrategias nacionales desarrolladas con el FCPF, se pueden evidenciar algunos elementos en común que sobresalen en las propuestas de todos los países: el interés de los gobiernos por prepararse para implementar eventuales acciones de REDD; los inadecuados diagnósticos de deforestación y degradación basados en viejas lecturas; la manifiesta debilidad institucional para enfrentar la deforestación y degradación; falta de inclusión de pueblos indígenas y comunidades forestales de la región en las fases iniciales del desarrollo de las estrategias de REDD; la búsqueda en cada país, sin excepción, de vincular su estrategia de REDD a programas nacionales estratégicos ya existentes y de ahí, el énfasis en fortalecer las capacidades de las instituciones gubernamentales para la generación de indicadores, el monitoreo, la capacitación, la actualización de marcos legales, y el establecimiento de esquemas de incentivos.

¹ Entre julio de 2009 y junio de 2010, dicho Programa sólo contó con US\$200,000 para financiar actividades de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), el Comité Coordinador de Pueblos Indígenas de África (IPACC, por sus siglas en inglés) y la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) a través del Congreso General Kuna Yala.

El Programa Colaborativo ONU-REDD

El Programa Colaborativo de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación en Países en Desarrollo (Programa ONU-REDD) se guía bajo los principios del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas, los cuales hacen referencia específica a los derechos de los pueblos indígenas (Recuadro 2). Este enfoque ha marcado una diferencia con el proceso del FCPF en Panamá, el único país de la región en que trabajan ambos programas. El Programa en Panamá inició en enero de 2010 y finalizará en noviembre de 2012, y cuenta con \$5.3 millones. El Programa ONU-REDD contribuiría a la preparación y desarrollo de las capacidades para que Panamá pueda estar listo para implementar actividades que reduzcan las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, para finales de 2012.

El Programa ONU-REDD en Panamá se plantea dos resultados: El resultado 1 busca establecer la capacidad institucional para la coordinación y ejecución eficiente de un programa REDD, mediante el desarrollo de una estructura legal para la implementación del programa y el desarrollo de un marco operacional para implementar la estrategia de REDD; el fortalecimiento de capacidades institucionales; y el establecimiento de un sistema de pagos y distribución de los beneficios. El resultado 2 busca desarrollar y establecer la capacidad técnica para monitorear, medir, informar y verificar la reducción de emisiones de la deforestación y degradación de bosques, mediante el establecimiento de un sistema nacional de inventarios y monitoreo de bosques y carbono; el establecimiento de un escenario de emisiones referencial; y el establecimiento de un sistema de contabilidad del carbono y emisiones.

Recuadro 2
Programa Colaborativo de las Naciones Unidas
para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación en Países en Desarrollo

El Programa Colaborativo de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación en Países en Desarrollo (Programa ONU-REDD), es un esfuerzo conjunto entre la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El objetivo del Programa Colaborativo ONU-REDD es generar la transferencia de flujos de recursos requeridos para reducir significativamente las emisiones globales provenientes de la deforestación y la degradación de bosques, a través del fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos para preparar e implementar estrategias nacionales de REDD+, con la participación de los actores interesados, incluidas comunidades y pueblos indígenas dependientes de los bosques.

Este Programa se guía bajo los principios del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas, los cuales enfatizan un enfoque de trabajo basado en los derechos humanos con particular referencia a los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental, la gestión basada en resultados, y el desarrollo de capacidades. Entre 2010 y 2015, el Programa apoyaría a los países seleccionados en áreas como las metodologías de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), el compromiso de las partes interesadas y la repartición justa de los beneficios de REDD. Actualmente el Programa apoya los procesos de preparación para REDD+ en 9 países de África, Asia y América Latina (países piloto). El Programa ONU-REDD tiene dos componentes: i) Preparación e implementación de estrategias nacionales y mecanismos de REDD+; ii) Apoyo al desarrollo de soluciones normativas y enfoques estandarizados basados en criterios científicos para un instrumento REDD que se vincula con la CMNUCC.

Las acciones de los programas a nivel nacional dependen de las circunstancias específicas de los países piloto, de las causas subyacentes de la deforestación, del potencial de reducción de emisiones, del nivel de preparación para REDD y de otros factores. Sin embargo, las áreas de apoyo del Programa incluyen: Preparación para el monitoreo y evaluación de REDD; diálogos sobre REDD; construcción de alianzas; estrategia nacional de REDD (análisis de las causas subyacentes de deforestación, costos de oportunidad, evaluación de co-beneficios, evaluación de factibilidad de opciones para reducir la deforestación, arreglos institucionales y fortalecimiento de capacidades, etc.); apoyo para la implementación de acciones para REDD (arreglos para una mejor gobernanza forestal, fortalecimiento de marcos legales, fortalecimiento de programas de manejo y conservación forestal, desarrollo de empresas de forestería comunitaria para productos maderables y no-maderables, etc.); apoyo al análisis y armonización de políticas con la estrategia REDD, tanto dentro, como fuera del sector forestal; estructuración de un sistema de distribución de pagos asociados con REDD (estudios de caso sobre distribución equitativa de beneficios, mecanismos de pago e incentivos a escala local e internacional, desarrollo de indicadores de co-beneficios pro-pobres en REDD, desarrollo de un índice para evaluar la eficiencia y focalización de programas REDD, etc.).

La participación de los pueblos indígenas y comunidades dependientes de los bosques está normada a través de las directrices operativas del Programa ONU-REDD, no sólo se vinculan con las políticas propias de las Naciones Unidas, sino con marcos jurídicos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como los acuerdos relativos al consentimiento libre, previo e informado.

En el Programa ONU-REDD de Panamá, el enfoque de derechos, además de su momento de entrada en el país ha influenciado su trabajo. Tras protestas de los pueblos indígenas del país por la falta de inclusión en el proceso del FCPF durante el 2008 y 2009, el programa ONU-REDD ofreció una ruta alternativa para las actividades de preparación.

En este sentido, para el programa REDD en Panamá, se acordaron que la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), los congresos y los consejos generales serían las instituciones tradicionales de coordinación en el proceso de preparación para REDD en territorios indígenas. De hecho, durante 2009, se desarrollaron foros sobre cambio climático en Chiriquí, Los Santos, Veraguás, Herrera, Coclé, Bocas del Toro y Darién, en los cuales se abordó el tema de REDD.

Más allá de esto, el Programa prevé sensibilizar y consultar a los pueblos indígenas, utilizando los mecanismos internos contemplados en sus costumbres y legislaciones, acerca del establecimiento de una salvaguarda de cumplimiento de las políticas del Programa REDD en las comunidades indígenas.

Con esta lógica, la ANAM tendría que impulsar un proceso de diálogo y concertación con los pueblos indígenas, a través del mecanismo de consentimiento libre, previo e informado que identifique la situación jurídica, institucional, social y económica, y la adecuación de las medidas legislativas y administrativas, que evite cualquier forma de discriminación y exclusión de los pueblos indígenas con el fin de garantizar la participación real y efectiva en el Programa ONU-REDD.

El Programa REDD-CARD de GTZ-CCAD

La cooperación alemana está presente en Centroamérica y en República Dominicana con diferentes programas nacionales, regionales y proyectos sectoriales, apoyando acciones vinculadas a temas de cambio climático. En este contexto, la cooperación alemana ha identificado la necesidad de complementar el trabajo actual, en cooperación con los programas y proyectos existentes, acentuando la preparación de los países centroamericanos para que puedan participar activamente en la discusión y negociaciones sobre cambio climático, y el desarrollo e implementación de un régimen de REDD.

Dado que la cooperación alemana asesoró a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) en el diálogo regional sobre bosques, que derivó en 2008 en la aprobación del Programa Estratégico Regional sobre Manejo de Ecosistemas Forestales (PERFOR), en 2009, el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) financió una misión de factibilidad, con el fin de orientar el desarrollo e implementación de un programa regional para fomentar y fortalecer la cooperación en torno a REDD en Centroamérica. Como resultado, se aprobó el Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación en Centroamérica y República Dominicana (REDD-CARD) implementado por GTZ a través de la CCAD (Recuadro 3). Este programa se propuso como una primera fase, arrancando en septiembre de 2009 y finalizando en diciembre de 2012, con la opción de ampliarse a otras eventuales fases sucesivas. El programa cuenta con unos \$16 millones para impulsar las diversas actividades de la primera fase que finaliza en 2012.

A pesar que todos los países habrían presentado sus respectivos R-PIN al FCPF, en Centroamérica sólo Costa Rica y Panamá han avanzado hacia la presentación de sus respectivos R-PP. Esta es una consideración importante en la lógica del Programa REDD-CARD de GTZ, pues trata de apoyar a los países que todavía no están siendo financiados por el FCPF en la formulación e implementación de sus estrategias nacionales de REDD, sino también porque este programa busca alinearse con el proceso del FCPF y además, con el marco institucional del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). De hecho, el Programa REDD-CARD de GTZ busca enmarcarse en diversas estrategias regionales del Sistema de Integración en materia ambiental, tales como el Plan Ambiental Regional de Centroamérica (PARCA), la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC), la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS) y el PERFOR. Además de las estrategias regionales existentes, el Programa REDD-

CARD enfatiza varias oportunidades de un programa con enfoque regional, las cuales se relacionan con la posibilidad de evitar fugas entre los países, optimizando la capacidad de control y la conservación de ecosistemas boscosos transfronterizos; la reducción de costos por economías de escala en tareas técnicas relativas a investigación e información, líneas base y monitoreo; así como una mayor integración que posibilite mayor complementariedad y la posibilidad de una mayor visibilidad de la región. Sin embargo, el Programa tiene claro que los países también presionan por una relación bilateral, de modo que deberá articularse con los procesos regionales, pero partiendo de las particularidades de los procesos nacionales de preparación para REDD.

Bajo este Programa, la CCAD operaría como la contraparte política, responsable de gestionar y dar seguimiento a los acuerdos ministeriales en materia de REDD; y el Centro Agronómico

Recuadro 3 El Programa REDD-CARD de GTZ-CCAD

El Programa REDD-CARD de GTZ se ha estructurado en tres componentes: 1) el diálogo intersectorial; 2) los instrumentos de implementación sostenible; 3) y el monitoreo y reporte. Bajo el componente 1, las actividades se enfocan en la intersectorialidad, integrando los sectores de medio ambiente, forestal, agrícola, energía, infraestructura y finanzas, tanto en las estrategias nacionales, como en las regionales (ERCC, PERFOR, ERAS, etc.). Este componente fomentaría la participación de actores gubernamentales, sector privado y grupos marginados de la sociedad civil en espacios nacionales y regionales de diálogo. Asimismo, el componente 1 buscaría fortalecer la capacidad analítica de los gobiernos y de la sociedad civil ante los convenios internacionales.

El componente 2 incluye actividades de asesoría técnica para el desarrollo de instrumentos necesarios, que incluyen desde marcos legales para la regulación de transacción de emisiones, hasta programas de incentivos que garanticen la distribución equitativa de los eventuales beneficios de REDD.

Dado que la implementación de iniciativas REDD deben asegurar el monitoreo de las emisiones por deforestación y degradación, susceptibles de ser reportados a la CMNUCC, el componente 3 del Programa se orienta al fortalecimiento de capacidades técnicas y de coordinación de las instituciones regionales y nacionales responsables del monitoreo, verificación y reporte, para lo cual se capacitará a los puntos focales de las oficinas de cambio climático en las metodologías del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) para la elaboración de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero; así como el apoyo a CATIE y CATHALAC en el monitoreo de cambios en las existencias de carbono y en la cobertura del suelo, respectivamente.

Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), como contraparte técnica, considerando que se trata de una entidad de investigación y enseñanza de la cual, todos los países de la región son miembros. El CATIE desarrolla programas propios relacionados con los temas de bosques, cambio climático y biodiversidad. El Programa prevé la necesidad de que la contraparte técnica a cargo del CATIE, se complemente con las actividades desarrolladas por el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC), sobre todo, considerando sus capacidades de procesamiento, almacenamiento y difusión de información geoespacial, así como en procesos de capacitación y monitoreo de los cambios de cobertura del suelo. Por las expectativas que ha generado la elaboración del estudio sobre La Economía del Cambio Climático en Centroamérica, el programa REDD-CARD también plantea una eventual coordinación con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), pues los resultados de dicho estudio, podrían ser relevantes para los objetivos del programa. Asimismo, organizaciones como la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC), el Consejo Indígena de Centroamericano (CICA) y el Consejo Indígena Mesoamericano (CIMA), son vistos como actores y aliados claves para la implementación de las políticas regionales y nacionales impulsadas por el Programa REDD-CARD, sobre todo en aquellos territorios con grandes extensiones de bosque habitados por comunidades campesinas y pueblos indígenas.

El Programa REDD-CARD inició en el mes de marzo de 2010. Entre julio y septiembre se han desarrollado talleres nacionales en todos los países de Centroamérica (y en República Dominicana), con el objeto de orientar las acciones específicas iniciales.

ACTORES, ROLES Y POSICIONES EN TORNO A REDD+

Hay un enorme desbalance en relación al conocimiento y participación de los diferentes actores en los procesos de discusión sobre REDD. En esta sección se presenta un resumen de los diferentes grupos de actores en la región, los cuales han tomado diversas posiciones respecto a REDD, desde su oposición, hasta la inserción para aprovechar las oportunidades que ofrece REDD. Primero se discute el rol de actores gubernamentales, dado que juegan un rol clave como puntos focales de los procesos de preparación de las estrategias nacionales realizadas en su mayor parte con apoyo, o con el fin de obtener apoyo, de los programas regionales descritos en la sección anterior. Luego se discuten los retos que se han presentado para las organizaciones y redes de pueblos indígenas y comunidades forestales de la región, que son actores claves por su ubicación y rol en el manejo forestal. También se discute brevemente el papel de las organizaciones internacionales, que están teniendo un rol importante en los procesos de preparación, no sólo porque cuentan con conocimiento y acceso a foros claves, sino también porque han estado asesorando a gobiernos. Se incluye una discusión de ONG nacionales y locales, el papel de universidades y centros de investigación, y finalmente, una breve referencia al sector privado y los mercados voluntarios de carbono.

Actores gubernamentales

En los últimos años, en la región se ha visto un interés creciente en el mecanismo de REDD+ que corresponde con la mayor presencia del tema en las negociaciones globales de cambio climático y en la agenda internacional, así como por la disponibilidad de fondos para los procesos de preparación para REDD+, como por las

expectativas de poder acceder a recursos bajo un eventual mecanismo de REDD+.

Cada país de la región ha tomado su propia ruta hacia la apertura de la posibilidad de formar parte de REDD+. Costa Rica, que formó parte del grupo inicial de países promotores de lo que ahora se denomina REDD, también es fundador de la Coalición de Naciones de Bosques Tropicales (Coalition for Rainforest Nations) y desde mayo, la Secretaría Ejecutiva de la CMNUCC es ejercida por una costarricense. Esto, unido al hecho que en Costa Rica, el liderazgo en las negociaciones sobre cambio climático es realizado desde la cancillería, plantea un escenario de mayor impulso y protagonismo de Costa Rica en las negociaciones de cambio climático en general y de REDD+ en particular. Al interior del país, Costa Rica busca que REDD+ pueda apoyar una mayor ampliación de su programa de Pago por Servicios Ambientales, ya que los recursos movilizados internamente, como por ejemplo a través del impuesto a los combustibles, son insuficientes frente a la demanda de dicho programa, pero también por las capacidades institucionales, que le han permitido avanzar relativamente rápido en el desarrollo de su estrategia sobre REDD+.

México, por su parte, sobre la base de sus programas de forestería comunitaria y de pago por servicios ambientales, también ha podido avanzar de manera importante en la construcción de su estrategia sobre REDD+. Por cierto que la Estrategia Mesoamericana de Sostenibilidad Ambiental (EMSA, antes componente ambiental del Plan Puebla Panamá), suponía una ampliación de los programas de pago por servicios ambientales como los implementados en México y Costa Rica, en el resto de países de Mesoamérica, sin embargo, la EMSA ha sido fuertemente cuestionada por países de Centroamérica y no ha contado con el respaldo político en Centroamérica para asumirla plenamente. Con la finalización del financiamiento al Corredor

Biológico Mesoamericano, México pretendía que el lanzamiento de la EMSA en Centroamérica tuviera una mayor receptividad, sin embargo, eso no sucedió debido entre otros factores, al debilitamiento del proceso de integración centroamericano, pero también a una mayor complejidad en la correlación política de los países centroamericanos.

Con México y Costa Rica tomando la delantera en su preparación para REDD, los demás países de Mesoamérica mostraron una apertura creciente al tema de REDD+ solamente en los últimos dos años. Cada uno de los gobiernos se encuentra en un estado diferente de preparación para REDD, no sólo por haber iniciado el proceso en momentos distintos, sino también por que los puntos de partida en cada país son diferentes. México, Costa Rica, Panamá, e incluso Guatemala se encuentran en estados más avanzados en el desarrollo de sus estrategias, mientras que, Nicaragua, El Salvador y Honduras todavía están en las fases iniciales de sus estrategias.

En efecto, a pesar que Guatemala no ha generado su documento de R-PP, sí ha logrado avanzar sustancialmente en el desarrollo de una estrategia de REDD+, debido en parte, a iniciativas sobre REDD impulsadas por organizaciones internacionales de conservación y algunas ONG, y luego facilitadas y ampliadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Sin embargo, en Guatemala ya se han evidenciado problemas fundamentales para la implementación de un mecanismo de REDD+, tal como ocurre con la situación de tenencia de la tierra y de los derechos de carbono. La complicada situación de la tenencia de la tierra ha obstaculizado cualquier iniciativa exitosa, tal como ocurre con las concesiones forestales comunitarias en Petén, donde las organizaciones comunitarias no son las dueñas del bosque; pero también en los bosques comunales del resto del país, donde prevalecen situaciones

de tenencia tan diferentes, complejas y en algunos casos inseguras, que terminan complicando las iniciativas sobre REDD. A pesar de ello, varias iniciativas territoriales sobre REDD+ se están desarrollando, aunque no se tenga un R-PP, ni una definición más clara sobre las implicaciones en la tenencia y otros derechos de propiedad.

Por su parte, aunque Panamá generó su R-PP en 2009 y este fuera aprobado por el FCPF en junio del mismo año, el R-PP parecía más un plan de acción e investigación que una estrategia para sentar las bases institucionales para REDD. Con el cambio de gobierno en Panamá en 2009, el desarrollo de la estrategia sufrió virajes importantes, no sólo en el enfoque, sino también de cara a los procesos de consulta y participación, y a temas más de fondo como los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

En el caso de El Salvador, el cambio de gobierno también afectó el desarrollo de la estrategia, pues luego de la preparación del R-PIN en 2009, fue sólo en los meses recientes que el gobierno ha retomado el proceso, volcado a reforzar el eventual Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas, por su relevancia en disminuir el riesgo y la vulnerabilidad evidenciada por las más recientes tormentas tropicales en el país, todo lo cual evidencia la necesidad de un enfoque basado en la adaptación.

De manera similar, Nicaragua ha reactivado el desarrollo de su estrategia sobre REDD+ y la preparación de su R-PP bajo un enfoque de adaptación y bajo la perspectiva de que REDD+ esté enfocado en fondos, no en mercados de carbono. Dicho proceso está a cargo del Ministerio de Recursos Naturales y el Ambiente (MARENA), en coordinación con otras entidades estatales. En este proceso se ha planteado involucrar a los gobiernos regionales, a los Comités de Gobernanza Forestal (GOFOs, que incluyen la representación de los Gabinetes de

Participación Ciudadana), así como a comunidades indígenas y propietarios de bosques.

Finalmente, Honduras inició el proceso del FCPF en 2008, pero se estancó debido a los acontecimientos políticos en ese país durante el 2009, y solo recientemente se ha retomado el proceso en 2010, de modo que todavía está en sus fases iniciales.

A pesar de las diferencias en el estado de las estrategias sobre REDD+ y el continuo diseño que ocurre en cada país, se pueden identificar algunas tendencias entre todos los gobiernos. A continuación discutimos cuatro concordancias entre las diversas estrategias impulsadas: el uso de los fondos para fortalecer los programas y entidades estatales existentes y relacionado con esto, un enfoque en lo técnico, en vez de abordar las causas subyacentes de deforestación y degradación; sus posiciones en torno a la escala y líneas de referencia para REDD; el creciente interés en el plus de REDD; y finalmente, el patrón entre todos los gobiernos de limitar la participación de los actores gubernamentales a uno o dos sectores y sin articulación a nivel local o regional.

Fondos de preparación para fortalecer programas y entidades estatales

Lo primero que sobresale en una revisión de los procesos de preparación de las estrategias nacionales de REDD+, es la clara tendencia en toda la región de utilizar los fondos para fortalecer las entidades y programas gubernamentales y mejorar sus capacidades técnicas. Todos los países han vinculado sus estrategias de REDD a programas nacionales estratégicos y de ahí, enfatizan el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones gubernamentales para la generación de indicadores, el monitoreo, la capacitación, la actualización de marcos legales y el establecimiento de esquemas de incentivos. Por ejemplo, en México, la estrategia

de REDD+ se vincula principalmente al sistema nacional de pago por servicios ambientales y el sistema de forestería comunitaria.² De manera similar, Costa Rica busca utilizar REDD+ como mecanismo para apoyar su sistema de áreas de conservación y su programa de PSA. En Panamá, también se busca vincular REDD a la estrategia nacional ambiental desarrollada en 2004, la cual se inclina hacia mecanismos de mercado, proponiendo la implementación de ‘negocios verdes’ como modalidad de mitigar la presión sobre los bosques.

En Guatemala, hay una fuerte tendencia de buscar el fortalecimiento de las áreas protegidas, las cuales han sido declaradas áreas estratégicas para el cambio climático, y con ello, la intención de ampliar su extensión en el país. En este marco, REDD+ es visto como un mecanismo que puede posibilitar esto, lo cual explica en parte, que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) por ejemplo esté disputando los derechos de carbono de las concesiones forestales comunitarias, pues podrían significar un flujo de financiamiento importante para el fortalecimiento y ampliación de las áreas protegidas en la implementación de acciones de REDD+. Además de esto, el gobierno ha planteado que REDD puede también ser canalizado a dos programas de incentivos forestales (el Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación Forestal y Agroforestal, PINPEP; y el Programa de Incentivos Forestales, PINFOR). En Honduras, aunque el desarrollo de la estrategia es incipiente, el gobierno también ha mostrado la intención de utilizar fondos para fortalecer el sistema de áreas protegidas, y vincularlo con sus metas de producción y manejo forestal.

² En el R-PP de México, el presupuesto para la implementación de la estrategia le asigna 75% de los fondos a los componentes de MRV, en tanto que los recursos para financiar los programas de PSA y forestería comunitaria, estarían disponibles durante la etapa de implementación (post-2012).

La estrategia de REDD en El Salvador en cambio, estaría volcada a reforzar el eventual Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas. Bajo este Programa, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) espera insertarse en el Programa REDD-CARD que financia GTZ, bajo el cual esperaría avanzar en el levantamiento de una línea base, como una de las acciones inmediatas, pero buscando subsumir su estrategia de REDD+ a una lógica de adaptación al cambio climático, en la que los objetivos de gestión del riesgo y la reducción de la vulnerabilidad estarían por encima de cualquier modalidad de monitoreo, reporte y verificación referidas a REDD+. Como tal, es una visión totalmente distinta del resto de países y al parecer, habría respaldo para que REDD-CARD y el FCPF apoyen esta nueva lógica de preparación de una estrategia de REDD+.

Posiciones en torno a la escala y líneas de referencia

La unidad en la que se calcularán y se compensarán las reducciones de emisiones es un asunto clave en cualquier estrategia de REDD+. Dentro de esta unidad, habrá que establecer la línea base, es decir la proyección de deforestación y/o degradación futura contra la cual se calculen las emisiones reducidas (o remociones), y por ende, los beneficios. En varios países, este asunto aún está por determinarse, como en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. En Costa Rica, se busca establecer un mecanismo nacional, aunque la CMNUCC ha apoyado las opciones sub-nacionales bajo un esquema anidado (nested), donde acciones y modalidades subnacionales evolucionen a un esquema nacional. En Guatemala y México, se busca establecer un mecanismo que se implemente a nivel subnacional, con información compatible a nivel nacional. Este tema es clave, como componente crucial de la arquitectura nacional, con implicaciones importantes, incluyendo cómo se agrupan los distintos actores dentro del sistema, cómo se manejarán las fugas y la perma-

nencia, y cómo se asignará la responsabilidad y posibles beneficios de REDD. En todo caso, las implicaciones más de fondo tienen que ver con los compromisos que los gobiernos asuman de cara a las fuerzas motoras que impulsan las dinámicas de deforestación y degradación, los procesos de cambio de uso del suelo, así como las implicaciones de política para la gestión del territorio. Estas son implicaciones de economía política inherentes a las estrategias de REDD+ y la manera en que se asuman por los gobiernos y sus marcos de políticas públicas son escenarios todavía no abordados en los avances de las estrategias, aún en los casos más avanzados de preparación, como México, Costa Rica, Guatemala ó Panamá.

El creciente interés en el 'plus' de REDD

En la región se evidencian varios enfoques relativos al alcance de REDD (RED, REDD y REDD+). Con excepción de El Salvador y Costa Rica, en la región se observa un fuerte interés en el componente RED, es decir, en las actividades de deforestación evitada. Muchas de las actividades técnicas se están enfocando en este elemento, en parte, porque es una de las áreas con mayor posibilidad de fondos, además de existir metodologías mejor elaboradas para establecer las bases necesarias para recibir créditos bajo esta modalidad. Aunque muchas veces se incluye la 'degradación' como parte de las estrategias de REDD, en general existen menores avances metodológicos en este elemento, debido a la falta de información histórica relevante y a varios retos técnicos. A pesar de ello, la degradación forestal y la regeneración/restauración son componentes sumamente relevantes para la región, pero con excepción de El Salvador (en el caso de la restauración), no parece que estén teniendo el suficiente interés y/o creatividad para innovar la manera en que se inserten más decididamente en la formulación de las estrategias de REDD en la región.

Aunque no comenzó estando en el centro de atención en la región, ha surgido un mayor interés relacionado al '+' de REDD, incluyendo la conservación forestal, el manejo forestal sostenible y el aumento de las reservas de carbono. De hecho, ha existido un mayor interés en la conservación forestal y en la ampliación de las reservas de carbono (por ejemplo, a través de plantaciones), que en el manejo forestal sostenible, lo cual es entendible, dado el lobby de quienes apoyan las áreas protegidas, como en Costa Rica, con mucho interés en REDD+, pero sin mayores problemas de deforestación neta. Esto abre oportunidades políticas importantes, para opciones como la forestería comunitaria y en la medida que el '+' de REDD se fortalezca, sin embargo, otros actores podrían también influenciar las orientaciones de las estrategias, tal como podría ocurrir con las empresas madereras, que perfectamente podrían buscar influenciar las opciones de REDD+ con opciones de ampliación de las reservas de carbono y de manejo forestal sostenible, principalmente en países como Honduras y Nicaragua.

Falta mucha definición de cómo, y bajo qué condiciones, se implementará el '+' de REDD, pero se puede destacar que, a pesar de las limitaciones de ver más innovadora y estratégicamente el '+', en todos los países, sin excepción, los senderos políticos se están formando para poder aprovechar dicho '+' al punto de ser eventualmente adoptado como parte de un régimen de REDD. En El Salvador, el tamaño reducido de los bosques elimina la posibilidad de una iniciativa sustantiva de deforestación y/o degradación evitada, por ello la ampliación de las reservas de carbono sería un pilar fundamental para impulsar su agenda de restauración de ecosistemas.

En Honduras, país que cuenta con un sector forestal con un peso económico y político importante, no es de sorprender que se haya declarado la intención de vincular el manejo y

producción forestal con mercados internacionales de carbono, tal como se refleja en los lineamientos estratégicos del Plan de Nación 2010 – 2022. En dicho Plan se establece la meta de alcanzar 1 millón de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restauración y producción, accediendo al mercado internacional de bonos de carbono. Dado que la estrategia de REDD en ese país está en sus fases iniciales, no está claro el peso que tendrá el '+', especialmente considerando las altas tasas de deforestación. Sin embargo, declaraciones recientes de funcionarios del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, reiteran las metas de producción forestal vinculadas con mercados internacionales, pareciendo sugerir que el '+' podría tomar un rol importante en el país.

En Guatemala, a pesar del fuerte interés en la deforestación y degradación evitada, se ha involucrado el sector de producción y manejo forestal en las discusiones a través del INAB, y como se vio antes, se ha contemplado canalizar recursos a programas de incentivos forestales. Panamá también ha mencionado la importancia del '+', como parte de sus estrategias nacionales de REDD y de las políticas forestales del país, además de ser la modalidad más relevante desde la perspectiva de inclusión de los pueblos indígenas.

Costa Rica aduce que debería recibir créditos por sus 'acciones tempranas' de reducción de la deforestación, por lo que las tasas relativamente bajas de deforestación en las últimas décadas le dan un rol central a la conservación y al manejo sostenible de bosques. En Nicaragua, la conservación y el manejo forestal sostenible serían partes fundamentales de la estrategia de REDD+.

En México, el '+' se ha enfatizado para apoyar sus programas de forestería comunitaria, manejo forestal en general y conservación forestal, pero también es el único país de la región que

ha propuesto la eventual inclusión de las emisiones provenientes de la agricultura, es decir, la necesidad de avanzar hacia una estrategia de REDD++.

Participación de los actores gubernamentales y articulación con las escalas local o regional

Cuando se analizan los actores gubernamentales que lideran y participan en los procesos de preparación, se ve que las estrategias han sido diseñadas principalmente por las entidades ambientales y forestales, con poca participación de otras entidades sectoriales ó de los gobiernos estatales y municipales. El proceso de negociación ante la CMNUCC ha afectado esta dinámica, pues las entidades nacionales son las que han liderado las discusiones y han sido los puntos focales en las discusiones sobre REDD+, y por ende han conducido el proceso a nivel nacional. Igualmente importante es el hecho de que las agencias públicas nacionales no ambientales, ni forestales han participado poco en los procesos de negociación sobre cambio climático en general y sobre REDD en particular, aunque existen algunas diferencias, por ejemplo en México, donde ha existido un relativo mayor involucramiento de agencias públicas como las de energía y transporte.³

En México, la estrategia de REDD+ ha estado principalmente a cargo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en colaboración con el Instituto Nacional de Ecología (INE) y de los equipos de cambio climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Agricultura,

³ En la medida que la agenda de cambio climático tiene un mayor peso político en los países, otras entidades estatales se involucran más fuertemente, incluso desplazando el rol de las entidades ambientales, tal como ocurre con los ministerios de relaciones exteriores, que en México, Costa Rica y otros países, están involucrándose en los procesos de negociación sobre cambio climático, pues se perciben como procesos eminentemente políticos y diplomáticos.

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Otras instancias estatales y municipales tienen poca representación en este grupo y en general aún no han sido integradas en la estrategia nacional de REDD+. En Honduras, a pesar de que la nueva ley forestal requiere la participación de las municipalidades en la política forestal, estas entidades tuvieron poca o ninguna participación en el diseño del R-PIN que fue desarrollado principalmente entre las instancias ambientales y forestales, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y el ICF. Al igual que Honduras, en general ocurrió lo mismo en la preparación de los R-PIN de El Salvador y Nicaragua, lo cual es razonable, pues estos documentos no son más que un cuestionario que pretende plasmar una declaración de interés para participar en el FCPF. Si los procesos de elaboración de los respectivos R-PP en países como Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador involucran suficientemente a otras agencias estatales no ambientales, ni forestales, así como a los gobiernos municipales y regionales, es algo que todavía está por verse.

Nicaragua, donde se ha reactivado el proceso de preparación de la estrategia de REDD+ a cargo del MARENA, en coordinación con el INAFOR y el MAGFOR, hay una oportunidad potencial de involucrar a otras agencias gubernamentales. Al menos formalmente, Nicaragua ha planteado la incorporación de las autoridades territoriales de las regiones autónomas (Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN; y Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS), aunque pareciera que todavía no han sido involucradas de manera significativa. Esto también se puede observar en Guatemala, donde las políticas sobre bosques, cambio climático y el proceso de preparación para REDD+ han sido liderados por el MARN, a través del Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático. Aunque se han involucrado agencias departamentales en regiones clave, por ejemplo la ofi-

cina del CONAP en Petén, estos procesos siguen estando centralizados.

En Panamá, la estrategia nacional se ha realizado casi exclusivamente dentro de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y no está claro hasta qué punto buscará integrar a los gobiernos subnacionales y a las autoridades comarcales en el diseño de la estrategia de REDD+. En El Salvador, el R-PIN desarrollado bajo el anterior gobierno, principalmente se realizó en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El nuevo gobierno ha retomado el proceso con el FCPF y recientemente ha buscado un diálogo y coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por ser este último el responsable del sector forestal del país, aunque hay mayor claridad de las implicaciones sobre, y apertura hacia, diversos actores en territorios, que una estrategia de REDD+ tendría en el marco de un programa de restauración de ecosistemas.

Organizaciones, espacios y redes de pueblos indígenas y comunidades forestales

Hay una gran variedad de espacios, redes y organizaciones de los pueblos indígenas y comunidades forestales de la región, que por sus diversas estructuras, motivos y contextos han tenido articulaciones diferentes respecto a REDD+. A pesar de esto, se pueden identificar varios puntos que comparten en común, independientemente del tipo de organización o nivel de diálogo en el que participan. En efecto, prácticamente todavía existen deficiencias serias en términos de participación y socialización de conocimientos sobre REDD, tanto en espacios vinculados con las negociaciones internacionales, como también en el marco de programas regionales, estrategias nacionales o proyectos piloto. Esto se debe en parte, a la falta de apertura para que pueblos indígenas y organizaciones comunitarias participen más plena-

mente, pero también a sus propias debilidades internas, a la falta de un posicionamiento más claro y decidido, así como al hecho de que REDD+, a pesar de los desarrollos mostrados, todavía es un tema que en general está poco definido.

A pesar de esto, hay importantes y diferentes posicionamientos por parte de movimientos sociales, campesinos e indígenas, tanto entre países, pero también en ámbitos de alcance más regional y global. De hecho, el Foro Social de las Américas y Vía Campesina, son movimientos que han rechazado los mecanismos de REDD, pues según estas organizaciones, a través de estos mecanismos, no sólo no se enfrentan los graves impactos del cambio climático, sino que constituyen modalidades que promueven la mercantilización y privatización de los bosques y la pérdida de soberanía sobre los territorios (Foro Social de las Américas); en tanto que la protección de los bosques y la reforestación en zonas degradadas es obligación de los gobiernos que debería implementarse sin limitar la autonomía, los derechos o el control de los pueblos indígenas y campesinos (Vía Campesina).

Con otra lógica, el recién creado Foro Indígena Latinoamericano sobre Cambio Climático, emergió para buscar incidir en el proceso de negociaciones de la CMNUCC, particularmente en aquellos aspectos que atañen y garanticen los derechos de los pueblos indígenas contenidos en la Declaración Universal de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en los principios del consentimiento previo, libre e informado. Este Foro ha reclamado la falta de salvaguardas y medidas para asegurar sus derechos, tanto en las negociaciones sobre cambio climático a nivel internacional, como en la implementación de programas regionales y nacionales, incluyendo REDD+. En las declaraciones lanzadas por este

Foro, se denota una evolución del posicionamiento frente a REDD+, que va desde un rechazo inicial como mecanismo de mercado, hasta posicionamientos más recientes que muestran una relativa flexibilidad, si en REDD+ se consideran estos marcos jurídicos internacionales, mayores espacios de consulta y participación, así como posibles mecanismos asociados con fondos para REDD+. A pesar de la diversidad, las organizaciones que conforman este Foro no sólo tienen niveles de representatividad y legitimidad importantes, acaso con algunas excepciones, sino que también tienen bajo su control importantes extensiones de bosques en los países de la región, aunque en general, enfrentan diversas amenazas a sus derechos territoriales explicadas por las variadas dinámicas relativas al turismo, a las industrias extractivas como petróleo y minería, a megaproyectos de infraestructura y a la expansión de agrocombustibles, entre otros.

ACICAFOC es otra organización regional que desarrolla varias actividades sobre cambio climático y REDD+. Con el objetivo de hacer visibles a productores campesinos y organizaciones comunitarias e indígenas, así como para socializar y capacitar a comunidades rurales en el tema de REDD+. A partir de julio de 2010, ACICAFOC comenzó una iniciativa para fortalecer la participación de organizaciones de forestería comunitaria y pueblos indígenas en el desarrollo de estrategias de REDD+ en la región, incluyendo el involucramiento de organizaciones ejidales y de forestería comunitaria mexicanas. Este trabajo se complementa con el Programa de Apoyo a las Organizaciones Comunitarias en Guatemala y El Salvador, el cual busca fortalecer capacidades técnicas y organizativas para lograr una respuesta efectiva ante el cambio climático y el despliegue de iniciativas de mitigación y adaptación. En enero de 2010, ACICAFOC lanzó un programa regional de tres años para visibilizar el aporte de las comunidades indígenas y campesinas en la

mitigación y adaptación al cambio climático. Los programas de ACICAFOC han evidenciado la necesidad de mejorar los esfuerzos de una mayor y mejor socialización de la información sobre REDD+, pero sobre todo, de visibilizar el aporte de las comunidades rurales en el manejo forestal sostenible y la falta de representación de las comunidades rurales de la región en los procesos de discusión y preparación para REDD+. ACICAFOC aglutina a unas 60 organizaciones campesinas e indígenas de agroforestería comunitaria en Centroamérica, muchas de las cuales manejan extensiones importantes de bosque. Asimismo, es una organización con acceso a diversos espacios como la CMNUCC por constituir una entidad consultiva en el sistema de Naciones Unidas. Muchas organizaciones afiliadas a ACICAFOC han desarrollado esquemas relevantes de manejo forestal sostenible y comunitario.

En paralelo con organizaciones y foros regionales, hay una gran variedad de actores que trabajan a nivel nacional o territorial, donde a pesar de sus diferentes vinculaciones con REDD+, también se evidencia la necesidad de asegurar un mayor conocimiento, participación y representación de los pueblos indígenas y de las comunidades forestales. En Panamá por ejemplo, ha habido fuertes conflictos relativos con las consultas, o con la ausencia de estas, en el proceso de preparación de la estrategia de REDD+.⁴ Actualmente, COONAPIP tiene una

participación formal en la preparación de la estrategia de REDD dentro del marco del Programa ONU-REDD, además, de haber recibido fondos del FCPF para realizar consultas y talleres de socialización en los territorios indígenas del país. Además, tiene previsto realizar su propia estrategia de REDD, con o sin el gobierno. La representación y participación siguen siendo cruciales para COONAPIP, sobre todo porque todavía no se han definido el tipo de consultas que realizará el gobierno, la naturaleza de la participación y de representación indígena, o si se respetarán los principios de consentimiento previo, libre e informado. Esta situación es crítica, sobre todo considerando que COONAPIP aglutina a las diversas comarcas y autoridades indígenas territoriales, con esquemas propios de gobierno y de elección de autoridades indígenas, y con una importante seguridad jurídica en la tenencia de la tierra bajo su control. Justamente por esta razón es que los pueblos indígenas organizados en COONAPIP no aceptan intermediarios que les representen y asumen una responsabilidad directa en los procesos de incidencia, consulta y participación en temas como REDD+.

La fuerte incidencia realizada por COONAPIP contrasta con la situación general en Guatemala, donde una gran variedad de organizaciones con niveles variados de representatividad hablan en nombre de los pueblos indígenas del país. Recientemente se ha creado la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales, que aglutina 11 organizaciones forestales y es percibida por el gobierno y otros actores clave como la entidad más representativa de las comunidades forestales, incluyendo los pueblos indígenas. Sin embargo, su reciente creación y los distintos intereses y tipos de organizaciones que la integran, no dejan claro hasta qué punto podrá ser representativo. En todo caso, aún está

⁴ A mediados de 2009, el gobierno panameño presentó el R-PP en Ginebra, afirmando que contaba con el respaldo de los pueblos indígenas. Según COONAPIP, el único intercambio que ellos tuvieron con ANAM fueron algunas informaciones de avance del R-PP, de modo que eso no podía considerarse como consulta con los pueblos indígenas. Como consecuencia, representantes de las comarcas indígenas expresaron al gobierno sus preocupaciones por la falta de consulta en sus comunidades. Según el presidente de COONAPIP, la representación de los pueblos indígenas es un problema recurrente que enfrentan. Aunque tenían previsto participar en la cumbre de Copenhague en Diciem-

bre de 2009, decidieron no hacerlo porque el gobierno no los incluyó como parte de la delegación oficial.

muy lejos de la fuerte organización y representación indígena existente en Panamá.

Otras organizaciones comunitarias de la región se encuentran en distintos estados de representación de pueblos indígenas y enfrentan diversos retos. En Honduras por ejemplo, se ha afirmado que existen problemas al interior de MASTA, una de las organizaciones más presentes en las discusiones sobre REDD con el gobierno, quien alega falta de representatividad de la organización, presentando desafíos importantes en lograr una consulta legítima con las comunidades indígenas en la Mosquitia hondureña.

Otro ejemplo se puede observar en Guatemala, con la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), que se ha articulado de forma muy particular con REDD. En 2007, ACOFOP comenzó a desarrollar un proyecto piloto de REDD en las concesiones forestales comunitarias, con el apoyo de Rainforest Alliance. Después de tres años de preparación, varios obstáculos legales y metodológicos han impedido su progreso, dejándoles todavía lejos de generar bonos de carbono para ser colocados en el mercado voluntario. Si bien ACOFOP ha sido una de las organizaciones comunitarias con una relación más directa con REDD y con una experiencia clave en el manejo forestal en Petén, no ha participado de manera significativa en el desarrollo de la estrategia nacional de REDD+, la cual incluye a Petén como área prioritaria. Por otro lado, la mayoría de la información técnica relacionada con el desarrollo del proyecto piloto, ha sido manejada más por las organizaciones internacionales, aunque también se han desarrollado diversas discusiones entre directivos y miembros de las concesiones forestales comunitarias con apoyo de dichas organizaciones. Esta experiencia resalta el hecho de que la falta de un mayor conocimiento, de mecanismos de participación y representación, también ha sido un factor importante no

sólo para las organizaciones comunitarias en el proyecto piloto, sino también para la definición de la estrategia de REDD en general, y en temas más específicos, como los derechos de carbono.

A su vez, pero en otro sentido, Guatemala contrasta con la manera en que se vienen desarrollando iniciativas locales en México, pues en este último país, ya existen experiencias de manejo forestal que han logrado comercializar certificados de carbono, tal como ocurre con la Asociación Civil Servicios Ambientales de Oaxaca (SAO), que desde 2008 logró colocar certificados en el mercado voluntario de carbono en México, certificados avalados por PRONATURA. En México existe una gran diversidad de experiencias e iniciativas bajo la lógica de diversificar las opciones de generación de ingresos provenientes del manejo forestal comunitario, más allá de los productos forestales maderables, el turismo y los recursos obtenidos bajo el programa de PSA. El interés en comercializar certificados por la reducción de emisiones es parte de estos esfuerzos. Organizaciones como el Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental (GAIA; la cooperativa AMBIO y diversas organizaciones locales apoyadas por el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible (CCMSS), impulsan proyectos piloto en distintos Estados como Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y el Estado de México bajo una lógica de preparación para participar en la implementación de mecanismos de REDD+ en México. Existen muchas otras organizaciones e iniciativas locales bajo esta lógica.

Sin embargo, en el proceso de preparación de la estrategia mexicana de REDD+, la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI) no ha sido incorporada de manera significativa en el proceso. Esta es una falencia importante, dada la amplia experiencia que ha tenido la CDI en la realización de consultas con los pueblos indígenas en México. El gobierno tampoco ha delineado pla-

nes de coordinación entre CONAFOR y la CDI, y tampoco integra la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Si bien la inclusión de la CDI no resuelve los problemas de participación, consulta y representación indígena, podría ser una manera importante para comenzar a institucionalizar los temas indígenas en la estrategia mexicana de REDD+.

Por lo demás, pareciera existir una tendencia en la región que pone en duda la inclusión de los pueblos indígenas y el respeto a sus derechos en los procesos de preparación para REDD+.

Organizaciones de conservación y otros organismos internacionales

Tal vez el grupo de actores con mayor peso en el proceso de REDD+, después de los programas regionales y los gobiernos, son las organizaciones internacionales de conservación como Rainforest Alliance, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), Greenpeace, The Nature Conservancy (TNC) y Conservación Internacional (CI). Estas organizaciones están jugando roles diversos en el desarrollo de las estrategias de REDD+ en los países de la región. Si bien hay un abanico de intereses, motivos y abordajes sobre REDD+ que van desde énfasis más conservacionistas, hasta aquellos que se enfocan más en temas como los derechos, el posicionamiento de estas organizaciones, en varios casos, les ubica en un rol no sólo de asesoramiento, sino de posibles intermediarios de recursos financieros para acciones de REDD+. La mayor parte de estas organizaciones participan sistemáticamente en foros y talleres sobre REDD+, como parte de sus actividades organizacionales, sin embargo, en lugar de implementar programas específicos sobre REDD, en general han ampliado programas pre-existentes. Por medio de talleres, diálogos e incidencia en espacios clave, estas organizaciones aprovechan su acceso al plano internacional de negociaciones, su conocimiento del

tema y los resultados de proyectos en otras regiones del mundo para participar y aportar a los procesos sobre REDD+ en la región. No obstante, como se discute a continuación, al interior de los países y en la región, tienen roles y pesos distintos.

Una de las organizaciones más activas en Mesoamérica es Rainforest Alliance, que ha desempeñado un rol líder en Guatemala como promotor y asesor clave a los proyectos pilotos en ese país. REDD se ha insertado dentro de sus programas que tienen un fuerte énfasis en vincular las prácticas productivas de comunidades con mercados, que por medio de certificaciones sociales y ambientales, buscan demostrar beneficios comunitarios, ambientales y sociales. Aunque han buscado implementar proyectos piloto en otros países, como en Honduras, se han encontrado con varios obstáculos, pero también han logrado insertarse en alianzas con otras organizaciones de conservación nacionales, tal como ocurre en El Salvador con SalvANATURA, organización local que desarrolla capacidades de certificación con sellos avalados por Rainforest Alliance de cara a certificar emisiones evitadas de carbono en bosques, cafetales y en agricultura sostenible en países de Mesoamérica (México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua). Su conocimiento e involucramiento directo con el diseño e implementación de los proyectos piloto, le ha permitido un rol clave en asesorar varios procesos de preparación para REDD+ en la región. En México, Rainforest Alliance ha tenido un rol activo en el proceso de preparación de la estrategia de REDD+, pero también apoyando el Proyecto Scolel Te en Chiapas, un proyecto de captura carbono a través de la restauración de bosques y sistemas agroforestales, que también busca la ampliación de los medios de vida de las comunidades rurales participantes.

WWF, TNC y Greenpeace, han tenido un mayor involucramiento en México. Estas organiza-

ciones han participando activamente en diversos espacios de diálogo y han tenido una participación sistemática en el Grupo de Trabajo sobre REDD, que anteriormente formó parte del Consejo Técnico Consultivo de Servicios Ambientales y que más recientemente, fue prácticamente absorbido con la instauración del Comité Técnico Consultivo para la elaboración de la Estrategia Nacional de REDD+ en México. Fuera de México, Greenpeace no parece tener mayor presencia en los temas de REDD. En cambio, TNC ha tenido un rol importante en Guatemala, país en el que, junto con CI y Rainforest Alliance, participan en los espacios de diálogo nacional, pero también apoyan a la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático. Además, estas organizaciones participan en el Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático en dicho país.

Rainforest Alliance, CI y TNC han participado en el desarrollo de estrategias de al menos tres países distintos, evidenciando su fuerte presencia e incidencia en la región. Aunque no se menciona la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de manera oficial, en el desarrollo de los programas, esta organización inter-gubernamental también ha tenido un rol importante en la región, participando en foros clave y en ocasiones, participando de manera directa en proyectos pilotos de REDD+. Al igual que RA, TNC busca generar proyectos de venta de carbono a través de mecanismos de REDD+. En Costa Rica, TNC asesora al gobierno en la estrategia de REDD y además participa en el equipo negociador de cambio climático. En Belice, TNC también desarrolla proyectos piloto de REDD con el objeto de propiciar la venta de derechos de emisión en mercados de carbono.

Además de la influencia que han tenido en los procesos de REDD, algunas organizaciones han iniciado programas que apoyan agendas de incidencia política de pueblos indígenas y de

organizaciones de forestería comunitaria de la región, sobre todo, en temas centrales vinculados con REDD+, tal como ocurre con los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Estos programas tienen diversas orientaciones respecto a los varios niveles de REDD, ya sea territorial, nacional o internacional. Con esta lógica, la UICN, desarrolla actividades de capacitación a líderes de organizaciones territoriales, junto con ACICAFOC y otras organizaciones territoriales en Centroamérica. Además de UICN, organizaciones como CI, TNC y algunos cooperantes como GTZ (Sur-América) y Action Aid (Guatemala), han apoyado actividades del Foro Indígena Latinoamericano de Cambio Climático, enfatizando los temas de derechos, posicionamientos políticos del Foro frente a REDD+, así como apoyando la participación de líderes indígenas miembros del Foro, en eventos paralelos en las reuniones de la CMNUCC.

ONGs nacionales y locales

El rol de las ONG nacionales y locales es bastante diverso, pues se vinculan de maneras diferentes con las iniciativas de REDD+. No obstante, es posible identificar que un grupo relativamente importante de organizaciones de la sociedad civil han acumulado rápidamente un bagaje de conocimiento significativo sobre REDD+, principalmente aquellas organizaciones que se vinculan de manera directa con procesos de diálogo, con procesos de formulación de las estrategias de REDD+, con iniciativas piloto, ó incluso, porque tienen una visión crítica sobre REDD+. En ese sentido, existe un amplio espectro de organizaciones nacionales y locales con una acumulación importante de conocimiento sobre REDD+ en la región, tal como ocurre con el CCMSS, GAIA y SAO en México; la Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno (CALMECAC), la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), ACOFOP y Defensores de la Naturaleza en Guatemala; Mosquitia Pawisa

Apiskamopawi (MOPAWI) y Mosquitia Asla Takanka (MASTA) en Honduras; PRISMA, SalvaNATURA y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) en El Salvador; el Centro Humboldt y el Centro para la Autonomía de los Pueblos Indígenas (CADPI) en Nicaragua; la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR) y ACICAFOC en Costa Rica; y la Fundación Dobbo Yala en Panamá.

A pesar de esto, todavía se evidencia una falta de conocimiento e información sistemática sobre REDD+ por parte de organizaciones locales, tanto de pueblos indígenas, como de organizaciones y comunidades forestales. Como se vio antes, esto se evidencia mucho más en los intentos de consulta realizados en Panamá, pero también en México, donde el gobierno no ha querido avanzar en esfuerzos de consulta, aduciendo que REDD+ está todavía en definición y que por ello, el gobierno no tiene mayores detalles de qué ofrecer a las comunidades forestales y a los pueblos indígenas. En esta lógica, los esfuerzos de capacitación e información desarrollados por ACICAFOC y apoyados por organizaciones como RRI, UICN y PRISMA, no sólo buscan contribuir a superar este vacío de manera directa con sus organizaciones socias, sino también, y sobre todo, busca construir una agenda propia para que los temas de derechos sean incorporados en iniciativas sobre REDD+ impulsadas a escala local, nacional y regional.

En este contexto, pueden verse al menos tres grupos de organizaciones nacionales y locales frente a REDD+ en la región. El primer grupo, se refiere a las organizaciones que están trabajando con proyectos pilotos de REDD+, como por ejemplo el CCMSS y CALMECAC. El segundo grupo comprende organizaciones con una vinculación directa en el desarrollo de las estrategias nacionales de REDD+, como FUNDECOR en Costa Rica, con rol privilegiado en el desarrollo de la estrategia nacional, tal vez

sin igual en la región. En México y Guatemala también se ha visto una incorporación significativa de organizaciones nacionales, aunque no consideran que el proceso haya sido muy marcado.

Finalmente, el tercer grupo de organizaciones incluye aquellas que tienen un rol crítico frente a REDD+, y en general, lo vinculan con temas relativos a la gobernanza forestal y territorial, con los derechos territoriales y con los medios de vida y la dimensión cultural, entre otros, tal como ocurre con MOPAWI, MASTA, el mismo CCMSS, la Red Indígena de Turismo Alternativo de México (RITA), la Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI, en inglés) y PRISMA, entre otros. También existen organizaciones que tienen una marcada oposición a iniciativas de REDD+, como Centro Humboldt, la UNES, organizaciones afiliadas a Vía Campesina y al Foro Social de las Américas, entre otras.

Universidades y centros de investigación

Con alguna posible excepción, todos los países con estrategias relativamente desarrolladas han incorporado de manera importante el conocimiento que existe en las universidades y centros de investigación en los países. En general, las universidades concentran su contribución en componentes técnicos que son básicos para la implementación de REDD+, tal como ocurre con las metodologías de medición de carbono, el monitoreo y la verificación. Esto incluye a la Universidad del Valle de Guatemala, que ha sido líder en el tema de carbono y que cuenta con un laboratorio especializado para la medición de contenido de carbono en muestras vegetales y de suelos. Esta universidad tiene varios años de experiencia en medir carbono para diferentes proyectos alrededor del país y además, trabaja en colaboración con organizaciones nacionales e internacionales.

En México, varias universidades y centros de investigación contribuyen de manera directa con investigaciones para alimentar el proceso de formulación de la estrategia de REDD+ liderada por el gobierno. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), El Colegio de Post-Graduados (COLPOS), el Colegio de México (COLMEX) y el Programa Mexicano de Carbono (PMC) han contribuido en el desarrollo de la estrategia nacional contenida en el R-PP, sobre todo en aspectos técnicos de carbono, deforestación y degradación. Aunque con una menor incidencia en la formulación de la estrategia mexicana, la Universidad Autónoma de México (UNAM) también ha desarrollado investigaciones y análisis sobre causas de la deforestación, estimaciones de biomasa en ecosistemas forestales, degradación forestal y otros temas como el rol de la forestería comunitaria y su impacto para detener la deforestación.

Desde Panamá, CATHALAC ha desarrollado investigaciones para el desarrollo de la estrategia nacional de REDD y su experiencia con programas regionales como SERVIR (Sistema Regional de Visualización y Monitoreo) le ubica en una posición estratégica que le posibilita tomar un rol muy particular en la región, que posiblemente estaría muy vinculado al monitoreo, reporte y verificación, sobre todo considerando programas como el de REDD-CARD, que por economías de escala, pretende fortalecer capacidades de entidades regionales para el MRV en la región centroamericana.

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) ha contribuido en el proceso para desarrollar la estrategia de REDD+ de Costa Rica. Con apoyo de GTZ y del Proyecto FINNFOR (Forests and Forest Management in Central America, con financiamiento de Finlandia), CATIE seguirá apoyando el proceso nacional y en los meses recientes, también ha comenzado a colaborar con el proceso de preparación para REDD en Honduras, donde

prevé apoyar con investigaciones, fortalecimiento de capacidades locales y capacitación. CATIE forma parte de alianzas mundiales de trabajo sobre REDD+, entre ellas, REDD-Net (con ODI, RECOFTC y UCSB) financiada por NORAD y el Banco Mundial; así como actividades de capacitación y formación apoyadas por la Iniciativa Paz con la Naturaleza y el Centro Latinoamericano de Competitividad para el Desarrollo Sostenible (CLACDS). El CATIE también es apoyado por el Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles (CIMS), la Embajada Británica en Costa Rica e Inwent (organización alemana sin fines de lucro con operaciones a nivel mundial dedicadas al desarrollo de recursos humanos, la formación avanzada y el desarrollo de diálogos). La trayectoria académica del CATIE y las capacidades especializadas en la región, le han permitido incursionar rápidamente en diversos temas relativos con REDD+. Varios especialistas de la región en estos temas, han sido formados y/o han tenido estancias académicas en el CATIE.

En Nicaragua, a pesar que el proceso de preparación para REDD+ recién se está reactivando, existen universidades como URACCAN y centros como NITLAPAN y CADPI que están incursionando en el tema de REDD+, aunque inicialmente con una visión crítica, enfatizando más que temas técnicos, aquellos temas relativos a los derechos de comunidades y pueblos indígenas, lo cual se explica más por los procesos de titulación de tierras en la RAAN, que por el interés de REDD+ como tal. Esto abre oportunidades importantes, pues no sólo en Nicaragua, sino también en el resto de países, hay una notable ausencia de esfuerzos analíticos y de insumos de conocimiento provenientes desde las ciencias sociales, para alimentar de mejor manera los procesos de preparación de las estrategias sobre REDD+, sus repercusiones sociales e institucionales, así como los esfuerzos de capacitación e incidencia que desarrollan diver-

sas organizaciones locales, nacionales y regionales.

Finalmente, existen diversas acciones a nivel regional, centroamericano y mesoamericano, impulsadas por algunas organizaciones que operan a varias escalas simultáneamente y que tienen perfiles institucionales diferentes. Entre esas organizaciones están RRI que opera globalmente, pero que tienen un programa de trabajo en la región; UICN, que apoya a diversas organizaciones locales-territoriales en Mesoamérica y se vincula con otros diversos actores en la región; y PRISMA, que promueve encuentros de diálogo multiactores e impulsa un programa de investigación regional, entre otras. Es común que organizaciones como estas desarrollen esfuerzos conjuntos de diálogo, de investigación, de incidencia y de capacitación en procesos diversos conducidos por organizaciones como de forestería comunitaria como ACICAFOC y organizaciones indígenas diversas en la región. En los últimos años, acciones como estas también incluyen la colaboración e intercambios con organizaciones mexicanas como el CCMSS, GAIA y Red MOCAF, entre otras.

Sector privado, mercados voluntarios de carbono y REDD+

En lo que va del proceso de preparación para REDD+ en Mesoamérica, resalta la ausencia de los sectores empresariales en los países de la región. Tanto en los programas de preparación para REDD (FCPF, ONU-REDD y REDD-CARD), como en iniciativas locales de tipo piloto, hay una marcada ausencia de sectores empresariales. Particularmente importante es la marcada ausencia de los sectores empresariales vinculados con las dinámicas de deforestación (y degradación), a pesar de ser actores centrales en cualquier intento serio de reducción de emisiones. Esta no es una omisión cualquiera y no se resuelve con estrategias de participación ó

consulta, pues supone confrontar los intereses detrás de los viejos (fronteras agrícolas y ganaderas) y nuevos procesos de deforestación en la región (turismo, minería, infraestructura, agrocombustibles, etc.).

Esto plantea una contradicción importante, pues las entidades estatales encargadas de preparar a los países para la implementación de acciones de REDD+, sin un rol medianamente comprometido de los principales actores de la deforestación y degradación, pone en duda cómo se garantizará una reducción real de emisiones por deforestación y degradación. Sin embargo, esto no significa que acciones de REDD+ no puedan ser implementadas por sectores empresariales, pues el ‘+’ de REDD, particularmente la ampliación de reservas de carbono podría ser un componente mucho más atractivo para sectores empresariales, sobre todo considerando que bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), existen proyectos diversos con acciones forestales en países como Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua (reforestación y conservación de bosques en cuencas críticas para la generación hidroeléctrica), ó propuestas como la del sector cafetalero en El Salvador, que pretende colocar certificados de reducción de emisiones en mercados voluntarios de carbono. México es relevante en este sentido, pues ya deja ver un posible sendero de mayor involucramiento de sectores productivos importantes vinculados con la agricultura a gran escala, lo cual ayuda a explicar el interés en ampliar la estrategia mexicana a un REDD++, pero también porque México es el país con mayores avances en el desarrollo de un mercado interno de carbono.

El interés en acceder a mercados y/o fondos relativos al carbono no es nuevo en la región. Durante la década de los noventa, en Centroamérica se esperaba que bajo las acciones de implementación conjunta y el MDL, se pudieran financiar acciones de mantenimiento y cap-

tura de carbono en actividades forestales. Costa Rica apostaba a un flujo importante de recursos bajo este tipo de actividades a través de su Oficina Costarricense de Implementación Conjunta. Aunque se hicieron propuestas regionales, como las Tierras Kyoto, que incluían territorios con potencial para aforestación, reforestación y regeneración inducida, en la práctica esto no tuvo mayores avances, pues de hecho, en la región no existe ningún proyecto de este tipo bajo el MDL. Sin embargo, diversas empresas de la región si han logrado desarrollar diversos proyectos en el sector eléctrico, incluyendo algunos de generación hidroeléctrica que incluyen algunas acciones forestales, bajo enfoques de manejo de cuencas.

Por otra parte, existe un conjunto de proyectos forestales piloto directamente orientados a la generación de certificados de reducción de emisiones. Esa parece ser justamente la lógica de Scolel Te, proyecto que luego de estar impulsando acciones de reforestación, pretende dar paso a otras actividades como la reducción de la deforestación y degradación. Este también puede ser el caso de Pico Bonito, un proyecto en Honduras promovido por ECOLOGIC, donde se han planteado acciones de reforestación junto con acciones de deforestación evitada, aunque estas últimas no se han implementado.

En Panamá existen al menos tres proyectos implementados por Forest Finance y uno por Forest Friends, mientras en Nicaragua se ha implementado el proyecto Paso Pacífico, basado en acciones de reforestación y regeneración natural en zonas de pastos (unas 400 ha) con certificación de la CCBA (Climate, Community and Biodiversity Alliance).[1] También es notoria la iniciativa del Smithsonian Tropical Research Institute de Panamá, que apoya directamente actividades de deforestación evitada (entre otras), en la comunidad Impeti, aunque sin utilizar ningún estándar, ni terceras partes involucradas. TNC busca establecer un proyec-

to que incluye deforestación evitada en varios sitios relativamente pequeños en Panamá, sobre todo, en áreas protegidas.

En Guatemala, el Grupo Agroindustrial de Occidente ya ha generado créditos de carbono por medio de al menos una plantación forestal. También en Costa Rica, Bauminvest implementa un proyecto de reforestación certificado por Carbon Fix. Muchos de estos proyectos ya han generado créditos de carbono en bosques o plantaciones de propiedad individual, o en concesiones forestales privadas.

A nivel centroamericano, el Centro Científico Tropical (CCT), junto con el Consejo Indígena de Centroamérica pretende implementar proyectos piloto en territorios indígenas (todavía no identificados), bajo el CCBA y el Voluntary Carbon Standard (VCS). Esto es parte de una iniciativa más amplia del CCT, que también incluye un proyecto piloto en Ecuador. Se puede mencionar también un proyecto piloto de TNC que está en sus fases iniciales, que busca implementar REDD y restauración en distintos manglares y humedales (en áreas protegidas) en El Salvador, con certificación del VCS y/ó del CCBA. Una experiencia de Pax Natura y FUNDECOR en Costa Rica, ha logrado certificación de CCBA sobre deforestación evitada, aunque básicamente se limita a beneficios sociales y ambientales, y no certifica la reducción de emisiones.

La mayoría de proyectos de carbono forestal en la región trabajan con ONGs que pretenden vincular a comunidades o grupos locales con empresas internacionales que buscan obtener créditos para mejorar su imagen empresarial, o bien, que buscan objetivos especulativos a través de estrategias ‘pre-regulatorias’ en las que compradores adquieren bonos baratos, anticipándose a precios más altos bajo futuros sistemas regulados.

Pero estas iniciativas no deben verse al margen del contexto en que evolucionan los mercados de carbono, ni de los factores que los influyen, tal como ocurre con las negociaciones mismas de cambio climático, con las dinámicas políticas por ejemplo en los Estados Unidos, así como con el contexto de crisis económica.

En efecto, las iniciativas del sector privado detrás de los mercados regulados y voluntarios de carbono respondieron con mucha mayor cautela a partir de la falta de una mayor claridad en las reglas y criterios en el régimen de cambio climático a escala mundial, regional y nacional, no sólo por la falta de mayores resultados en las negociaciones de la CMNUCC, sino también por las correlaciones políticas que determinan los desarrollos de legislación clave sobre cambio climático en países como Estados Unidos.

Por ejemplo, a mediados de 2010, fracasó la iniciativa de ley sobre cambio climático en el Senado estadounidense, poniendo en duda las posibilidades de una nueva legislación antes de la COP-16 de la CMNUCC en Cancún, México. El hecho de que a corto plazo sea poco probable la aprobación de una ley general sobre cambio climático en los Estados Unidos, tiene implicaciones importantes para que las negociaciones en la CMNUCC avancen, pero también tiene implicaciones directas para los mercados voluntarios de carbono, incluyendo a los compradores especuladores ('pre-regulados').

De manera más global, el contexto de crisis económica también ha influenciado el comportamiento de los mercados de carbono, pues la contracción de la producción repercutió en una disminución de la demanda de derechos de emisión y certificados de carbono, con excepciones como la del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea. Ante la crisis económica, los inversionistas privados y las entidades financieras vinculadas con los mercados de carbono también redujeron el apalancamiento financiero y reorientaron inversiones hacia activos y mercados financieros más seguros que los mercados de carbono. Sin embargo, es difícil confirmar los impactos de las fluctuaciones en el mercado internacional en los proyectos en Mesoamérica, pues los proyectos se realizan de forma bilateral y la mayoría de los proyectos de carbono forestal en la región aún se encuentran en etapas iniciales, ó en el mejor de los casos, en estado de negociación.

Además de la volatilidad de los mercados de carbono, particularmente los mercados voluntarios, un obstáculo importante a futuro está del lado del 'suministro' de los derechos de emisión y certificados de carbono. Si bien hay una nueva tendencia de proyectos de carbono forestal en Mesoamérica, la mayoría se limitan a reforestación y forestación, lo cual tiene limitaciones de escala importantes, sobre todo si se les compara al potencial de REDD+ en zonas habitadas por comunidades forestales y pueblos indígenas.

Tendencias y temas críticos en la preparación para REDD+ en Mesoamérica

Los resultados de las etapas iniciales de preparación para REDD+ en Mesoamérica demuestran orientaciones claras, así como una serie de limitaciones y ausencias que de no abordarse, pueden resultar altamente perjudiciales para comunidades forestales y pueblos indígenas, pues muchos de los territorios bajo la mirada para implementar acciones de REDD+, son habitadas y/o están bajo su control. Por esta razón, los enfoques y acciones iniciales que orientan la preparación para REDD+ son determinantes para las comunidades, no sólo en términos de potenciales beneficios, sino, sobre todo, por los impactos sobre sus medios de vida, su situación de derechos y las condiciones de gobernabilidad en los territorios en que se implementen acciones de REDD+.

Si bien Mesoamérica presenta un conjunto de condiciones propicias para avanzar hacia una agenda de REDD+, será imperativo profundizar en aspectos más complejos y conflictivos que le son inherentes, como las causas subyacentes de la deforestación y la degradación forestal, pues sus dinámicas determinan muchos de los contextos de gobernanza en diversos territorios de Mesoamérica.

Asimismo, los procesos de preparación para REDD+ en Mesoamérica, evidencian que temas medulares, como la equidad y la justicia social requieren de un esfuerzo más decidido para atender adecuadamente las implicaciones relativas a los derechos de propiedad de los bosques, los derechos de uso y acceso, así como los derechos de manejo y exclusión por parte de las comunidades forestales, indígenas y campesinas, pero también las implicaciones derivadas

de REDD+ sobre las estrategias de vida, todo lo cual constituyen elementos centrales para que REDD+ contribuya a mejorar la gestión y gobernanza territorial.

Es precisamente, en este contexto que Mesoamérica ofrece una oportunidad valiosa, pero sobre todo oportuna para replantear un enfoque de REDD+ desde la perspectiva de comunidades forestales, indígenas y campesinas, principalmente considerando que las acciones iniciales de los procesos de preparación ya comenzaron a marcar un sendero generalizado de diseño, institucionalización e implementación de REDD+.

Sin embargo, el panorama es complejo y está fuertemente marcado por la incertidumbre de un nuevo régimen de cambio climático (nuevos compromisos de reducción de emisiones, nuevos marcos regulatorios, nuevos mecanismos financieros, etc.), particularmente considerando el fracaso de la COP-15 en Copenhague en 2009, las pocas expectativas de mayores avances en la próxima COP-16 en Cancún, así como también por el fracaso de iniciativas de ley sobre cambio climático en el Senado estadounidense, que tiene implicaciones directas en los mercados de carbono.

A continuación se discuten brevemente las principales tendencias y temas críticos del proceso de preparación para REDD+ en Mesoamérica, temas que son fundamentales en el desarrollo de estrategias e implementación de acciones de REDD+ que busquen beneficiar a comunidades forestales y pueblos indígenas.

Preparándose para REDD+: Gobiernos y agencias técnicas primero

Las estrategias nacionales de REDD+ que vienen desarrollando los gobiernos de la región han tenido su mayor énfasis en el fortalecimiento de programas gubernamentales existentes y se han llevado a cabo principalmente dentro de las oficinas centrales de las entidades ambientales y forestales. También se evidencia un fuerte énfasis en el fortalecimiento institucional y en la elaboración de estudios técnicos de las entidades ambientales y forestales directamente vinculadas con REDD+. Sin embargo, hay una insuficiente atención prestada a temas cruciales, como las causas subyacentes de la deforestación y la degradación forestal. Esto se debe en parte, al hecho de una convergencia entre intereses de mercado, promovidos a través de instrumentos como REDD+ e intereses de los gobiernos por aprovechar oportunidades de financiamiento en un eventual régimen de REDD+. Esto tal vez no se refleja suficientemente en los componentes que se plasman en los diversos documentos del proceso de preparación, pero sí se reflejan en las áreas de enfoque que han emergido en la realidad: el énfasis en los aspectos técnicos y la relativa poca atención que se le ha dado a las causas subyacentes de deforestación y degradación. Los estudios técnicos son un elemento clave para sentar las líneas de base y avalar la venta de certificados de reducción de emisiones, pues no sólo permiten respaldar el monto de emisiones reducidas, sino también identificar los territorios y situaciones con mayores potenciales de reducción de emisiones. En estos aspectos, la lógica del mercado y los intereses del Estado tienen una convergencia importante.

Si bien esta convergencia es poderosa, y además predominante en los procesos de preparación, existe un abanico más amplio de intereses que también explican el énfasis en lo

técnico y otras debilidades en la preparación para REDD+. La situación de incertidumbre sobre los recursos que realmente estarán disponibles bajo un eventual mecanismo de REDD+ y las condicionalidades que le acompañen, ha generado una actitud cautelosa de parte de los gobiernos. Sin tener más concretos los beneficios y condicionalidades, difícilmente los gobiernos entrarán en negociaciones con otros sectores nacionales, negociaciones que podrían tener altos costos políticos. En este sentido, el énfasis en lo técnico también se puede entender como uno de los componentes de menor resistencia y controversia en los procesos de preparación. Igualmente, las agencias estatales más vinculadas con los aspectos técnicos de REDD+, pueden avanzar en su preparación, pues en principio están menos sujetas a las dinámicas políticas, y en menor medida a críticas y conflictos.

En el caso de los programas regionales de preparación para REDD+, interesa que los procesos avancen, pero también buscan asegurar estrategias coherentes y protegerlas de críticas de la sociedad civil, de pueblos indígenas y de comunidades forestales. En algunas ocasiones, el FCPF ha estado claramente consciente de las deficiencias de los R-PP y ha tratado de mejorarlos, sin embargo estos esfuerzos han sido limitados, debido en parte, a la necesidad de lograr una rápida preparación. Esta situación se complica más, dado que el FCPC funciona en relación directa con los gobiernos y aunque las estrategias nacionales son limitadas, los donantes las aceptan, pues a pesar que los gobiernos no propongan algo mejor, tampoco están dispuestos a que los procesos de preparación de REDD+ queden estancados.

Por su parte, a pesar que organizaciones internacionales de conservación todavía no han institucionalizado programas específicos sobre REDD+ en la región, sí han estado activamente involucradas en actividades de incidencia (na-

cional, regional e internacional, como sucede con las COP de la CMNUCC), y se han posicionado como organizaciones que asesoran a los gobiernos, y en algunos casos a ONGs nacionales y locales. Algunas de estas organizaciones prevén operar también como intermediarias entre el financiamiento global y diversos actores a nivel nacional y territorial.

La preparación para REDD+ se da como un proceso de continuo diseño, lo cual dificulta analizar los últimos desarrollos en los avances de las estrategias y en algunos casos en la región, todavía están en sus fases iniciales. A pesar de esto, puede observarse que se está comenzando a perfilar una serie de debilidades en los procesos de preparación para REDD+, las cuales tienen una alta relevancia, porque establecen un sendero político e institucional para la manera en que se implementen acciones de REDD+ en los próximos años. Si en esta etapa de preparación y definición de las estrategias, no se incorpora un abordaje robusto sobre las causas de la deforestación, la degradación y la regeneración natural, la incorporación efectiva de los pueblos indígenas en los procesos y retos institucionales, y un claro énfasis en la equidad y justicia social, REDD+ no será un mecanismo efectivo, ni equitativo. Discutimos brevemente estos tres temas a continuación.

Preparándose para REDD+, pero evadiendo ó posponiendo confrontar la deforestación y degradación

Mesoamérica continúa perdiendo sus bosques. A nivel nacional, las tasas de deforestación están disminuyendo en relación con los niveles de deforestación que experimentó la región en las décadas anteriores. Sin embargo, la región experimenta una transición forestal, donde el crecimiento económico, la migración a centros urbanos y las oportunidades de empleos no

agrícolas llevan a menores presiones sobre los recursos forestales y a menores tasas de deforestación.

Si bien se intuyen de manera general los factores que han llevado a la reducción de la deforestación, así como su persistencia e intensificación en algunos territorios de Mesoamérica, en general, también existe una marcada ausencia de esfuerzos sistemáticos que analicen las causas subyacentes de estos procesos, su interrelación con dinámicas más amplias, incluyendo los marcos de políticas públicas y el peso relativo en los flujos de inversión privada nacional, regional y transnacional.

Por ejemplo, en México, uno de los países con una visión más avanzada sobre REDD+ en la región, a pesar de haber recibido una evaluación relativamente positiva del TAP a su propuesta de R-PP, se resaltó el inadecuado análisis de la deforestación y la degradación forestal en ese país, debido a la falta de diferenciación entre las distintas regiones y las diferentes causas de deforestación; la falta de vinculación con el marco de políticas y no tomar suficientemente en cuenta las fuerzas del mercado y los impactos de la migración. Esto es un reto común en toda la región, incluyendo a los países con mayores capacidades de información y análisis, como México y Costa Rica, reto aún mayor en aquellos países que no cuentan con información sistemática, ni actualizada, ni con esfuerzos analíticos sobre las dinámicas de la deforestación y la degradación.

Definitivamente, si se propone abordar la deforestación y degradación, un análisis robusto de sus causas será imprescindible y deberán profundizar a nivel sub-nacional en territorios específicos para entender los distintos contextos y factores que impulsan la deforestación y degradación en cada país. Es lógico pensar que esfuerzos como estos tendrían que informar las etapas de diseño de las estrategias de REDD+,

no obstante, la tendencia parece ser al contrario, pues los procesos de preparación para REDD+ y las estrategias impulsadas por los programas de preparación, arrancan sin un análisis elemental de las causas subyacentes de la deforestación y degradación. Por supuesto, que esto responde a diversos intereses, como se mencionó atrás.

¿Preparándose para REDD+ ó para el ‘+’ de REDD?: Relevancia para la adaptación y la inclusión

El creciente interés en el “+” de REDD en los países de Mesoamérica no es un asunto menor, ni trivial. No sólo está adquiriendo una relevancia importante en los procesos de preparación de los países de la región, sino que explica mucho el rol de de diversos actores en eventuales acciones del ‘+’ de REDD bajo sus componentes de conservación, manejo forestal sostenible y ampliación de las reservas de carbono. En efecto, estos componentes son fundamentales para cualquier estrategia de REDD en Mesoamérica, prácticamente sin excepción, aunque sus enfoques responden a lógicas distintas. México trabaja su estrategia de REDD+ fuertemente basada en el papel de la forestería comunitaria por su rol en el manejo forestal sostenible, incluso ha planteado el interés en el segundo “+” (REDD++), por la relevancia de las emisiones provenientes de la agricultura; Costa Rica, por el peso de su Sistema Nacional de Áreas de Conservación (conservación forestal); y El Salvador, que plantea la necesidad de ampliar las reservas de carbono en el marco de un Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas, por su importancia en un esfuerzo más amplio de adaptación al cambio climático. Guatemala y Nicaragua por su parte, también visualizan el potencial de esquemas de REDD+ fuertemente vinculados con la reducción de vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático.

Prácticamente en toda Mesoamérica, las zonas con mayor superficie de bosque coinciden con territorios bajo el control de pueblos indígenas ó están habitadas por comunidades forestales, ejidatarios ó campesinos. A su vez, estos territorios coinciden con las áreas protegidas, por lo cual el ‘+’ de REDD tendría implicaciones directas, tanto en lógicas que prioricen la conservación forestal y/o el manejo sostenible de bosques.

Si bien estos son posicionamientos formales en las intenciones políticas de vincular REDD+ con estrategias más amplias, pareciera que los programas de preparación todavía no incorporan claramente este conjunto de intenciones, vinculaciones y posicionamientos políticos de los países. Sin embargo, la convergencia entre los países de incluir el “+” de REDD, presenta una oportunidad interesante y oportuna para la región, sobre todo considerando la necesidad de una articulación más estratégica entre mitigación y adaptación, pues Mesoamérica es una región de alta vulnerabilidad. En este sentido, esfuerzos más agresivos e innovadores pueden propiciar en Mesoamérica esquemas de REDD+ que sean más relevantes, más visionarios y más incluyentes, que pueden incluso contar con respaldos políticos más amplios de lo que parecen tener actualmente.

El desafío institucional para REDD+: Más allá de la institucionalidad estatal

La posibilidad de abordar los temas subyacentes de la deforestación y la degradación requiere un abordaje integrado para abarcar los múltiples factores y escalas de acción que confluyen en estas dinámicas. Esto a su vez, pasa por un conjunto de desafíos de tipo institucional. Sin embargo la revisión del proceso de preparación para REDD+ evidencia que el proceso y las vinculaciones institucionales que se están construyendo son limitados, pues están

involucrados pocos sectores estatales y locales-territoriales, además del gran peso en aspectos técnicos.

Hay un amplio consenso entre sectores ambientales y conservacionistas, que será necesaria una mayor coordinación inter-sectorial para diseñar una estrategia coherente de REDD+. Sin embargo, el progreso en esta área es débil. En Guatemala, por ejemplo, diversos ministerios y sectores se han convocado por medio de la Comisión Inter-Institucional de Cambio Climático, grupo temporal creado por acuerdo gubernamental para comenzar a desarrollar políticas coordinadas sobre cambio climático, incluyendo REDD+. Sin embargo, un ejemplo de los intereses profundamente contrapuestos entre sectores emergió justamente después de las primeras reuniones de este grupo: la prórroga de una concesión petrolera, firmada por el Ministerio de Energía y Minas y vetada por el MARN, que al final fue aprobada por el gobierno.⁵ Otros países de la región han formado entidades parecidas a la de Guatemala, como la Comisión Inter-Secretarial de Cambio Climático en México, la cual integra a varios de los Ministerios claves del país, aunque no incluye a la Comisión de Desarrollo Indígena; ó el Grupo Nacional de Trabajo sobre REDD+ recién creado en Honduras, que además de entidades gubernamentales, también integra representantes del sector privado, de la sociedad civil y de la academia. En Costa Rica, varios de los sectores

⁵ La concesión petrolera está ubicada en un territorio caracterizado por una fuerte ingobernabilidad, así como por la existencia de fuertes dinámicas de deforestación y por actividades ilícitas, y tiene implicaciones particularmente relevantes para el sistema subnacional de REDD que se está desarrollando en Petén. La respuesta del gobierno ha enviar 'batallones verdes' a esa región, para enfrentar poderes fácticos y hacer cumplir la ley ambiental. Este tipo de dinámicas es un ejemplo de los desafíos para enfrentar los problemas de gobernanza en distintos territorios de Mesoamérica, problemas frente a los cuales, las estructuras de gobernanza locales-territoriales son insuficientes, frente a nuevos y más complejos conflictos.

claves no están vinculados de manera directa con la estrategia de REDD. Estos desarrollos, a pesar de sus debilidades, en general son los más avanzados que en el resto de países de la región, donde no ha habido mayores discusiones entre los sectores clave sobre REDD ó REDD+. Esta situación pone en duda la voluntad política para lanzar esfuerzos serios para reducir la deforestación y la degradación.

Otra dimensión no menos importante relacionada al desafío institucional, tiene que ver con la incorporación de los distintos niveles de gobernanza, no solamente de manera horizontal entre sectores y actores diferentes, sino también de forma vertical para incorporar las entidades territoriales y locales, tanto gubernamentales, como no gubernamentales. En Mesoamérica se observa que las estrategias de REDD+ están siendo diseñadas casi exclusivamente dentro de las oficinas centrales de las autoridades ambientales y/o forestales. Para lograr una coordinación efectiva, será extremadamente importante no sólo la consulta, sino también la participación directa de los demás niveles de gobierno, incluyendo las autoridades territoriales y municipales, que están marcadamente ausentes de los procesos iniciales de preparación.

Más allá de las implicaciones de gobernanza referida a las entidades gubernamentales, también hay que destacar el rol estratégico que juegan los pueblos indígenas y las comunidades forestales en el manejo sostenible y la conservación de los bosques de la región. Como se discutió antes, existe una falta de inclusión de los pueblos indígenas y comunidades forestales en estos procesos. La falta de incorporación de la CDI en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de México es solamente un ejemplo de un patrón más amplio de la inadecuada representación y consulta con los pueblos indígenas y comunidades forestales. Esta omisión está presente desde las negociaciones internacionales, hasta los programas regionales, nacio-

nales y proyectos piloto. Aunque todos los países han iniciado procesos o planes de consulta y participación, lo han hecho de manera simultánea al desarrollo de las estrategias nacionales, excluyendo a estas comunidades de los pasos iniciales. Es de alta importancia que la participación de los pueblos indígenas y comunidades forestales sea formalizada e institucionalizada como uno de los primeros pasos en la preparación de REDD+, en lugar de abordarse como otro elemento más en una lista de componentes ó de requisitos que incluyen talleres de consulta en el proceso de preparación. Las razones no solamente son de índole ética, sino también estratégicas y políticas, puesto que importantes extensiones de bosques en Mesoamérica están bajo su control. De hecho, los bosques más estables y con más carbono se encuentran en territorios indígenas, que a su vez coinciden con áreas protegidas, pero además están fuertemente amenazados ó impactados por las distintas dinámicas de deforestación. Por ello, los pueblos indígenas y las comunidades forestales son actores imprescindibles para la implementación de acciones de REDD+.

También hay que destacar el rol que desempeñan los pueblos indígenas y las comunidades forestales en el manejo de sus bosques, tanto a nivel comunitario, como territorial, así como las instituciones informales en que se basan.⁶ Las estrategias de REDD+ se han enfocado casi exclusivamente en los marcos legales nacionales, en las normas y reglas estatales que influyen en el manejo forestal. Con esta lógica, también se está reactivando el interés, que rápidamente puede pasar a ser una tendencia, de fortalecer los sistemas de áreas protegidas y parques nacionales, así como sus planes de manejo

⁶ Instituciones informales se refiere a la serie de reglas y normas no oficiales que influyen en la organización del uso y manejo del bosque, que además reflejan el entendimiento compartido de su uso entre distintos usuarios forestales.

y con estos, las regulaciones basadas en los objetivos de conservación.

Esta tendencia corre el riesgo de impactar los medios de vida locales, sobre todo considerando que en la región, los abordajes sobre derechos relativos a REDD+ se limitan casi exclusivamente a la propiedad de los bosques y del carbono, lo cual fácilmente puede ser la ruta para reforzar intentos previos de reorganizar el manejo de bosques a partir de enfoques estatales simplificados de tenencia, que no toman en cuenta los complejos sistemas locales de tenencia y de manejo, que responden a las perspectivas y necesidades de las comunidades.⁷

El reconocimiento de estos sistemas no solamente evita impactos negativos, sino que presenta una oportunidad importante para fortalecer la gobernanza forestal y territorial por medio de una convivencia de mecanismos de gobernanza formales e informales. Se ha demostrado una alta capacidad de gobernanza forestal cuando las instituciones informales, junto con las formales, reconocen y promueven los derechos de las comunidades forestales, tal como se puede evidenciar en las experiencias de forestería comunitaria en México y Guatemala. Sin embargo, en el contexto de una institucionalidad formal débil, los gobiernos pareciera que están evadiendo ó ignorado sus mejores aliados en una gobernanza efectiva que se requerirá para implementar acciones de RED, de REDD ó de REDD+. Por lo tanto, constituye una dimensión central, pues las instituciones formales e informales también tienen una alta importancia para el ejercicio de los derechos de las comunidades forestales y de los pueblos indígenas, tanto en los derechos de uso, de acceso, de extracción, de manejo y de enajenación de sus territorios y recursos. Estas son ausen-

⁷ En Latinoamérica, varias reformas de tenencia forestal no han logrado sus objetivos, precisamente por no tener en cuenta el importante rol que juegan las instituciones informales que construyen los actores locales en los territorios.

cias marcadas en las etapas iniciales los procesos de preparación para REDD+ en Mesoamérica.

Las preocupaciones por la equidad y la justicia social en la preparación para REDD+

La cuestión de equidad y justicia social en el tema de REDD+ gira en torno a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades que habitan y/o dependen de los bosques. Sin embargo, buena parte de estas preocupaciones parecen limitarse a la distribución de beneficios derivados de los eventuales flujos financieros para REDD+, que en todo caso estarían disponibles en la etapa de implementación (2012 en adelante). En esto vale la pena tomar en cuenta que existen distintas posiciones: Los que rechazan, afirman que la amenaza real es que REDD+ sea utilizado como mecanismo para restringir los derechos de las comunidades tanto a sus tierras, como a los recursos, y en general a los derechos territoriales, que son parte de los elementos constituyentes de sus medios de vida y cosmovisiones en un sentido más amplio. Si bien la implementación de acciones sobre REDD+ no está exenta de amenazas reales, también es cierto que plantean una oportunidad inédita para fortalecer y ampliar los derechos, los medios de vida y las condiciones de gobernanza forestal y territorial.

En este contexto, está claro que la protección de los derechos de las comunidades es de fundamental importancia y la expansión de los mismos podría y debería ser uno de los ejes principales de ampliación de oportunidades para un mecanismo de REDD+, pues es de particular importancia para promover objetivos más amplios de equidad y justicia social. Por esta razón, no sólo es desalentador, sino también preocupante que las acciones de preparación hasta el momento no hayan tenido un mayor enfoque en los derechos. Esto no quiere decir

que han estado completamente ausentes, pues la estrategia de México ha integrado la forestería comunitaria como componente importante de su estrategia nacional. Honduras también ha incluido la forestería comunitaria como parte de su estrategia nacional. Sin embargo, con excepción de México, la forestería comunitaria ha quedado relegada a un perfil sumamente bajo en estas estrategias.

En casos como Panamá, los conflictos territoriales y de tenencia, tanto dentro como fuera de las comarcas indígenas, ni siquiera se mencionan dentro de las propuestas al FCPF. En México se mencionan los conflictos de tenencia, pero no se proponen planes para resolverlos. Como se sabe, en los países de la región (tal vez con la excepción de Costa Rica), existen fuertes conflictos territoriales y complejas dinámicas de disputa por la tenencia que requerirán esfuerzos rigurosos y sostenidos de resolución, sin embargo, son problemas que han estado prácticamente ausentes en las discusiones de las estrategias sobre REDD+.

Los derechos: Énfasis estratégico en la preparación de las comunidades para REDD+

Otro elemento preocupante es la tendencia de discutir los derechos de tenencia únicamente en el sentido de la formalización de relaciones de propiedad individual, pues por un lado, esto deriva en buscar el fortalecimiento y expansión de las áreas protegidas; y por otro, fácilmente puede reforzar la restricción de derechos comunitarios y/o de pueblos indígenas. Prácticamente, ningún proceso nacional de preparación de la estrategia de REDD+ contiene planes para fortalecer los derechos de las comunidades ó pueblos indígenas en el acceso, uso, extracción y manejo de los recursos. Incluso, la discusión sobre los derechos de carbono ha amenazado estos derechos, tal como ocurre en Guatemala. Aunque los acuerdos para la construcción

de un 'bono de carbono ó un certificado de reducción de emisiones' parece inocua, tiene un enorme potencial de influenciar el ¿cómo?, ¿para quién? y ¿para qué? se use el bosque, es decir, el derecho de carbono está profundamente vinculado al conjunto de derechos sobre los bosques, y por ende, de los medios de vida, prácticas productivas y culturas de las comunidades. En Petén, distintas interpretaciones sobre los derechos de carbono, han complicado e imposibilitado que las concesiones forestales comunitarias accedan a mercados internacionales de carbono. Los concesionarios comunitarios reclaman el derecho de compartir los derechos de carbono con el Estado, pero no se ha esclarecido este asunto todavía.

Este ejemplo ilustra la importancia de los derechos de carbono, porque podría ser un instrumento que retrocede los avances de derechos alcanzados a lo largo de las décadas previas. Es de fundamental importancia que los pueblos indígenas y las comunidades forestales reconozcan esta amenaza. Sin embargo, al mismo

tiempo, los derechos de carbono, dependiendo de cómo se institucionalizan, pueden ser una oportunidad estratégica de fortalecer, reclamar y ampliar derechos comunitarios, como un elemento clave e indivisible, como parte de una canasta más amplia de derechos de las comunidades forestales y pueblos indígenas.

Estos son temas que requieren apoyos, plataformas a varias escalas y acompañamiento sistemático a las comunidades, redes y organizaciones, tanto indígenas, como de forestería comunitaria, no sólo para evitar que las discusiones sobre equidad y justicia social se limiten, como en el pasado reciente, a los enfoques convencionales que se reducen a mecanismos financieros de pago por servicios ambientales y/o servicios ecosistémicos, que aunque son necesarios, claramente son insuficientes para abordar la complejidad de preocupaciones y los asuntos de fondo en disputa frente a la implementación de acciones de REDD+, pero también frente a otras dinámicas territoriales, desde la perspectiva de las comunidades.

Anexo

Actores y posiciones en torno a REDD+ en Mesoamérica

Si bien el interés por REDD es común en la región, las condiciones y estrategias de cada país están marcadas por una gran heterogeneidad que hacen necesaria una profundización en las situaciones nacionales antes de identificar tendencias regionales. Cada país de Mesoamérica se encuentra en un estado diferente de preparación y tienen sus propias orientaciones para la construcción de una eventual estrategia de REDD.

Esta sección discute el despliegue de las diversas acciones frente a REDD que se encuentran en procesos de continuo diseño. Asimismo, se busca identificar los principales actores y posiciones que se están tomando en cada país. Como se verá, existe entre los países de la región un enorme desbalance en la presencia de actores no gubernamentales y las posiciones respecto a REDD, ya sean a favor o en contra, lo cual se debe, en gran medida, a los distintos estados de las estrategias REDD.

En México, Guatemala, Costa Rica y Panamá, los mayores avances han generado un debate más plasmado sobre REDD y una amplia gama de actores que han tomado diversas posiciones respecto a la iniciativa. En cambio, las estrategias de Nicaragua, El Salvador y Honduras están menos desarrolladas y por ende, existe mucho menos debate y presencia de actores no gubernamentales. A continuación se discuten de manera sintética, los diferentes países dentro de estos dos grupos, describiendo los actores más relevantes y sus roles en los procesos de preparación para REDD.

MÉXICO

En México, la estrategia REDD+ surge en un contexto de varias experiencias y condiciones que parecen ser propicias para el posible desarrollo de un REDD que beneficiara a comunidades forestales. El país se ha vuelto referente internacional por el peso y rol de la forestería comunitaria, y sobre todo considerando las diversas experiencias que vinculan los medios de vida y los derechos de las comunidades forestales con el manejo forestal sustentable. Además, el país cuenta con una capacidad institucional en el gobierno relativamente fuerte, y ha desarrollado una experiencia importante con un sistema de pagos por servicios ambientales a nivel nacional. Estas experiencias han sido útiles no solamente para el desarrollo de REDD para México sino también para otros países. A pesar de estas ventajas y de las grandes extensiones de bosque (unas 64 millones de hectáreas), no sólo enfrenta altas tasas de deforestación, sino también enormes retos territoriales, sociales y culturales, por ejemplo de cara a integrar a los pueblos indígenas y otras comunidades forestales del país en una estrategia REDD.

La construcción de la estrategia Mexicana de REDD+

Estas condiciones y experiencias han sentado las bases para el desarrollo de una estrategia REDD relativamente avanzada, que se ha venido desarrollando con el apoyo del FCPF, entre otros. El R-PP de México fue aprobado en Marzo de 2010, y a pesar de algunas debilidades, el

plan contaba con una revisión relativamente positiva del equipo TAP. El desarrollo de las propuestas para el FCPF nos permite dar una lectura generalizada sobre el panorama actual del proceso REDD impulsado por el gobierno.

Los fuertes de la propuesta incluyen la construcción de la estrategia REDD sobre la base de programas y experiencias existentes, principalmente los de forestería comunitaria y pago por servicios ambientales. El enfoque en forestería comunitaria constituye los inicios de una ruta que podría integrar a las comunidades forestales en el desarrollo de la estrategia, y por ende, traer beneficios concretos. El gobierno también muestra interés de aprovechar las experiencias nacionales que han utilizado mecanismos parecidos a REDD para beneficiar a comunidades forestales, como la del Scolel Te, que se menciona específicamente en las propuestas al FCPF. En esta línea, el gobierno busca el establecimiento de un sistema nacional de contabilidad para el mecanismo REDD+ capaz de promover tres diferentes niveles de implementación: nacional; subnacional (que puede ser estatal en zonas prioritarias) o regional; y por proyecto.

Asimismo, las diversas dependencias gubernamentales involucradas en REDD (CONAFOR, SEMARNAT, INE, CONANP) coinciden en que la principal fuente de financiamiento para este esquema debiera ser la de los mercados de carbono, ya sean regulados o voluntarios, y también destacan la importancia de fondos internacionales y de instituciones multilaterales para atender el “+” de REDD. Una de las propuestas para crear un mecanismo inicial de distribución interna y de financiamiento de REDD viene de las dependencias gubernamentales, las cuales sugieren canalizar REDD a través de varios programas gubernamentales existentes. CONAFOR ha propuesto en el R-PP aprovechar la experiencia derivada de los programas Pro-Árbol, PROCYMAF,

PROCOCODES y el Programa de Servicios Ambientales (PSA) para ensayar la implementación de un esquema REDD nacional.

En cuanto a la definición de bosque, así como los “territorios en riesgo de deforestación”, el gobierno está usando como referencia el Índice de Riesgo de Deforestación desarrollado previamente por el INE y ECOSUR en el esquema del Programa de PSA. Existen otros intereses entre las dependencias gubernamentales que también influyen en la definición de territorios y tipos de bosque para REDD+, por ejemplo, CONANP está interesada en integrar las áreas naturales protegidas, incluyendo todo los tipos de vegetación dentro del esquema REDD y SAGARPA lo está en incluir usos del suelo diferentes al forestal (principalmente agroforestales y silvopastoriles). SEMARNAT y CONAFOR enfatizan la elección de tierras forestales que tengan los mayores atributos en cuanto a densidad de carbono y biodiversidad.

En general, los actores gubernamentales buscan probar que se ha logrado una reducción de la deforestación y la degradación a fin de colocar a México dentro de los mercados internacionales de carbono, así como demostrar que se ha favorecido la conservación y el incremento de las reservas forestales de carbono. Una vez demostrado esto, en consecuencia, podrían lograr financiamiento para sus propios programas y esquemas, como sería el caso de CONANP, que busca cooperar conjuntamente con CONAFOR y SEMARNAT para alcanzar este fin.

A pesar de estos avances, el R-PP contiene varias debilidades importantes. Como señala la revisión del equipo TAP, el diagnóstico de deforestación no es adecuado debido a la falta de diferenciación entre las distintas regiones y las diferentes causas de deforestación; la falta de vinculación con el marco de políticas, las fuerzas del mercado y los impactos de la migración; y la falta de una atención adecuada a los proce-

sos de degradación forestal. El equipo de revisión del R-PP resaltó que no se consideraron los grupos e instituciones con más experiencia en materia de pueblos indígenas del país. Además, el proceso de preparación en México no incluyó información sobre la representatividad de los grupos consultados y no incluyó planes para la socialización de información en lenguas indígenas. Con respecto a tenencia y gobernanza, el documento de R-PP destaca el Programa de forestería comunitaria como uno de los más importantes en el país, y provee información sobre la debilidad del capital social dentro y entre comunidades. También detalla los conflictos sobre tenencia y de gobernabilidad, pero no incluye planes de cómo solucionarlos. Entre las principales recomendaciones derivadas de la evaluación externa del R-PP de México, resaltan:

- Clarificar el peso relativo que Pro-Árbol espera tener dentro del conjunto de estrategias de REDD+ y desarrollar más adecuadamente los aspectos relativos a otras estrategias de REDD+ que involucren políticas agrícolas y de infraestructura, de tenencia, regulaciones, y de áreas protegidas, entre otras.
- Distinguir más claramente entre deforestación y degradación entre bosques de coníferas y latifoliadas, y proponer enfoques que sean relevantes para cada caso específico. En este contexto, el R-PP debería enfocarse más en los esfuerzos para ampliar los depósitos de carbono, particularmente las prácticas de manejo forestal que los incrementan.
- Mapear con mayor detalle quiénes son los grupos y organizaciones relevantes que necesitan ser consultados y por qué; explicar en mayor detalle cómo los pueblos indígenas, los representantes del sector privado y las organizaciones de pequeños productores

serán consultados efectivamente; y dar mayor énfasis a la participación de comunidades y sociedad civil en el monitoreo de actividades de REDD+ y sus efectos.

- Dedicar mayor atención a las necesidades específicas y a los derechos de los pueblos indígenas; explicar con mayor detalle el rol y contenido del estado de proyectos piloto locales; re-examinar donde hace más sentido dedicar 75% del total del presupuesto de preparación para mejorar el Inventario Forestal Nacional.

Actores y posiciones sobre REDD

A pesar que en México el proceso de preparación para REDD ha tenido una celeridad relativamente mayor que en otros países, el nivel de conocimiento que los diversos actores tienen sobre REDD+ es desigual, tanto en los aspectos técnicos ligados al desarrollo y operación de un eventual mecanismo, como en los aspectos conceptuales y operativos de REDD+ (qué es y cómo debiera funcionar). Entre los actores con mayor familiaridad sobre REDD y REDD+, el conocimiento y énfasis está principalmente enfocado hacia los aspectos de contabilidad del carbono, las líneas de base y el monitoreo, así como hacia el eventual mecanismo financiero de REDD+. Por esta razón, para el caso de México, se trató de agrupar las posiciones claves de actores relevantes en relación a los temas que se han discutido en torno a REDD+. Dichos temas están organizados así: a) posición ante los componentes de REDD+; y b) enfoques y actividades por actor. En relación a la posición ante los componentes de REDD+, se consideran: la escala, el escenario de referencia y el monitoreo; el tipo de financiamiento (mercado, fondo ó mecanismos mixtos); territorios-bosques de interés; y alcance (REDD, REDD+ y REDD++). A continuación se detallan las posiciones frente a estos componentes.

El escenario de referencia, la escala y el monitoreo, son temas de especial interés para varios actores. En cuanto al escenario de referencia de emisiones, hay consenso entre los actores a favor del establecimiento de un sistema de contabilidad para el mecanismo REDD+ que funcione a escala nacional como el marco dentro del cual se contabilicen las reducciones de emisiones de carbono asociadas con la pérdida y/o ganancia de superficie forestal. Esto significa que de manera generalizada, se apoya el desarrollo de experiencias piloto a diferentes niveles, desde el regional hasta el de “proyecto”, siempre y cuando la línea base y el plan de monitoreo formen parte del marco de referencia nacional para REDD+, lo que significaría que los proyectos piloto deban rendir cuentas a las autoridades nacionales responsables de monitorear las posibles pérdidas o ganancias de vegetación y carbono a escala nacional.

Se identificaron diversas motivaciones y expectativas entre los actores entrevistados para apoyar el enfoque nacional de contabilidad. Entre ellos están Greenpeace, WWF, TNC, y el Banco Mundial, cuyo interés es contar con mecanismos que aseguren una mayor transparencia en la contabilidad del carbono y hacer más equitativa la distribución de posibles beneficios económicos derivados de ello. Para aquellos actores que han estado más involucrados en la formulación del R-PP del FCPF, como el COLPOS, ECOSUR (y la misma CONAFOR), aspectos claves como evitar las fugas y la doble contabilidad de carbono, tienen una mayor relevancia. Asimismo, otros actores con mayor trayectoria en proyectos locales, como GAIA, el CCMSS, AMBIO y FMCN, enfatizan la implementación subnacional conformada por proyectos para lograr una ejecución más adecuada del mecanismo REDD+ al contexto local de las comunidades, así como para aprender de las diferentes condiciones que enfrenta el sector rural a nivel local.

En cuanto al mejoramiento de la línea base y el marco de referencia nacional, actores como el CCMSS, la Red MOCAP y Greenpeace-México señalan que es necesario abordar explícitamente las causas reales de la deforestación, entre ellas el impulso al desarrollo turístico, al desarrollo de los bioenergéticos, el desarrollo de la fruticultura y ganadería, así como el aumento en la demanda y consumo de madera ilegal. Además de este aspecto, un punto de interés general para todos los actores es la incorporación de la degradación en la definición de la línea base nacional, considerando una adecuada conceptualización de acuerdo a las causas reales y las metodologías para su monitoreo.

En relación a los tipos de financiamiento que podría utilizarse para apoyar las actividades de REDD+, la mayoría de los actores apoyan el establecimiento de un mecanismo mixto en el cual, los recursos financieros provendrían tanto de mecanismos de mercado, como de fondos diversos. Un grupo heterogéneo de actores, entre ellos SAGARPA, CONANP, Pronatura-Sur, GAIA y COLMEX, se inclina por explorar los mecanismos de “fondos”, tanto nacionales como internacionales, como primera opción para financiar iniciativas piloto subnacionales y cubrir los costos de diseño y factibilidad de un esquema REDD local. La mayoría de estos actores están interesados en acceder eventualmente al mercado voluntario de carbono para acciones de REDD, siempre y cuando las iniciativas estén verificadas por algún estándar reconocido internacionalmente, como el Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB) y el Voluntary Carbon Standard, y que exista un marco nacional de contabilidad debidamente desarrollado y verificado. Al mismo tiempo estos actores reconocen que acceder a los fondos internacionales es muy complicado, por lo que son más escépticos de esta opción. De ahí que varios otros actores, como el FMCN, apoyen la conformación de un sistema flexible de financiamiento que no dependa únicamente de la

ayuda de organismos multilaterales, sino que también utilice recursos nacionales y que considere desde el financiamiento proveniente de mercados, hasta subsidios, a fin de que REDD+ se adapte a las circunstancias de cada región.

Otro grupo de actores, como TNC, WWF y CI, están más interesados en desarrollar los mecanismos y las conexiones necesarias para que REDD+ en México pueda acceder a los mercados de carbono, como una de las primeras opciones de financiamiento. Greenpeace propone crear un fideicomiso que opere como receptor de fondos recibidos por el gobierno mexicano para el financiamiento de proyectos REDD+. En general, las acciones para desarrollar un esquema REDD en México, han considerado desde sus inicios, el desarrollo de mercados de carbono como un elemento esencial de REDD. Esta posición es abiertamente apoyada por el Banco Mundial, actor que ha tenido un rol activo en las negociaciones y discusiones sobre REDD en México.

En cuanto a los posiciones en cuanto a los territorios-bosques de interés, las principales posturas se relacionan con el enfoque de maximizar la reducción de emisiones por unidad de área. Actores con una posición más conservacionista, como TNC, WWF, CI y Greenpeace-México se inclinan por realizar acciones REDD únicamente en territorios forestales y dejar para una segunda etapa la inclusión de otros usos del suelo. Por otra parte, actores como Pronatura-Sur, GAIA, CCMSS y la Red MOCAF buscan que REDD+ se desarrolle con una visión más territorial en la cual, actividades asociadas con los otros usos del suelo tendrían como finalidad hacer un mejor manejo del territorio, apoyado en buenas prácticas, a fin de promover un REDD+ más integral y efectivo para maximizar el manejo del carbono en los territorios.

En general, la noción de “áreas prioritarias” para desarrollar el esquema REDD+ y la posibi-

lidad de que ciertos territorios entren en el esquema REDD+ y que otros no, ha derivado en diversos enfoques sobre lo que consideran que debería ser REDD+. Gran parte de los actores apoyan el desarrollo de una línea base a escala nacional para determinar las zonas con mayor riesgo de deforestación, siendo dichas zonas las que deberían ser incluidas en REDD+ y beneficiadas por este mecanismo.

En México hay un consenso prácticamente absoluto entre los actores por el desarrollo de un esquema de REDD+, que considere la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, incluyendo la conservación forestal, el manejo forestal sustentable y la ampliación de los reservorios de carbono. Sin embargo, cada actor aún mantiene una visión particular sobre lo que debería ser un esquema de REDD+. Entre las principales posturas, Pronatura-Sur, GAIA, CCMSS, Rainforest Alliance, SAGARPA y la Red MOCAF (con una larga experiencia de trabajo en comunidades) enfatizan la importancia de desarrollar un REDD+ que sea participativo e incluyente para los diferentes actores sociales, especialmente para los dueños de los bosques. Consideran que las actividades de REDD+ y REDD++, donde el segundo “+” debería enfocarse en involucrar plenamente a las comunidades locales e indígenas habitantes de los bosques, de modo que el mecanismo sea inclusivo, efectivo y sostenible. Otros actores con un perfil más centrado en la conservación, como TNC, CI, y WWF tienden a pensar en términos de co-beneficios, enfatizando principalmente la protección de la biodiversidad, las masas forestales y los reservorios de carbono y finalmente la reducción de la pobreza.

Cuando se les preguntó a los diferentes actores sobre los objetivos y metas en cuanto a REDD, la gama de respuestas fue por demás diversa. Los actores pertenecientes a instituciones académicas y que son participantes activos en

el proceso de diseño de la estrategia de REDD+ bajo el esquema del FCPF, están más preocupados por alcanzar la rigurosidad metodológica necesaria para los aspectos técnicos de REDD, como la medición de carbono, el procesamiento de imágenes satelitales para la definición de áreas con pérdida forestal, así como la preparación de modelos de riesgos de deforestación.

La mayoría de los actores que colaboran con organizaciones de la sociedad civil y ONGs, expresan un mayor interés en apoyar el desarrollo de experiencias REDD+ a nivel local, a fin de poder participar tanto en el desarrollo de experiencias piloto en campo, apoyar la mejor implementación del mecanismo REDD+ en México, así como aportar a las discusiones nacionales de preparación de la postura de México ante la CMNUCC. Varios actores se visualizan como facilitadores del proceso de conformación de REDD+, entre ellos WWF en apoyo a CONAFOR, que ha promovido el establecimiento de una “ruta crítica” en el tema REDD para la COP16 y junto con el CCMSS, ha buscado impulsar el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de diseño de REDD+ y la ampliación-consolidación de espacios para la participación de un mayor número de actores.

Los actores que tienen mayor relación y trabajo de base con las comunidades, enfatizan el apoyo a procesos de aprendizaje para el mejoramiento del mecanismo (diseño y operatividad), acercar las oportunidades de REDD+ a las comunidades forestales y contribuir a hacer más operativo el mecanismo de acuerdo a las prioridades locales, de modo que se fortalezcan los medios de vida rurales.

La institucionalidad y los mecanismos que son necesarios para apoyar el desarrollo de un esquema REDD+ es otro de los temas con mayor variedad de respuestas. Como era de esperar, los actores asociados con dependencias guber-

naméntales apoyan, en primera instancia, la creación de una estructura política e institucional que genere y administre las reducciones de emisiones bajo un proceso de monitoreo, reporte y verificación (MRV) con metodologías aprobadas. Varios de estos actores apoyan la idea de usar el concepto de PSA del programa PROÁRBOL de la CONAFOR como primer ensayo para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y como base para el diseño de un mecanismo de distribución de beneficios REDD+. Actores pertenecientes a organizaciones civiles opinan que REDD+ debería desarrollarse en total independencia del programa PROÁRBOL, pues consideran que REDD+ debe ser complemento a la actual política forestal nacional, además debería estar basado en la regulación, monitoreo y control de los mercados de madera ilegales.

Hay un consenso general entre los actores sobre la necesidad de revisar las capacidades institucionales y gubernamentales para operar un mecanismo REDD+. Todos los actores apoyan realizar un proceso participativo de consultas sobre los derechos de los dueños de los bosques, así como mecanismos de revisión y validación de la deforestación y la degradación con participación de expertos de alto nivel. Varios actores expresaron que hace falta un esquema de repartición de beneficios de carbono y el impulso de acciones dirigidas a fortalecer la gobernanza, procesos locales y la construcción de capacidades comunitarias como componentes esenciales para que funcione un esquema REDD+ nacional. Sin embargo, en general estos son temas marcadamente ausentes de la agenda de discusión y preparación de REDD+ en México.

Buena parte de estas preocupaciones se esperarían que pudieran ser abordadas en el marco de los contenidos a ser abordados por el Comité Técnico Consultivo para REDD+ (CTC-REDD+). Este Comité, conformado a mediados

de 2010, incluye la conformación de Grupos Técnicos Especializados (GTE), Comisiones de Diálogo (grupos de trabajo), un Grupo Inter-Institucional de Trabajo (GTREDD), y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC). El CTC-REDD+ estaría presidido por un representante de la sociedad civil y su Secretaría Técnica correspondería a la CONAFOR. El reglamento de funcionamiento del CTC-REDD+ establece una representación diversa en su composición, previendo la participación de dueños y poseedores de terrenos forestales; comunidades indígenas que habitan en zonas de bosque; organizaciones civiles y comunitarias; usuarios de servicios ambientales; instituciones académicas y centros de investigación; organizaciones de profesionales en temas de conservación, manejo y explotación de bosques; sector privado; y entidades gubernamentales. El CTC-REDD+ opera como grupo de opinión técnico consultivo para buscar canales de comunicación y coordinación de iniciativas diversas e incidencia hacia el Grupo de Trabajo Inter-institucional de la CICC y fungir como grupo abierto de discusión sobre el diseño y aplicación de la estrategia mexicana de REDD+.

Organizaciones de la sociedad civil

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS): Es una organización no gubernamental con fines no lucrativos que impulsa y promueve la conservación de los ecosistemas boscosos a partir de esquemas de Manejo Forestal Comunitario (MFC). Los miembros del CCMSS trabajan conjuntamente con comunidades y ejidos para que pongan en marcha prácticas sostenibles de manejo de bosques y así mejorar el aprovechamiento, la conservación, la industrialización y la comercialización forestal. El CCMSS busca impulsar procesos locales enfocados al fortalecimiento de la economía local, el manejo forestal comunitario y el desarrollo de capacidades de ejidatarios y comuneros. El rol de esta organización en el proceso REDD+

en México incluye el desarrollo de casos piloto sobre REDD en cinco regiones del país y su participación activa en el Grupo REDD del Consejo Técnico Consultivo de Servicios Ambientales.

Servicios Ambientales de Oaxaca (SAO): Asociación civil conformada por 10 comunidades oaxaqueñas que son pioneras en la venta de bonos de carbono en el mercado voluntario. El rol de esta organización en el proceso REDD+ en México ha sido de participación en espacios para el diálogo y se han distinguido por su participación activa en el Grupo REDD del Consejo Técnico Consultivo de Servicios Ambientales. Su experiencia en la implementación de proyectos encaminados a la captura y conservación de carbono en terrenos forestales en Oaxaca es ampliamente reconocida.

Grupo Autónomo de Investigación Ambiental (GAIA): Es una asociación de profesionistas de las áreas biológicas, agrícolas y forestales que apoyan el desarrollo de comunidades agrarias en el Sur de México. El rol de esta organización en el proceso REDD+ en México ha sido de acompañamiento en los foros de participación y actualmente diseñan un proyecto piloto REDD+.

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN): Institución privada encargada de financiar y fortalecer esfuerzos para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en México. El rol de esta organización en el proceso REDD+ en México ha sido de acompañamiento en los foros de participación y han desarrollado talleres y actividades sobre el tema. El FMCN se ha distinguido por su participación activa en el Grupo REDD del Consejo Técnico Consultivo de Servicios Ambientales.

AMBIO: La Cooperativa AMBIO tiene como finalidad promover el desarrollo rural sustentable, integral, armónico en cuestiones de gene-

ro, cultura y niveles socioeconómicos. Mediante el manejo racional de los recursos naturales y ambientales, se pretende fortalecer las capacidades locales de organizaciones sociales, comunidades rurales y grupos organizados. El rol de esta organización en el proceso REDD+ en México ha sido de acompañamiento en los foros de discusión. Su experiencia en la implementación de proyectos encaminados a la captura y conservación de carbono en terrenos forestales en Chiapas es ampliamente reconocida.

Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF): Organización de productores forestales que agrupa 43 organizaciones forestales de todo el país. El rol de esta organización en el proceso REDD+ en México ha sido de participación en espacios de diálogo y se han distinguido por su participación activa en el Grupo REDD del Consejo Técnico Consultivo de Servicios Ambientales.

PRONATURA: Organización conservacionista no gubernamental cuya misión es la conservación de la flora, la fauna y los ecosistemas prioritarios, promoviendo un desarrollo en armonía con la naturaleza. PRONATURA, fue creada en 1981 y ha sido la instancia a partir de la cual se han constituido las representaciones regionales y estatales con las que se integra el Sistema Nacional PRONATURA, cuyas estrategias y acciones están orientadas a lograr la conservación y el desarrollo sustentable de regiones y sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad del país. El rol de esta organización en el proceso REDD+ en México ha sido de acompañamiento en los foros de participación y a través de sus diferentes oficinas en el país, impulsan diferentes iniciativas relacionadas, particularmente en Chiapas.

Universidades y centros de investigación

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Es una de las más grandes e importantes universidades del país. Tiene como propósito primordial estar al servicio del país y de la humanidad, formar profesionistas, organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales y extender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura. La UNAM ha generado información relevante en el tema de identificación de causas de la deforestación, estimación de biomasa en ecosistemas forestales, medición de la degradación forestal, el rol de la silvicultura comunitaria y su impacto positivo para detener la deforestación, entre otras investigaciones.

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR): Es un centro de investigación científica, que busca contribuir al desarrollo sustentable de la frontera sur de México, Centroamérica y el Caribe a través de la generación de conocimientos, la formación de recursos humanos y la vinculación desde las ciencias sociales y naturales. Esta institución apoyó en la formulación del R-PP de México y su principal aporte se ha enfocado en metodologías para la estimación de biomasa en terrenos forestales, análisis de riesgo de deforestación y generación de líneas de base.

Colegio de Post-Graduados (COLPOS): Es una institución educativa que genera, difunde y aplica conocimiento para el manejo sustentable de los recursos naturales, la producción de alimentos nutritivos e inoctrinos y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Esta institución apoyó en la formulación del R-PP de México, siendo su principal enfoque los aspectos de monitoreo para REDD.

Colegio de México (COLMEX): Es una institución mexicana de educación superior e investigación en ciencias sociales y humanidades fundada en 1940. En 1998 se convirtió en una institución autónoma. El COLMEX se involucró en el desarrollo de la sección del R-PP de México que aborda el tema de Plan de Consulta Nacional sobre REDD+.

Programa Mexicano de Carbono (PMC): El PMC busca coordinar las actividades científicas relativas a los estudios del ciclo del carbono que se realicen en México, fungir como contraparte científica de México en programas similares en otros países, desarrollar e impulsar la investigación científica referente al ciclo del carbono en el país y sistematizar la información científica sobre el carbono. Este Programa apoyó la formulación del R-PP de México.

Organizaciones internacionales de conservación

The Nature Conservancy (TNC): Organización sin fines de lucro dedicada a la conservación de la naturaleza. El rol de esta organización en el proceso REDD+ en México ha sido de participación en espacios para el diálogo y se han distinguido por su participación activa en el Grupo REDD del Consejo Técnico Consultivo de Servicios Ambientales.

World Wildlife Fund (WWF): Es una de las organizaciones independientes de conservación más grandes y con mayor experiencia en el mundo. El rol de esta organización en el proceso de construcción de la estrategia REDD+ en México ha sido apoyar al gobierno de México, mediante el desarrollo de talleres y estudios, entre otras actividades.

Conservación Internacional (CI): Es una de las principales organizaciones de conservación a nivel mundial. Fundada en 1987, sus objetivos pasan por desarrollar trabajos científicos,

económicos, políticos y de concienciación ambiental que permitan preservar la herencia natural de la Tierra para las generaciones futuras. El rol de esta organización en el proceso REDD+ en México ha consistido en la participación en los espacios de diálogo, así como el desarrollo de acciones directas en Chiapas dirigidas al desarrollo de una estrategia REDD para el Estado.

Rainforest Alliance: Organización no gubernamental que trabaja para conservar la biodiversidad y asegurar condiciones de vida que sean sostenibles, a través de la transformación de las prácticas del uso de la tierra, prácticas de negocios y el comportamiento del consumidor. El rol de esta organización en el proceso de REDD+ en México ha sido de participación en espacios para el diálogo.

Greenpeace-México: Organización no gubernamental que trabaja en México desde 1993 investigando y documentando problemas ambientales a nivel regional y nacional, presentando propuestas y alternativas, interviniendo directamente para exponer los atentados contra el ambiente y difundiendo información para generar sensibilidad en la sociedad, industrias y gobiernos y realizando acciones directas no violentas que deriven en soluciones y detengan a quienes destruyen la naturaleza de México. Greenpeace ha participado en espacios para el diálogo y se ha distinguido por su participación activa en el Grupo REDD del Consejo Técnico Consultivo de Servicios Ambientales.

GUATEMALA

De manera similar a México, una cantidad sustancial de los bosques Guatemaltecos están en manos de comunidades forestales, bajo varios tipos de figuras legales. Por ejemplo, las casi 500 mil hectáreas de bosque manejadas por las concesiones forestales comunitarias en la Reserva Biosfera Maya, que han demostrado una

alta capacidad de manejo forestal sostenible, a pesar de las enormes y sistemáticas presiones externas. Los bosques al sur de Petén, bajo manejo comunitario por parte de pueblos indígenas también demuestran haber resistido de manera importante la deforestación, a pesar de las altas concentraciones de población y la pobreza, elementos que frecuentemente se asocian con la deforestación. Sin embargo, las mayores tasas de deforestación en Guatemala ocurren en el norte del país, principalmente en Petén y en los departamentos colindantes al sur.

De cara al proceso de preparación para REDD, condiciones particulares de Guatemala lo distinguen del resto de países. En efecto, aunque el gobierno haya iniciado el proceso del FCPF, este mecanismo ha jugado un rol más limitado que en otros países. Esto se debe, en parte, a la falta de fondos en el FCPF, ya que a pesar de tener el R-PIN aprobado en 2009, el FCPF no ha contado con fondos para apoyar el desarrollo de la estrategia nacional de REDD en Guatemala.

Pero el peso relativamente menor del FCPF también se debe al rol de los proyectos piloto que han sido impulsados por otros actores y grupos comunitarios, que vienen promoviendo acciones de preparación para REDD desde 2007, tal es el caso en Petén. La experiencia acumulada en Petén y otros territorios ha jugado un rol importante en el proceso de preparación para una estrategia REDD en Guatemala.

A pesar de algunos obstáculos relacionados con los proyectos piloto, el gobierno de Guatemala ha logrado avances en los años recientes en el desarrollo de políticas vinculadas con REDD+, las cuales se perciben como un solo elemento de una estrategia integral sobre bosques y cambio climático en el país.

Las posiciones y grupos clave del gobierno se reflejan en la siguiente sección, donde identifi-

camos actores, espacios y grupos clave relacionados a REDD+ en Guatemala.

Posiciones respecto a REDD

A pesar de los avances en los proyectos piloto en Guatemala, todavía prevalece mucho desconocimiento y confusión sobre REDD. No se ha instaurado un debate suficientemente amplio sobre REDD, sobre todo si se considera que la mayoría de organizaciones sociales y ONG, incluyendo algunas que se enfocan en el sector forestal y en la conservación, no tienen un conocimiento profundo sobre el tema. Quienes más han profundizado en el tema de REDD se encuentran en un grupo relativamente limitado de personas dentro de las organizaciones que lideran la agenda de REDD en Guatemala. Una lista no exhaustiva de quienes más han participado incluye: Rainforest Alliance, UICN, INAB, PFN/FAO/GFP, Defensores de la Naturaleza, MARN, CONAP, AGEXPORT, la Universidad del Valle y la Fundación del Bosque Tropical.

A continuación se discute de manera resumida, los principales temas relacionados con REDD en Guatemala.

REDD sub-nacional: El gobierno está proponiendo un sistema de REDD sub-nacional (a nivel de operaciones) que funcione con un sistema de información y monitoreo que sea compatible a nivel nacional. Según el MARN, esta propuesta obedece a las grandes diferencias entre las regiones forestales del país. Si bien los proyectos piloto están avanzando en Petén, el gobierno junto con varias ONG, mencionan que una parte importante de un posible programa REDD a nivel nacional podría ser el fortalecimiento, posiblemente con algunas modificaciones, de los instrumentos y programas actuales, en particular los programas PINFOR y PINPEP.

Soberanía y autonomía: Hay una fuerte intención tanto en el gobierno como en las ONG de crear

un sistema nacional enfocado en la adaptación y mitigación del cambio climático, incluyendo la protección de los bosques pero que no se limite a REDD y que no dependa del marco internacional o de legislación estadounidense, por lo cual se busca avanzar la agenda nacional a través de políticas y legislación. De hecho, en este momento, la falta de definición en la propuesta de ley de cambio climático se explica justamente porque se piensa que debe haber suficiente flexibilidad para que el MARN adapte este marco legal a los resultados de estas negociaciones en los próximos años.

Beneficios adicionales y adaptación: Dada la alta vulnerabilidad del país al cambio climático, el gobierno guatemalteco busca una modalidad de mitigación que también refuerce las acciones enfocadas en las necesidades de adaptación. Además, dado que los bosques son relativamente pequeños comparados con países con bosques más extensos como Indonesia o Brasil, Guatemala planea promover políticas de deforestación evitada ‘plus’ (REDD+), de modo que se abra la oportunidad a otros beneficios adicionales, incluyendo beneficios sociales, como una especie de ventaja competitiva.

Marco legal para la venta de créditos de carbono: Hasta el momento, la falta de un marco legal sobre los derechos y créditos de carbono, ha limitado que los proyectos piloto existentes avancen hacia la venta de créditos, en particular en el caso de ACOFOP. Sin embargo, existe un precedente en la ley de electricidad que reconoce el derecho de carbono a quienes operan proyectos que evitan emisiones, pero hasta el momento, el gobierno de Guatemala no considera adecuada esta opción, debido a varias complicaciones. Por un lado, cuestiona la designación del carbono como propiedad de las comunidades (como en el caso de ACOFOP), destacando que los bosques han existido como recurso del país antes del otorgamiento de las concesiones. Por otro lado, el documento de contextualiza-

ción para el Diálogo Forestal señala que los potenciales compradores han visto ciertas limitantes relacionadas con manejar contratos con el Estado. ACOFOP, por su parte, ha propuesto que la propiedad del carbono en las concesiones forestales comunitarias sea compartida entre las comunidades y el Estado. Otros actores han propuesto que la Ley de Cambio Climático esclarezca la incertidumbre, designando como propiedad del Estado los créditos que resultan de actividades dentro de áreas estatales, mientras que actividades en áreas privadas el derecho sobre el carbono sería de propiedad privada. Existe un estudio que está abordando este problema, que además busca proponer una base legal de posibles opciones para facilitar la venta de créditos de carbono.

Mercados de Carbono: Tanto la Política Nacional de Cambio Climático, como la propuesta de ley dejan la puerta abierta para que el país acceda a mercados internacionales de carbono en el futuro. La propuesta de ley de cambio climático delega al MARN la responsabilidad de facilitar, elaborar y promover una cartera de proyectos de PSA en bosques para que accedan a mercados de carbono ‘sin perjuicio de las negociaciones de gobierno a gobierno’. Le brinda flexibilidad al MARN o al Órgano Ejecutivo, que dentro de 18 meses de entrada en vigencia de la ley, emita ‘la normativa necesaria para la facilitación, divulgación, promoción de la negociación de servicios ambientales y acceso a mercados, el establecimiento de procedimientos y el registro nacional’.

Fondo Nacional de Cambio Climático: Debido a la incertidumbre existente, algunos grupos han propuesto la creación del Fondo Nacional de Cambio Climático, que serviría como mecanismo financiero para apoyar acciones para enfrentar el cambio climático sin depender de fuentes externas. Esta idea de Fondo ha sido incorporada en la Propuesta de Ley de Cambio Climático, a cargo del MARN. Los promotores

de esta iniciativa están buscando posibles áreas donde se podría realizar una reforma a los tributos en el país. Este es un tema sumamente complejo y difícil en Guatemala, donde prevalece un sistema tributario regresivo y uno de los más bajos de la región. Cabe señalar que la propuesta de Ley, detalla posibles fuentes financieras para este Fondo (fondos de cooperación nacional o internacional, reembolsable o no, monetaria o en especie, etc.).

Políticas y coordinación intersectorial: Debido a la presencia de intereses económicos que podrían contraponerse a las políticas de cambio climático y REDD, se ha propuesto la conformación de una Comisión Interinstitucional de Cambio Climático (CICC), que funcione de manera permanente y que además integre a los sectores claves del país, de modo que se implementen políticas de cambio climático de manera coordinada. La actual Comisión fue establecida de forma temporal con el Acuerdo Gubernativo 253-2009, dejándola sujeta a cambios de gobierno. La actual propuesta de ley de cambio climático no propone tal Comisión.

Representación: Algunos actores, incluyendo la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático, han propuesto la creación de mecanismos concretos en la ley que brinden recursos a las comunidades rurales y a los pueblos indígenas para asegurar la socialización, consulta y representación adecuada dentro de los procesos REDD y de cambio climático. Sin embargo, estas propuestas no han sido incluidas en la propuesta de ley de cambio climático.

En general no hay posiciones fuertes ya sea ‘a favor’ o ‘en contra’ de las iniciativas REDD, sino una opinión compartida entre varios actores de que la falta de un foro claro y un marco legal e institucional sobre el tema había obstaculizado una discusión más profunda en el país. En la mayoría de los grupos comunitarios y en la mayoría de las ONG, con excepción de

los que están más involucrados en el tema, existe interés general, pero a la vez desconocimiento, lo que explica en gran parte, la ausencia de posiciones más concretas.

Grupos y espacios clave de política, representación e incidencia

Existe una abundancia de organizaciones, agencias y foros relacionados de alguna manera a REDD+ en Guatemala. En esta sección destacamos el rol de varios grupos de organizaciones o espacios clave relacionados a esta iniciativa, resumidos en cinco categorías: i) proyectos piloto; ii) espacios gubernamentales y iii) organizaciones y grupos de incidencia y representación; 4) universidades; 5) donantes; y 6) otros grupos que podrían tener roles clave en el futuro.

En primer lugar, el grupo de actores participantes en los principales proyectos piloto (las Concesiones Forestales Comunitarias de Petén, Sierra del Lacandón, Sierra de las Minas y Eco-Región Lachuá) han contribuido mucho al avance de REDD a nivel nacional. En este grupo se incluye ACOFOP, Rainforest Alliance, UICN, AGEXPORT, Defensores de la Naturaleza, Fundalachuá y donantes como USAID, DANIDA-PREMACA, la Embajada de los Países Bajos y BID, además del CONAP y MARN. Entre las ONG, Rainforest Alliance ha tomado un rol líder dado su conocimiento técnico y su capacidad financiera, que a su vez se explica por el apoyo de USAID y BID. UICN y AGEXPORT también han contribuido mucho a los proyectos piloto, trabajando en colaboración con otras ONG y organizaciones comunitarias, sobre todo para abordar los temas necesarios dentro de un ‘project design document’ (pdd). CONAP ha jugado un rol importante como todos los proyectos piloto que se llevan a cabo dentro de áreas protegidas. ACOFOP, Fundalachuá y Defensores de la Naturaleza también han sido imprescindibles en este proceso como las organizaciones implementadoras a nivel

local. Estos actores y sus experiencias cobran aún mayor importancia cuando se señala que retroalimentan el proceso de diseño de políticas sobre REDD.

Segundo, hay que destacar los espacios gubernamentales, donde figuran principalmente el Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático (GBBC) y la Comisión Inter-Institucional de Cambio Climático. El GBBC es un espacio clave por ser el punto focal de diseño de políticas sobre REDD, pero también por ser el único grupo convocado en el tema por el MARN, el ente representativo ante la CMNUCC y el ente rector en la Política Nacional de Cambio Climático. El GBBC ha trabajado el desarrollo del R-PIN y del R-PP para el proceso del FCPF, pero también ha aprovechado la oportunidad para abordar el tema de manera más integral, que no se limita solamente a pagos por deforestación evitada. Se destaca el rol de algunos grupos que apoyaron el desarrollo del R-PIN, citadas en dicho documento: TNC, CI, Fundación del Bosque Tropical, Rainforest Alliance, Fundación Defensores de la Naturaleza, Universidad del Valle y la Asociación de Reservas Naturales Privadas. La Comisión Interinstitucional de Cambio Climático se conformó, en parte, respondiendo a las posiciones sectoriales mencionadas en la sección anterior, a través del Acuerdo gubernativo 253 en 2009 y se reunió por primera vez en enero del 2010.

Tercero, el rol de varias organizaciones y grupos que han surgido para incidir en el proceso de legislación sobre cambio climático. Entre este grupo figura la Mesa Nacional de Cambio Climático, que incluye más de 35 ONG, representantes gubernamentales y otros expertos en el país. Es un grupo informal sin personalidad jurídica que ha buscado incidir en la política y en la propuesta de ley de cambio climático. Después de la formación de esta Mesa, algunos actores decidieron que existía la necesidad de

formar la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático. Este grupo busca incidir de parte de los pueblos indígenas del país y cuenta con el apoyo de CI y TNC. La recién formada Alianza Nacional de Organizaciones Forestales aglutina 11 organizaciones forestales del país, incluyendo FEDECOVERA, ACOFOP, la Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Ut'z Che', Fundalachuá, FEDERAFOGUA, ASILCOM, Enredémonos para el Corazón Verde!, COG-MANGLAR, ASORECH y ASOCUCH. La Alianza todavía está en sus fases iniciales de desarrollo. Durante el último año ha contado con el apoyo del Growing Forest Partnership, con el propósito de hacer visibles a las comunidades locales por medio de un actor forestal nacional. Aunque varios de sus miembros están involucrados en proyectos piloto, el grupo no ha tomado posiciones respecto a REDD. Sin embargo, varios de los actores y grupos clave en Guatemala perciben a este grupo como clave para la representación de comunidades forestales a nivel nacional y por ende, es probable que juegue un rol importante cuando inicien las consultas sobre REDD.

En cuarto lugar, hay que destacar el rol de la Universidad del Valle, que ha sido líder en cuestiones técnicas de la medición de carbono. Cuenta con un laboratorio especializado para la medición de contenido de carbono en muestras vegetales y de suelos, y es la institución que tiene más experiencia en el tema dentro del país. Esta universidad ha jugado, y probablemente seguirá jugando un rol central en estos temas, contribuyendo en todos los espacios clave de desarrollo de políticas.

Quinto, se puede destacar el rol de donantes. Por el momento, en la ausencia de fondos del FCPF, BID figura como el más importante en el tema de REDD por el momento, reafirmando su objetivo de acompañar el proceso de REDD a mediano-largo plazo en Guatemala. El BID está

apoyando a Rainforest Alliance, específicamente para el proyecto GUATECARBON. Además, está financiando un proyecto de \$30 millones para el Programa de Desarrollo de Petén, complementado por una donación de \$7 millones del GEF. Este Programa tiene una amplia gama de actividades, incluyendo manejo sostenible de recursos, puesta en valor de sitios turísticos y arqueológicos y fortalecimiento institucional. El proyecto 'Establecimiento Catastral y Consolidación de la Certeza Jurídica de Áreas Protegidas' pronto se implementará por medio del Registro de Información Catastral, el cual busca establecer el catastro físico de las áreas protegidas, permitiendo mayor certeza jurídica y geográfica dentro de estas áreas. Todas estas iniciativas son congruentes con el plan de largo plazo declarado por el BID, el cual es establecer mayor certeza sobre las áreas protegidas para permitir mayor inversión en el área, incluyendo REDD.

Los otros donantes no han establecido programas específicamente diseñados para REDD, sino que REDD ha surgido dentro de programas más amplios. Estos donantes (Embajada de los Países Bajos, DANIDA y USAID) no han brindado información de los posibles planes de apoyar, o no apoyar, iniciativas REDD. El Banco Mundial está apoyando una iniciativa, junto con el Fondo Japonés para el Desarrollo Social, que incluye varios componentes implementados por ACOFOP y Pro-Petén; un componente se relaciona a PSA. Por medio del FCPF, el Banco Mundial no ha podido brindar fondos para la preparación para REDD, pero se mantienen en coordinación técnica con el MARN y es posible que sea un actor principal en el futuro.

Por último, se puede hablar de los grupos que todavía no han participado de manera sistemática, pero que podrían jugar roles importantes siempre y cuando REDD progrese. Dentro de estos se incluye al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y la Divi-

sión de Protección de la Naturaleza (DIPRONA), la agencia que realiza la vigilancia ambiental, en colaboración con la policía local. También habría que considerar las municipalidades y comunidades donde se realizarán los proyectos REDD, así como las ONG interesadas en REDD pero que todavía no han participado de manera concreta.

Organizaciones locales-territoriales

Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP): Es una asociación de base comunitaria integrada por 23 organizaciones campesinas e indígenas, que por medio del manejo forestal sostenible de la Zona del Uso Múltiple en la Reserva de Biosfera Maya (RBM). Dadas las grandes extensiones de bosque y el manejo forestal comunitario, se ha generado mucho interés en incluir las concesiones forestales en un mecanismo de pago por servicios ambientales. ACOFOP, junto con Rainforest Alliance, AGEXPORT, y en colaboración con MARN y CONAP, ha trabajado por más de 3 años con GUATECARBON, un proyecto de pagos por deforestación evitada, aunque todavía no se han generado créditos de carbono, pues no hay claridad legal sobre la propiedad del carbono, que es la para la venta de créditos de carbono. Tampoco se tiene una línea base. Rainforest Alliance apoya dos estudios para buscarle solución a estos dos retos, en colaboración con IUCN, AGEXPORT, MARN y CONAP. ACOFOP sigue trabajando con apoyo de Rainforest Alliance, AGEXPORT y el Banco Mundial (Fondo Japonés para el Desarrollo Social, a través de programas con actividades más amplias, de los cuales PSA es solamente un componente). ACOFOP también integra la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales.

Asociación de Forestería Comunitaria de Ut'z Che: Es una organización comunitaria de segundo nivel constituida legalmente en junio de 2006. Aglutina a 25 organizaciones de base, 2 comu-

nidades de pueblos indígenas, 2 empresas campesinas agrícolas, 17 asociaciones, un sindicato de trabajadores y una cooperativa. Las organizaciones socias se ubican en los departamentos de Escuintla, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Sololá, Chiquimula, Jalapa, Totonicapán, Chimaltenango y Quetzaltenango. Ut'z Che' ha trabajado en acciones de incidencia sobre REDD, participando en foros como el Diálogo Forestal; es parte de la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias. Ha realizado talleres de discusión sobre REDD con las organizaciones de base en distintos territorios.

Organizaciones de la sociedad civil

Asociación Sotzil: Centro para la Investigación y Planificación del Desarrollo Maya: Es una organización cuyo modelo organizativo está fundamentado en la participación comunitaria, que le permite generar propuestas y alternativas de carácter técnico-político en los ámbitos económico, social y cultural, con el propósito de superar la problemática del pueblo Maya y la sociedad guatemalteca en general. La organización participa en la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático.

Fundación Defensores de la Naturaleza: Es una organización no gubernamental con varias líneas de trabajo para la conservación y manejo sostenible del patrimonio nacional de Guatemala. Es socia de TNC, Rainforest Alliance y otras ONGs internacionales que trabajan en Guatemala. Administra 4 áreas protegidas y desarrolla acciones en la eco-región semiárida del Motagua. Promueve el proyecto de Jardín Botánico Nacional. Defensores de la Naturaleza está considerando dos áreas para posibles proyectos sobre REDD, utilizando estándares del VCS y CCBA: El Parque Nacional Sierra del Lacandón (en la RBM) y la Reserva Biosfera de la Sierra de las Minas. Las dos áreas contienen una combinación de tierras privadas, comunitarias, tierras

compradas para la conservación por Defensores de la Naturaleza y tierras nacionales dentro de las áreas protegidas. Las dos áreas enfrentan complejas dinámicas sociales. Sierra del Lacandón, por estar en la RBM, estará incluida en la línea base a cargo de Carbon Decisions (contratada por Rainforest Alliance). Sierra de las Minas aún no se ha incluido en una línea base de deforestación ó degradación. Defensores de la Naturaleza busca valorizar los servicios ambientales por medio del 'Fondo del Agua' que busca establecer mecanismos de pago por servicios ambientales para proteger cabeceras de cuenca. Fondos provenientes de REDD serían complementarios a estos mecanismos en Sierra de las Minas. Defensores de la Naturaleza ha participado en la Mesa Nacional de Cambio Climático y en el desarrollo de la política nacional de cambio climático, además de ser miembro de ASOREMA (Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente).

Fundación Laguna Lachuá (Fundalachuá): Aglutina a 55 Consejos Comunitarios de Desarrollo Local (COCODES) de primer nivel, 4 asociaciones de productores, 1 asociación de mujeres y 2 COCODES de segundo nivel. Las comunidades de Fundalachuá tienen una población de aproximadamente 18,500 habitantes principalmente de la etnia Maya-Q'eqchi' en Cobán y Alta Verapaz. Fundalachuá es promueve la implementación de un proyecto de reforestación y deforestación evitada en la 'Eco-Región Lachuá', con el apoyo de DANIDA, a través de IUCN y AGEXPORT y Rainforest Alliance, en colaboración con MARN, CONAP e INAB.

Fundación CALMECAC: Es una organización sin fines de lucro que promueve el manejo sostenible de recursos naturales y el desarrollo humano con la participación de actores locales. CALMECAC está preparando un proyecto apoyado por la Organización Internacional de Maderas Tropicales, que consiste en dos com-

ponentes: i) investigación y cuantificación del valor de los bosques y recopilación de experiencias de manejo forestal; y ii) apoyo a procesos de negociación que sean consensuados con las comunidades. El proyecto se llevará a cabo en colaboración con 15 municipalidades en el norte de Huehuetenango y Quiché. Fundación CALMECAC trabaja en el manejo de áreas protegidas municipales del Trifinio, apoya a la organización forestal 'Enredémonos por el Corazón Verde', participa en la Mesa Nacional de Cambio Climático y es miembro de ASOREMA y de IUCN.

Fundación del Bosque Tropical: Es una organización internacional sin fines de lucro enfocada en la conservación de biodiversidad y en apoyo a los medios de vida sostenibles. Desde 2006, trabaja con ACOFOP en GUATECARBON. Recibe asesoría técnica de Rainforest Alliance en cuatro proyectos piloto que se encuentran en sus fases iniciales, incluyendo las concesiones forestales, la eco-región Lachúa, Sierra de las Minas y Sierra del Lacandón.

Fundación Ecológica (FUNDAECO): Es una organización sin fines de lucro que trabaja desde 1990 y busca promover la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales del país. Aunque no haya iniciado pasos concretos, tiene interés en proyectos sobre REDD, en particular para las áreas del Cerro San Gil, Río Sarstún, Sierra Santa Cruz y Sierra Caral. Trabajan en Izabal y otras áreas, para promover la regularización de tierras, la expansión de reservas institucionales y la expansión de PINFOR, en colaboración con el Proyecto Jade apoyado por el gobierno de Holanda. Es miembro de UICN, de ASOREMA y de la Alianza Trinacional para la Conservación del Golfo de Honduras (TRIGOH).

AGEXPORT: Es una organización privada sin fines de lucro que representa, promueve y de-

sarrolla productos alternativos de exportación de empresas guatemaltecas. AGEXPORT apoya a las concesiones forestales y a Fundalachuá en varios proyectos, incluyendo la preparación para proyectos de REDD en colaboración con Rainforest Alliance y IUCN, entre otras organizaciones. AGEXPORT es financiada por DANIDA, bajo el sub-componente 'Eco-Empresas' del Programa Regional PREMACA y se enfoca en créditos y mecanismos financieros, así como al apoyo para la participación comunitaria en foros de toma de decisiones.

CARE: Es una organización de desarrollo internacional sin fines de lucro, con más de 10 años de experiencia en proyectos de carbono en Guatemala, a través del proyecto MIBOSQUE. En 2010, CARE lanzó la fase inicial de un proyecto con 70 comunidades en el altiplano occidental, en tierras comunitarias y municipales, constituyendo casi 60,000 hectáreas de bosque donde buscan desarrollar un proyecto de deforestación evitada según los estándares del VCS y CCBA. El proyecto comprende bosques distribuidos en varias áreas, incluyendo bosques municipales y comunitarios, con parcelas entre 200ha y 5,000ha dentro de San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango, Sololá y Quiché. Esta propuesta se ha formulado por medio de un proceso de consulta con las comunidades participantes, y se contempla que acciones de REDD podrían ser complementarias a los proyectos existentes, incluyendo PINPEP, PINFOR y PARPA. La iniciativa todavía se encuentra en sus fases iniciales, pero ya concluyeron trabajos de geo-referencia de los bosques. Buscan realizar un estudio de viabilidad para un proyecto de deforestación evitada. Algunos de los bosques ya tienen medición de carbono realizadas en colaboración con la Universidad del Valle de Guatemala entre 2005 y 2006. CARE participa en la Mesa Nacional de Cambio Climático.

Organizaciones internacionales de conservación

Conservación Internacional (CI): Organización internacional de conservación sin fines de lucro, que en los años recientes ha trabajado en colaboración con WCS, CEMEC y CONAP para recopilar información de cobertura forestal y deforestación en el Parque Nacional Laguna del Tigre, incluido el corredor biológico, que ha sido incorporado a la línea base en Petén. CI no tiene iniciativas activas para establecer proyectos sobre REDD dentro del área, pero apoya otros mecanismos de conservación dentro del área, incluyendo ‘Acuerdos de Conservación’, que buscan establecer mecanismos financieros vinculados con actividades concretas de conservación. CI apoya a la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y proporciona apoyo a CICA y CIMA. CI también ha participado en el desarrollo de la estrategia, política y propuesta de ley nacional sobre cambio climático.

Rainforest Alliance (RA): Es una organización internacional sin fines de lucro enfocada en la conservación de biodiversidad y en apoyo a los medios de vida sostenibles. La organización ha jugado un papel clave en el desarrollo de proyectos piloto en Guatemala. Desde 2006, trabaja con ACOFOP en GUATECARBON. Rainforest Alliance también asesora técnicamente en cuatro proyectos pilotos que se encuentran en sus fases iniciales, incluyendo ACOFOP, Fundalachuá, Sierra de las Minas y Sierra del Lacandón. Para enfrentar la incertidumbre legal sobre la venta de créditos de carbono, Rainforest Alliance junto con varias organizaciones, entidades gubernamentales y donantes, está apoyando un estudio legal para buscar posibles rutas para establecer la base legal en la venta de créditos de carbono. Además, apoya el levantamiento de una línea base para todo Petén, incluyendo las tierras bajas de Alta Verapaz y la eco-región

Lachuá (unos 40,000 km²). Apoyo al desarrollo de la estrategia nacional de REDD.

The Nature Conservancy (TNC): Es una organización internacional no gubernamental de conservación. TNC no tiene proyectos propios de REDD, pero apoya a 13 socios nacionales en Guatemala, entre los cuales figuran Defensores de la Naturaleza. TNC participa en el desarrollo de la política y la propuesta de ley de cambio climático. También apoya a la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y participa en la Mesa Nacional de Cambio Climático.

Organismos de cooperación

DANIDA: Implementa el Programa PREMACA (que finalizará en 2012), que apoya a la región centroamericana en la implementación del Plan Ambiental Regional (PARCA). El cuarto componente de este programa (Eco-empresas), es implementado en Guatemala por medio de AGEXPORT, y busca promover la reducción de la pobreza y lograr un impacto ambiental positivo. Bajo este componente se apoya a Fundalachuá y ACOFOP para acceder a mercados de carbono. DANIDA también tiene previstos fondos especiales sobre cambio climático a nivel centroamericano, en apoyo a una amplia variedad de proyectos, que posiblemente podrían incluir nuevas líneas de trabajo relacionadas con REDD.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Es la principal fuente de préstamos en las Américas y además está conformado por la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). El BID apoya varias iniciativas relacionadas con bosques. El Programa de Servicios Ambientales de la Reserva de la Biosfera Maya apoya directamente el desarrollo de REDD en las concesiones forestales por medio de Rainforest Alliance para la iniciativa GUATECARBON. El FOMIN

también ha realizado un préstamo de \$30 millones de dólares al gobierno, que será ejecutado por el MARN y complementado por una donación del GEF, para el Programa de Desarrollo de Petén, que contiene varios componentes de trabajo como: manejo sostenible de recursos, puesta en valor de sitios turísticos y arqueológicos y fortalecimiento institucional. El BID también apoya el proyecto Establecimiento Catastral y Consolidación de la Certeza Jurídica de Áreas Protegidas, implementado a través del Registro de Información Catastral, que busca establecer el catastro físico de las áreas protegidas, permitiendo mayor certeza jurídica y geográfica dentro de estas áreas. Finalmente, el BID también apoya el Programa PARPA por medio de MAGA, que incluye un componente de pagos por servicios ambientales.

Banco Mundial: Es una institución multilateral formada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y la Asociación Internacional de Fomento (AIF). En el tema de REDD, el Banco Mundial trabaja en colaboración con el FCPF. El R-PIN, que contenía un diagnóstico de la situación forestal en el país, fue entregado en Diciembre del 2008 y aprobado en Marzo del 2009 pero sin financiamiento. Además del FCPF, el Banco Mundial, a través del Fondo Japonés de Desarrollo Social apoya a Pro-Petén y ACOFOP en actividades y proyectos, incluyendo el desarrollo de mecanismos de PSA. El Banco Mundial también apoya el Growing Forest Partnership (GFP), que trabaja en estrecha colaboración con el Programa Forestal Nacional, siendo la FAO el ente implementador del GFP en el país. Una parte importante de este trabajo ha sido el apoyo para la conformación de la Alianza Nacional de los Bosques.

Países Bajos: es uno de los colaboradores más activos del sector ambiental en Guatemala, apoyando una amplia gama de iniciativas y proyectos, incluyendo a Fundalachuá, a través de IUCN, en la preparación de REDD como

parte del apoyo para una gama más amplia de actividades. También proporcionan la mayoría del financiamiento para el PINPEP, un sistema de incentivos forestales para los que no pueden demostrar que sean propietarios de áreas forestales. Dado que PINPEP concluye en 2012, se está buscando institucionalizar el programa dentro del marco nacional. La cooperación de los Países Bajos también incluye el apoyo a CONAP, CALAS, IARNA y Proyecto Jade.

HONDURAS

En Honduras, REDD surge dentro de un complejo contexto social y político. Según el gobierno de Honduras, el país cuenta con 5,7 millones de hectáreas de bosque, los cuales están siendo deforestados a una tasa relativamente alta (62,000 ha por año). El inventario forestal de 2005-2006 afirmó que 75% de las perturbaciones forestales son de origen antropogénico, impulsadas por la extracción de productos maderables, la ganadería extensiva y extracción de leña. La tala ilegal sigue siendo un problema importante; en 2005, un informe de la Agencia de Investigaciones Ambientales (EIA por sus siglas en inglés) reveló que la tala ilegal estaba ligada a altos centros de poder político, una conclusión que tuvo impacto importante en el país, influyendo en las elecciones presidenciales de ese año. Las presiones de deforestación se agudizan por la falta de seguridad de tenencia y por los traslapes de territorios reclamados por varios actores.

En 2007 se aprobó la ley forestal de Honduras, la cual crea el Instituto de Conservación Forestal y Vida Silvestre, además de un fondo de reinversión forestal para el fomento de plantaciones, así como un fondo para el manejo de áreas protegidas y vida silvestre. Esta ley también creó un fondo para el manejo forestal municipal, que incluye fondos para el desarrollo social. Algunas comunidades han logrado ma-

yor acceso a los bosques a través de esta ley y el proceso de reglamentación.

Iniciativas y estrategias sobre REDD

Así como ocurrió en otros países, Honduras empezó a desarrollar su estrategia REDD con la redacción de su R-PIN en 2008, entre un grupo de especialistas en SERNA e ICF. El documento fue presentado al FCPF a inicios de 2009 y en Marzo del mismo año, el país fue seleccionado para participar en el FCPF para seguir desarrollando su estrategia de REDD. Sin embargo, los problemas políticos de Honduras que se magnificaron en junio de 2009 e interrumpieron las relaciones de SERNA con el Banco Mundial, y en general, todo el proceso del FCPF y REDD se debilitó.

En 2010, el interés en REDD se habría retomado en base al progreso logrado con el R-PIN. Una revisión de este documento permite ver que la estrategia está en sus fases muy iniciales. Como es el caso en otros países, no existe un análisis de las causas subyacentes de deforestación, falta mucha definición sobre los roles de las entidades y programas gubernamentales en la implementación de REDD, y como señala el TAP, el documento adolece de información importante sobre los pueblos indígenas del país.

A pesar de su falta de definición, el R-PIN junto con las posiciones expuestas en talleres recientes permiten una lectura de algunos elementos de la estrategia nacional. Primero, es probable que el manejo forestal sostenible sea un eje importante de cualquier estrategia REDD+, dado que 80% de la tierra del país es de vocación forestal, y el ICF ha declarado su meta de aumentar el área de producción forestal a 200 mil hectáreas. La restauración ecológica y la reforestación ya existen como componentes importantes de la estrategia forestal del país. Estos intereses se reflejan en el Plan de Nación, una

base importante para la estrategia REDD en Honduras, que establece la meta de incluir 1 millón de hectáreas de bosque en restauración ecológica o producción en los mercados internacionales de carbono, antes del 2038.

En los meses recientes, el gobierno ha planteado una serie de retos para REDD+, incluyendo la necesidad de incluir a los pueblos indígenas y comunidades rurales, aunque la naturaleza de esta inclusión no está clara. En el R-PIN se menciona la falta de capacidad, conocimiento e incentivos económicos como causas de deforestación por parte de las comunidades forestales, pero no menciona los retos de tenencia y limitación de derechos que enfrentan estas comunidades que influyen en sus posibilidades de manejo sostenible. Otro elemento que será de importancia para los derechos de las comunidades rurales es la intención del gobierno, que según La Tribuna, buscará ‘recuperar las tierras forestales nacionales ocupadas, deslindarlas e inscribirlas en el Patrimonio Público Forestal Inalienable’ (la Tribuna Bosques Hondureños y Cambio Climático: Soluciones verdaderas o falsos remedios?). Vale la pena señalar que el R-PIN, a diferencia de otros países con dinámicas parecidas, incluye la distribución no equitativa de la tierra como causa de la migración y deforestación. Además, el gobierno ha establecido metas para fomentar la forestería comunitaria y la inclusión de más familias en empresas forestales sostenibles.

Varios elementos técnicos quedan por establecer, incluyendo una línea de referencia, un sistema de monitoreo y actualizar el inventario forestal nacional. Estos componentes constituirán una parte importante de la estrategia que se irá formando en la preparación del R-PP en particular, y de la estrategia de REDD en general.

Finalmente, aunque el ICF y SERNA siguen siendo centrales en proceso de preparación

para REDD+, todavía no se han definido con precisión los roles y responsabilidades de cada entidad. Además de estas entidades gubernamentales, la Agenda Forestal, ha facilitado diálogos sobre REDD+ en el país y podría jugar un rol importante en el futuro. La Agenda Forestal es una instancia independiente que promueve la forestería comunitaria y la transparencia de los planes de manejo, incluyendo los de las áreas protegidas.

Posiciones y roles de actores no gubernamentales

El debate principal relacionado a REDD en este momento gira en torno a la inclusión de pueblos indígenas y comunidades rurales en la estrategia REDD. Esto ha sido la crítica más fuerte del proceso del R-PIN, lo cual cobra mayor importancia cuando se toma en cuenta que las áreas más probables para la implementación de REDD son territorios indígenas, en particular la zona de La Mosquitia. Sin embargo, cabe señalar que el R-PIN afirma en el primer párrafo, haber consultado con una gran variedad de organizaciones, incluyendo la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY), la Asociación para el Desarrollo de la Mosquitia Hondureña (MOPAWI), la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC), la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), la Federación Hondureña de Indígenas Lencas (FHONDIL), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y el Consejo Popular Indígena de Honduras (CopinH). El R-PIN sugiere de forma tácita, que estas organizaciones son responsables por cualquier desconocimiento que exista a nivel de las comunidades.

Cualquiera que sea la posición respecto al desarrollo del R-PIN, todavía hay desconocimiento sobre el tema y por ende, hay esfuerzos para socializar el R-PIN con los pueblos indígenas y

comunidades rurales del país, que cuentan con el apoyo de UICN y GTZ. Además, la Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia (MOPAWI) está llevando a cabo capacitaciones sobre REDD. MOPAWI ha mantenido buena comunicación con SERNA e ICF y por su amplio trabajo con las comunidades de la Mosquitia en temas forestales, es probable que siga jugando un papel importante en el proceso de preparación para REDD+.

Este panorama ha generado una fuerte preocupación de los pueblos indígenas sobre las implicaciones de la iniciativa para sus derechos y territorio, lo cual se expresó en el Encuentro Indígena Binacional MUIHKA, celebrado en Mayo de 2010 en Tegucigalpa, donde se reunieron líderes de 26 organizaciones representantes de pueblos indígenas de Nicaragua y Honduras, y contó con el apoyo técnico y/o financiero de la UICN, MOPAWI y la CCAD.

En julio, la Moskitia Asta Takanka (MASTA), que aglutina a 11 federaciones indígenas de la Mosquitia Hondureña, participó en un taller nacional sobre REDD, un evento que contó con la participación del gobierno, y expertos nacionales e internacionales para discutir la estrategia nacional y rutas posibles para el futuro. Los miembros de MASTA se mostraron abiertos al diálogo sobre REDD+, pero enfatizaron la necesidad de abordar los problemas más desafiantes y también relevantes, como la colonización, la expansión de la palma africana y la ganadería, y las pistas clandestinas, en lugar de enfocarse solamente en la extracción de leña. Como prioridad, MASTA también reclamó el derecho de autodeterminación y el derecho de consentimiento libre, previo e informado como requiere el Convenio 169 de la OIT. En este taller también participó la Federación Indígena de la Zona Mokoron y Segovias (FINZMOS), quienes han demandado mayor conocimiento sobre el tema REDD. Aunque MASTA y FINZMOS hayan podido participar en estos foros, algunos

observadores comentan la ausencia de organizaciones que representan a otras comunidades del país, como la Organización Fraternal Negra Hondureña, una organización de base en la defensa de los derechos del pueblo Garífuna.

Aparte de los temas de inclusión y consulta, vale la pena destacar el papel de otras organizaciones en el país, que han surgido recientemente después de que se haya retomado el proceso de preparación para REDD+ en el 2010. Por ejemplo, Rainforest Alliance, al igual que en Guatemala, ha tenido un rol clave por su experiencia en el tema REDD y proyectos pilotos. Rainforest Alliance empezó a desarrollar el proyecto Honducarbon, un proyecto piloto impulsado por la organización en la Mosquitia, que no ha llegado a la fase de implementación debido a varios obstáculos. Sin embargo, la organización cuenta con apoyo importante de USAID y confirma su intención de implementar un proyecto sobre REDD en la Mosquitia, además de apoyar el desarrollo de escenarios de referencia en el país, y junto con CATIE y UICN, apoyará al gobierno en los temas técnicos de REDD+.

Además de Rainforest Alliance, otras iniciativas también pretenden establecer proyectos pilotos. Se puede destacar la experiencia del proyecto Pico Bonito promovido por ECOLOGIC, bajo el cual se pretende generar certificados de reducción de emisiones de carbono para el mercado voluntario, a través acciones de reforestación y aforestación bajo estándares del VCS. Anteriormente, este proyecto buscó establecer actividades de deforestación evitada, pero no han sido implementadas. Otra proyecto es implementado por Aldea Global, que busca reducir emisiones por deforestación en dos micro cuencas del Parque Nacional Cerro Azul (31,339 hectáreas). Aldea Global utiliza una metodología basada en REDD como instrumento de planificación local, lo que ha permitido realizar negociaciones con productores, por ejemplo, con-

centrando la acción de ganaderos en 350 hectáreas de manejo silvopastoril, disminuyendo la presión en una 1,800 hectáreas de la zona de influencia del Parque, donde anteriormente se realizaban quemas para manejo de potreros.

Otros actores en este proceso incluyen al PNUD y el CATIE, que apoyan un estudio sobre cambio climático, con el fin de evaluar los flujos económicos necesarios para que Honduras entre al tema de REDD+. CATIE también estará trabajando para desarrollar herramientas de monitoreo de carbono en distintos usos de la tierra. El PNUD sigue trabajando en proyectos productivos en la Mosquitia, además de aportar elementos técnicos al proceso de REDD+, incluyendo líneas de referencia.

La Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), es otra organización que ha aportado elementos técnicos en el país. Cuenta con un cuerpo docente e investigativo especializado y con amplia experiencia e instalaciones físicas que incluyen laboratorios y talleres, así como zonas de bosque de pinar y latifoliado como parte de su patrimonio experimental, todo lo cual, le permite realizar una labor de excelencia, por lo que mercedamente la UNESCO, USAID, InWent, ODA, FINNIDA y otras instituciones y organismos relacionados al sector de la educación, la han calificado como una de las mejores en su género en Latinoamérica. ESNACIFOR ha desarrollado materiales didáctico-pedagógicos para el entrenamiento de profesionales, técnicos, pequeños productores, obreros calificados y campesinos en procesos de formación forestal. Actualmente, está trabajando con ICF y FAO en la actualización de un mapa de cobertura y uso del suelo en el país. Recientemente, con apoyo de SERNA, ESNACIFOR abrió un área especializada en cambio climático.

De manera simultánea con estas iniciativas, se pueden destacar varios esfuerzos de diálogo en

el país. El Programa de Fomento al Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Desarrollo Local en Honduras - PRORENA (que se ejecuta con fondos de la Cooperación Alemana al Desarrollo, la Cooperación Técnica Alemana y la Cooperación Financiera del Banco Alemán de Desarrollo), está apoyando procesos relativos a REDD+, a través de diálogos intersectoriales. Por su parte, UICN apoya diálogos nacionales y territoriales sobre REDD+, además de otros esfuerzos como el fortalecimiento de capacidades de MASTA.

Finalmente, entre actores que no han tomado roles importantes sobre REDD+ hasta el momento, pero que podrían ser importantes en el futuro, están por ejemplo, el Instituto Hondureño de Café (IHCAFE), donde REDD+ está comenzando a discutirse. IHCAFE creó recientemente una unidad de cambio climático y junto con ESNACIFOR, ha trabajado para establecer parcelas para la medición de carbono.

EL SALVADOR

Frente a REDD, El Salvador es un caso límite, sobre todo considerando la reducida extensión de sus bosques. El Salvador apenas cuenta con 287 mil hectáreas de bosque y de otras 204 mil hectáreas de otras tierras boscosas, principalmente cafetales bajo sombra. A pesar que en las últimas décadas, el país ha visto una recuperación importante, es el país con menor porcentaje de cobertura forestal en toda Mesoamérica.

Iniciativas y estrategias REDD

Aunque El Salvador no tiene cobertura boscosa significativa, frente a la agenda climática global, en el país se ha tratado de aprovechar las ‘oportunidades’ que se desprenden de los mecanismos de mercado asociados a la reducción y/o absorción de gases de efecto invernadero. Con esa lógica, el MARN desarrolló la primera versión del R-PIN para el FCPF. El documento de

R-PIN de El Salvador fue presentado en febrero de 2009, enfocándose en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) públicas y privadas, y en las zonas cafetaleras.

El documento de R-PIN refleja la carencia de información en el país y aborda superficialmente la mayoría de los apartados, tales como las dinámicas de deforestación y degradación, y los marcos legales existentes. Entre las múltiples causas de deforestación y degradación, se resaltan el crecimiento urbano, la extracción de madera y leña, y los incendios forestales. Sin embargo, no existen mayores detalles sobre los territorios más afectados por los procesos de deforestación y degradación forestal, aunque se reconocen las fuertes debilidades en la aplicación de la legislación forestal. El R-PIN destaca las zonas cafetaleras para un eventual programa de REDD en el país, ya que constituyen el 9% del territorio nacional y representan la principal cobertura “boscosa” en ausencia de masas forestales importantes. El cambio de gobierno en junio de 2009 también significó cambios relevantes en la visión y postura del país con relación al cambio climático que expresamente privilegia más la agenda de adaptación. Después de haber presentado el documento de R-PIN, el MARN ha mostrado interés por retomar el proceso de preparación para REDD en el marco del FCPF, para lo cual habría iniciado una fase de diálogo y búsqueda de coordinación con el MAG, por ser éste último el responsable del sector forestal del país. La Estrategia Nacional de REDD en El Salvador estaría volcada a reforzar el eventual Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas, por su relevancia en disminuir el riesgo y la vulnerabilidad evidenciada por las más recientes tormentas tropicales en El Salvador. Bajo este Programa, el MARN espera insertarse en el Programa REDD-CARD que financiaría GTZ, bajo el cual, el Gobierno de El Salvador esperaría avanzar en el levantamiento de una línea base para el país, como una de las acciones inmediatas.

Posiciones y roles de actores no gubernamentales

En El Salvador se han desarrollado varias propuestas dirigidas al sector privado para aprovechar las oportunidades de negocio asociadas con la mitigación, considerando el potencial existente en los sectores forestal y energético ante las expectativas de implementación de acciones de mitigación en actividades forestales contenidas en los lineamientos del MDL. Tal como ocurrió en el resto de países de la región, El Salvador, preparó una propuesta de “Tierras Kyoto” considerando que distintos territorios podrían promoverse como sumideros de carbono. Dicha propuesta incluía el establecimiento de plantaciones forestales con fines energéticos e industriales, el establecimiento de sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles, así como una estrategia de reducción del consumo doméstico e industrial de leña. A diferencia de los proyectos privados de eficiencia energética, las propuestas vinculadas con el potencial de sumidero en la biomasa, no tuvieron ningún alcance en El Salvador.

Actualmente existe la Iniciativa Café y Ambiente, un programa del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI, banco estatal de segundo piso) dirigido a productores cafetaleros como una herramienta para enfrentar la crítica situación financiera del sector, heredada de períodos previos caracterizados por los bajos precios internacionales del café. Vinculado a los mercados voluntarios de carbono, esta Iniciativa busca la comercialización de servicios ambientales que las propiedades cafetaleras generan. La Iniciativa Café y Ambiente contempla la consolidación, a través de un registro único, del área de bosque cafetalero de El Salvador y buscaría comercializar la tasa de deforestación evitada a cambio de mantener los cafetales. Además de esta Iniciativa, el R-PIN destaca el Programa de Incentivos denominado Bono Forestal, el Plan Nacional de Reforestación y

Recuperación de Ecosistemas, y la Estrategia Forestal de El Salvador.

Iniciativa Café y Ambiente

Dado que las zonas cafetaleras representan la mayor superficie con cobertura arbórea en El Salvador, el sector cafetalero ha logrado incidir en la implementación de la Iniciativa Café y Ambiente, un programa financiado con recursos del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI). Aunque el origen de dicho Fondo tiene una lógica volcada a contribuir a resolver los problemas financieros del sector, a través de esta Iniciativa, el sector cafetalero también pretende vincular el rol de los cafetales de sombra a mercados voluntarios de carbono, de modo que la administración y comercialización de los servicios ambientales que las propiedades cafetaleras generen, sean también comercializados en mercados externos. De hecho, entre los objetivos específicos de la Iniciativa se incluye la contratación de una entidad administradora del Protocolo de Monitoreo y Verificación de Carbono, incluyendo otros aspectos ambientales y sociales; la contratación de SGS como la entidad de validación del Programa de Carbono del Café; y la comercialización a través de EcoSecurities Ltd. para la venta de Reducción de Emisiones Verificadas (VERs) en el mercado voluntario.

Fundación Ecológica SalvaNATURA

SalvaNATURA es la organización de conservación más grande de El Salvador. Actualmente es responsable del manejo de varias áreas protegidas como El Imposible y el Complejo Los Volcanes. Como socia de Rainforest Alliance, SalvaNATURA ha desarrollado capacidades de certificación desde que se implementó un proyecto con financiamiento del GEF, bajo el cual, desarrolló el Sello Eco-OK en zonas cafetaleras en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional El Imposible (Café Amigable con la Bio-

diversidad). Actualmente, SalvaNATURA también forma parte de la Red de Agricultura Sostenible (RAS), una red de organizaciones no gubernamentales de Latinoamérica. SalvaNATURA ha desarrollado una división especializada en certificación, SalvaCERT, a través de la cual se pretende certificar prácticas de manejo asociado a la fijación de carbono en cafetales, en zonas de bosque y en zonas agrícolas, a través del sello 'Climate Friendly', el cual se apega a los criterios y estándares del VCS (Voluntary Carbon Standard) y CCBS (Climate, Community & Biodiversity Standards), con el respaldo de Rainforest Alliance. Con esta lógica, SalvaNatura, apoya un proyecto piloto en la zona norte en Morazán enfocado en la fijación de carbono, con la idea de explorar una eventual venta al mercado de carbono. SalvaNATURA y SalvaCERT operan a nivel mesoamericano, particularmente en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Foro de Pensamiento Crítico y Propositivo ante el Cambio Climático

En julio de 2010 se conformó el Foro de Pensamiento Crítico y Propositivo ante el Cambio Climático en El Salvador, una especie de red de profesionales que busca vigilar y evaluar la gestión del problema del cambio climático en El Salvador, en el marco del cumplimiento de los compromisos internacionales y mandatos institucionales, así como desarrollar criterios y lineamientos propositivos para la elaboración de marcos e instrumentos efectivos de política sobre cambio climático, incluyendo estrategias, planes, programas, medidas y posiciones políticas de negociación.

Este Foro se plantea 3 hitos fundamentales: la incidencia política a nivel regional e internacional para lograr la mitigación mundial efectiva de las causas del cambio climático; la elaboración, fomento e implementación de estrategias para reducir la vulnerabilidad y aplicar medi-

das de adaptación al cambio climático; y la formulación y legitimación de un marco de políticas apropiado y efectivo para enfrentar el cambio climático, tanto en el ámbito nacional y local, como centroamericano. En este marco, el Foro pretende dar seguimiento y contribuir con análisis crítico a la dinámica de negociaciones sobre cambio climático y a las posiciones políticas de los gobiernos y ONGs en todos los ámbitos, aportando criterios y propuestas de negociación, integrales y consistentes con el Mandato de Bali y la CMNUCC, en el marco de una articulación entre las prioridades nacionales y mundiales.

Bajo la forma de pronunciamientos, el Foro difunde electrónicamente una serie de entregas en las cuales plasma sus posiciones ético-políticas en los diversos temas de negociación sobre cambio climático e insta a gobierno salvadoreño a asumir posiciones firmes y transparentes en los diversos temas de negociación, enfatizando la agenda de adaptación y reducción de vulnerabilidad por encima de los temas de mitigación, como REDD. Asimismo, el Foro reclama la necesidad de un debate público nacional para transparentar las posiciones del gobierno salvadoreño en las negociaciones de cambio climático. Aunque la membresía del Foro es individual, la pertenencia de su membresía no está clara, así como tampoco su representación.

NASACAYUB

Integra a 13 organizaciones a nivel nacional, muchas de las cuales cuentan con bosques primarios y cafetales bajo sombra. Aunque están en sus fases iniciales, se han comenzado procesos técnicos y comunitarios relacionados con REDD+ a las juntas directivas para familiarizarles con el tema. Están interesados en REDD+ como mecanismo para promover la conservación y resolver necesidades de las comunidades. NASACAYUB es socia de ACACES (Aso-

ciación Campesina de Agroforestería Comunitaria del Salvador).

FAO

Finalmente, FAO estará a cargo de la elaboración del inventario forestal de El Salvador, en coordinación con el Programa REDD-CARD de GTZ-CCAD.

NICARAGUA

Nicaragua cuenta con unas 5.3 millones de hectáreas de bosque. La región del pacífico ha comenzado a experimentar una 'transición forestal' con menores presiones sobre el bosque debido a las migraciones hacia centros urbanos y cambios en los medios de vida. La situación es distinta en la costa Caribe, donde continúan y se profundizan fuertes presiones sobre el bosque. Esta tendencia coexiste con avances importantes en el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas. La Costa Caribe nicaragüense atraviesa por un proceso importante de titulación de territorios en un contexto complejo de ingobernabilidad territorial, con fuertes dinámicas de deforestación y degradación.

Iniciativas y estrategias sobre REDD

Es en ese contexto que Nicaragua ha retomado el proceso de preparación para REDD en el marco del FCPF, proceso que estaría siendo liderado por el MARENA como punto focal de REDD, en coordinación con el MAGFOR e INAFOR.

Además del apoyo del FCPF, GTZ apoyaría con asistencia técnica al proceso de preparación. Esto incluye el Programa Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Fomento de Competencias Empresariales (MASRENACE), que ha acompañado de cerca el proceso del R-PIN desde 2008 y ahora apoya al punto focal de

REDD en MARENA para la formulación del R-PP.

Además de MARENA, MAGFOR e INAFOR, la preparación del R-PP de Nicaragua contaría con el apoyo técnico de INETER, gobiernos regionales y entidades de cooperación técnica como GTZ, FAO, PNUD y CATIE; en tanto que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), fungiría como la instancia de consulta y concertación de la Estrategia Nacional de REDD. La CONAFOR de Nicaragua incluye un órgano técnico, los Comités de Gobernanza Forestal (GOFOs), que incluye la representación de los Gabinetes de Participación Ciudadana, comunidades indígenas y propietarios de bosques.

Posiciones y roles de actores no gubernamentales

En Nicaragua, el interés en el tema de REDD entre las organizaciones no gubernamentales es bastante limitado. Actualmente, se pueden identificar dos tipos de actores activos: los grupos vinculados a derechos indígenas, cuyos intereses están fuertemente ligados a los procesos de titulación en territorios de la Costa Caribe; y por otro lado, organizaciones de carácter ambientalista con formas de inserción diversas.

Centro para la Autonomía de los Pueblos Indígenas (CADPI)

El CADPI está interesado en desarrollar procesos de investigación relacionados con los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. CADPI también tiene interés en promover la reflexión crítica sobre el desarrollo de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense, como forma de contribuir a la definición de políticas públicas, al mejoramiento e innovación de las capacidades institucionales para apoyar las estrategias de desarrollo justo, equitativo y sustentable de los pueblos indígenas y comunidades étnicas. CADPI se

interesa en REDD como parte del desarrollo de los pueblos indígenas. A través de los años han enfatizado la dimensión cultural y las identidades asociadas a la manera en que los pueblos indígenas administran sus territorios y manejan sus recursos naturales.

El Huracán Félix, en 2007, impactó fuertemente en la Costa Caribe, con efectos severos sobre los bosques, lo que también evidenció la vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a los efectos del calentamiento global. Eso generó un fuerte interés de los pueblos indígenas en los impactos del cambio climático, pues ponen en peligro su cultura y sus medios de vida. CADPI se enfoca en el territorio de Tasba Pri, donde el impacto del Huracán Félix afectó unas 45 mil hectáreas de bosque. Las autoridades territoriales en coordinación con las autoridades regionales y municipales, con apoyo de CADPI y URACCAN han apoyado el fortalecimiento de las estructuras organizativas del territorio, a través de la formación y educación (diplomados), que incluyen temas de organización comunitaria y territorial, cambio climático, técnicas de negociación y resolución de conflictos, y REDD. CADPI apoya el proceso de titulación de tierras, desarrolla estudios y consultas sobre temas vinculados con el cambio climático y derechos. Los procesos de consulta son apoyados por esfuerzos de investigación aplicada a nivel de comunidades. En la RAAN se han desarrollado al menos 10 estudios sobre cambio climático (Waspán, Río Coco, Kysalaya, Yuly, Endiamo, Sahsa, Orinoco, Laguna de Perlas, Pueblo Nuevo, Awastara y Pahara) con financiamiento de NITLAPAN y la Fundación Ford. Los principales temas surgidos de las consultas en comunidades incluyen: derechos de pueblos indígenas (participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, aplicación de los derechos de los pueblos indígenas emanados de las Naciones Unidas, y el derecho al consentimiento); y titulación en 12 territorios.

CADPI forma parte de la Alianza Nacional de Cambio Climático, que trabaja con INAFOR y MARENA. CADPI también está interesado en hacer un análisis de la legislación nacional para identificar los marcos legales que permitan impulsar acciones REDD en las regiones autónomas. CADPI tiene muy buenas relaciones con las autoridades regionales de la Costa Caribe, especialmente con la Asamblea Regional y con el Consejo Regional, tanto en la RAAN como en la RAAS. Estas autoridades tienen una Secretaría de Recursos Naturales, la cual trabaja para proponer una iniciativa autónoma de REDD, independientemente de las propuestas del gobierno central. Donantes como OXFAM UK, COSUDE y Cruz Roja Holandesa estarían apoyando la formulación de dicha propuesta. Adicionalmente, están elaborando una propuesta de REDD para los territorios Mayagna Sauni As y Tasba Raya.

La Fundación Ford ha apoyado a CADPI en la elaboración de guías de capacitación sobre cambio climático y REDD y medidas de adaptación en comunidades de las regiones autónomas de la Costa Caribe.

NITLAPAN

NITLAPAN también apoyó a CADPI en la elaboración de guías sobre cambio climático y REDD. Además, promueve, en colaboración con otros socios institucionales, el diseño, la experimentación y la validación de nuevas formas de producción agraria, pecuaria y forestal sostenibles y que, además, contribuyan a conservar y proteger los recursos naturales. El departamento de investigación ha generado información sobre captura de carbono en sistemas silvopastoriles en zonas ganaderas del país.

En coordinación con el CATIE, también impulsó un proyecto de pago por servicios ambientales como experiencia piloto en Centro-

américa, sobre uso de incentivos y mediciones de carbono en parcelas de Matiguás y Río Blanco. Actualmente ejecuta un proyecto con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sobre incentivos para pequeños productores en relación al manejo de tecnologías limpias, manejo de aguas mieles de café, reducción de emisiones por consumo de leña y biodigestores.

Centro Humboldt

El proceso oficial de preparación del R-PIN fue desarrollado por instituciones de gobierno, aunque invitaron a representantes de los gobiernos autónomos y algunas ONG a participar al menos a un taller. El interés del Centro Humboldt y de la Fundación del Río ha sido incidir en las negociaciones de cambio climático y es en ese contexto que se han involucrado en las discusiones sobre REDD. Centro Humboldt y la Fundación del Río forman parte de la Red Internacional Observatorio de la Sostenibilidad (Sustwatch) y de la Asociación de Cooperación Rural en África y América Latina (ACRA), que se conformó en el 2004. En ese marco, el trabajo de estas organizaciones incluye acciones de cabildeo dirigidas hacia negociadores y delegados oficiales en las negociaciones del texto sobre REDD.

Las preocupaciones principales de estas organizaciones están en torno al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Ante los resultados de la COP-15 en Copenhague, insisten en mantener el proceso de cabildeo que han venido promoviendo, sin embargo, hay dudas si este esfuerzo sigue teniendo sentido, sobre todo por considerar que las negociaciones globales constituyen un proceso viciado. De continuar el esfuerzo de cabildeo e incidencia, posiblemente se enfocará en los órganos subsidiarios de la Convención.

Según el Centro Humboldt, Noruega anunció el establecimiento de un programa REDD en el marco de lo que se ha dado en llamar el 'Acuerdo de Copenhague'. Dicho programa estaría siendo parte de UN-REDD y bajo la idea de que para acceder a los recursos ofrecidos por Noruega, los países deben adoptar el Acuerdo. Para varias ONG, el FCPF es un proceso que marcha independientemente del proceso de negociación. Mientras el Banco Mundial no condicione los recursos del FCPF al apoyo del Acuerdo de Copenhague, los procesos de preparación para REDD seguirían su curso trazado antes de la COP15. Con esa lógica, incluso el gobierno de Nicaragua piensa que recibir recursos del FCPF no les compromete con adherirse al Acuerdo. Es más, dado que el mecanismo también permite trabajar con fondos públicos, es justamente a eso que aparentemente le apuesta Nicaragua, sobre todo considerando que un esquema de mercado nunca será atractivo por los esperables bajos precios que podrían caracterizarlo.

Paso Pacífico Nicaragua

Paso Pacífico Nicaragua es una ONG de conservación establecida en 2005. Promueve dos corredores biológicos, uno en el istmo que conecta el Lago de Cocibolca con el Océano Pacífico, y el otro, en las sierras de Carazo. Incurrieron al mercado de carbono con el proyecto Retorno al Bosque, financiado con bonos del mercado voluntario. Actualmente están iniciando el diseño de un proyecto REDD, que piensan combinarlo con un proyecto de reforestación, porque las áreas de bosque seco con que cuentan son muy pequeñas para una economía de escala de venta de carbono a través de REDD. Las plantaciones con que cuentan están certificadas a través de Smart Wood y con los criterios de CCBA, por lo que han recibido varios reconocimientos internacionales.

Empresa Forestal Comunitaria de Butku

La Empresa Forestal Comunitaria de Butku, territorio de la RAAN, pertenece al bloque comunitario SIPPBA/SA, y está en la fase inicial de implementar un proyecto piloto de captura de carbono con el apoyo de la cooperación del gobierno de Cataluña, España.

COSTA RICA

En las últimas dos décadas, Costa Rica se ha vuelto referente internacional por su experiencia en recuperación y conservación forestal. Según la FAO (Evaluación de los Recursos Forestales, 2010) Costa Rica cuenta con 2.6 millones de hectáreas de bosque, una cantidad sustancial de la cual se constituye por bosque secundario, tras la acelerada deforestación que se vio en el país entre los años 50 y 80. El programa nacional de Pagos por Servicios Ambientales, FONAFIFO, ha recibido atención internacional por su rol en esta recuperación y conservación, aunque varios estudios no dejan claro su efectividad y rol en estos procesos, afirmando que cambios en las políticas agropecuarias y dinámicas de estos mercado han tenido mayor impacto en este proceso que el sistema de PSA. Sin embargo, Costa Rica ya cuenta con bastante experiencia y conocimiento relevante para el desarrollo de un programa REDD, además de instituciones del gobierno que han tenido un cierto nivel de éxito en la conservación forestal en el país.

Costa Rica aprovecha su capacidad técnica e institucional derivada de su experiencia con FONAFIFO y con el sistema de pago por servicios ambientales a nivel nacional. A diferencia de México y Panamá, Costa Rica muestra un mayor nivel de consultas realizadas (y previstas) con pueblos indígenas. Incluye a varios representantes indígenas en su 'equipo de consulta' del R-PP y la Asociación de Desarrollo

Indígena (ADI) tiene representación en el 'grupo de trabajo' de REDD. No obstante, el R-PP no discute la representatividad de las organizaciones indígenas. Una debilidad importante en la estrategia de Costa Rica incluye la falta de detalle y localización de las dinámicas de deforestación y queda por ver si se podrá integrar a los sectores más allá del sector forestal en su estrategia REDD+, sobre todo considerando que el vínculo con otros sectores clave, todavía es muy débil. Para Costa Rica, la evaluación externa del R-PP recomendó:

- El R-PP deja claro que se espera cooptar un conjunto importante de entidades dentro de la Secretaría para manera la propuesta de REDD+. Es claro el involucramiento de algunos de los mayores emisores de gases de efecto invernadero y el apoyo político expresado en el involucramiento de los ministerios de energía, transporte, agricultura e industria en las reuniones semanales del gabinete de gobierno. Sin embargo, dos grupos importantes de actores, como la academia y los partidos de oposición parlamentaria no han sido incluidos en los procesos de consultas y organización de la estrategia.
- La academia es un sector clave, no sólo por las investigaciones que realiza y su eventual participación en el establecimiento de niveles de referencia y monitoreo, sino también porque se ha distinguido como un depositario importante de conocimiento.
- La inclusión de opositores políticos puede ayudar a que el proceso sea más robusto, contribuir más a la sostenibilidad y reducir posibles conflictos. Por otra parte, aunque el R-PP hace referencia a los intereses de los pueblos indígenas, no detalla ninguna propuesta para incluirlos en los procesos de consulta.

Posiciones y roles de actores no gubernamentales

En Costa Rica existe un amplio rango de actores no gubernamentales que están posicionándose frente a una eventual mecanismo de REDD, incluyendo: organizaciones campesinas, grupos indígenas, grupos ambientalistas y grupos de conservación. Este tiene sentido, la experiencia de Costa Rica en esquemas de pago por servicios ambientales ha fomentado interés en diversos sectores sobre las implicaciones de un eventual mecanismo de REDD. Asimismo, como se señalaba anteriormente, la estrategia oficial de preparación para REDD ha incluido un proceso relativamente amplio de consulta con organizaciones de la sociedad civil.

Organizaciones campesinas

Para representantes de movimientos campesinos, un aspecto de enorme importancia es determinar si REDD será concebido como un nuevo mecanismo de mercado o no. Para Vía Campesina, detener la deforestación y la degradación de los bosques no puede terminar siendo un simple mecanismo de contabilidad de créditos de carbono sobre el cual se basen mercados especulativos que favorecen a grandes empresas y el mantenimiento de los niveles de emisión en los países industrializados. Su preocupación se basa en que existe casos donde corporaciones u organizaciones de conservación expulsan campesinos de sus tierras para liberar áreas dedicadas a supuestos proyectos REDD (ver www.viacampesina.org). Por esta razón, la seguridad en la tenencia de la tierra y la equidad en la distribución de la misma es un tema fundamental para el sector campesino. Por ello, plantean que cualquier mecanismo que busque enfrentar el cambio climático, no sólo debe de alejarse del comercio de carbono, sino que además debe integrar componentes que fomenten una mejor distribución y una mayor seguridad en la tenencia de la tierra.

La expansión de grandes monocultivos promovidos por las estrategias de fomento a los agonegocios, cuya producción va dirigida a mercados internacionales, es una de las principales causas subyacentes de la deforestación. Frente a esto, otro tema de importancia para enfrentar y mitigar el cambio climático se relaciona con el rol y fomento de los agroecosistemas, por su importancia para la soberanía alimentaria y energética. En Costa Rica existen muchas experiencias campesinas de conservación e integración de bosques a la economía local. La Asociación para la Conservación de Bosques Comunitarios (ASCOMAFOR) ubicada en la zona norte es un ejemplo. Esta organización conserva y gestiona de manera sustentable bosques comunitarios. En la región norte, que comprende los cantones de Upala, Los Chiles, Guatuso, San Carlos y San Ramón, existen alrededor de 4,000 hectáreas de bosques campesinos que pudieran ser apoyados en su gestión por un programa para enfrentar la deforestación y degradación de bosques. Uno de los principales problemas que enfrentan es la incertidumbre en la tenencia de la tierra.

Grupos indígenas

Para el sector indígena costarricense las políticas públicas que fomenten la conservación de bosques así como su restauración en los territorios indígenas son importantes. Sin embargo, dichas políticas, así como cualquier mecanismo que se discuta (como actualmente sucede con REDD) no debe estar relacionado al comercio de carbono y debe permitir la planificación desde los mismos pueblos indígenas, según lo disponen diversos convenios y declaraciones internacionales. Por lo tanto, cualquier política ó mecanismo debe favorecer la autonomía y desde las etapas iniciales debe darse con la participación de los pueblos indígenas.

La experiencia sobre PSA en territorios indígenas ha sido muy contradictoria. En los territo-

rios Ngöbe por ejemplo, se han entregado recursos en PSA durante los últimos cinco años (territorios de Coto Brus y Conte Burica se han entregado montos de PSA por más de 600 y 800 millones de colones respectivamente, unos \$3 millones). Sin embargo, hasta el momento no se conoce de ningún caso donde el uso de estos fondos haya servido para consolidar sus territorios dado que gran cantidad de tierras todavía esta en manos de personas no indígenas. Lo anterior es de fundamental importancia pues hay territorios Ngöbe donde más del sesenta por ciento de la tierra está en manos de ganaderos no indígenas que provocan deforestación. Por otro lado, al ser el PSA un programa gubernamental, negocia los contratos con las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) adscritas al Consejo Nacional Indígena (CONAI), que es una institución de carácter oficial encargada de manejar tanto los asuntos indígenas como su relación con las instituciones públicas. Además del impacto negativo en el derecho a la autonomía indígena, esta práctica ha favorecido que el dinero se reparta entre indígenas allegados y cercanos a quienes controlan la ADI en los diversos territorios y en general, no existe un uso de dichos fondos para estrategias más amplias en los territorios.

La ratificación del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de Pueblos Indígenas (expediente Legislativo 14.352), por parte de la Asamblea Legislativa contribuiría en eliminar este tipo de prácticas y al fortalecimiento de la autonomía indígena. El gobierno por su parte muestra como un logro del PSA, la distribución de poco más de US\$9 millones entre los territorios indígenas del país. A pesar de que hay casos exitosos, como es el caso del Territorio Indígena Bribri en Salamanca, donde se ha hecho un uso planificado de estos recursos y/o se han repartido de manera equitativa, en muchos otros, como en el territorio Ngöbe de Alto Laguna de Osa, estos fondos han generado tensiones ya que algunos grupos se han apropiado y los han

administrado favoreciendo a las familias más cercanas a su entorno. En todo caso, los fondos del PSA no han cumplido con una de las necesidades más apremiantes, que es la consolidación de territorios y la recuperación de bosques indígenas en terrenos deforestados por ganaderos no indígenas. Los indígenas enfatizan que la mayor parte de bosques primarios en buen estado, se encuentran en sus territorios. Se estima que entre 5% y 8% del territorio nacional incluye bosques primarios indígenas. La capacidad de los pueblos indígenas para conservar estos bosques es alta, pero necesitan apoyos diversos, incluyendo recursos financieros, sin embargo, deben de ser canalizados cuidadosamente y administrados de manera transparente.

Grupos ambientalistas

Varias organizaciones ambientalistas costarricenses coinciden en la necesidad de contar con políticas públicas que apoyen financieramente la conservación de los bosques, así como su restauración y recuperación. Coinciden con sectores campesinos y pueblos indígenas en que las políticas y mecanismos en discusión, como REDD, debe mantenerse fuera de los esquemas de mercado de carbono. Para estos grupos este es un tema de particular importancia ya que se señala el comercio de carbono como una falsa solución que permite a las empresas y corporaciones de países industrializados seguir emitiendo GEI, ignorar los compromisos de reducción a partir de la fuente y mantener las mismas estructuras productivas y los mismos niveles de consumo y despilfarro de recursos que nos han llevado a la actual crisis climática. Sin embargo, las organizaciones ambientalistas reconocen que el bosque es uno de los frentes más importantes de lucha contra el cambio climático y que disminuir la deforestación y la degradación de los bosques contribuye a la mitigación del cambio climático y a adaptarnos al mismo. Reconocen además que los recursos financieros para fomentar actividades

en este sentido son necesarios, siempre y cuando se canalicen de manera adecuada y vayan acompañadas de otras medidas.

Estas organizaciones enfatizaron que las plantaciones de árboles no son bosques y que no se deben subvencionar a partir de mecanismos REDD, ni con mecanismos o políticas públicas de otro tipo. De hecho presentan evidencia de que las plantaciones de monocultivos constituyen una de las principales causas subyacentes de deforestación, así como graves impactos ambientales, sociales, culturales y hasta económicos. Se sugiere la creación de mecanismos financieros a partir de cánones a las emisiones, reducción en la inversión y subvención pública a la exploración de petróleo, construcción de carreteras y fabricación de autos y/o la cancelación de la deuda ecológica. Ellos señalan que los fondos no deben generar un incremento en el valor económico de los bosques, pues ello fomenta la creación de mercados especulativos de la tierra. Los recursos financieros, se deberían canalizar a través de proyectos específicos de gestión comunitaria de bosques, consolidación de políticas públicas y consolidación de la tenencia de la tierra en territorios indígenas o de comunidades campesinas.

No menos importante es la amenaza que implica el uso del término REDD+ por parte del gobierno y los sectores madereros, pues implica rescatar la subvención a la explotación maderera mediante prácticas destructivas de los bosques. Hay una discusión nacional sobre si el supuesto manejo sostenible del bosque (especificado mediante la Ley Forestal y su reglamento) es realmente sostenible, o si por el contrario, ha sido una de las causas subyacentes de la deforestación y una causa directa de degradación de bosques. En varias ocasiones, el sector maderero ha intentado recuperar las millonarias subvenciones que recibieron en la década de los noventa mediante incentivos forestales o PSA.

Por ello, los grupos ambientalistas adviertan que debe evitar cualquier mecanismo o política pública de convertirse en un incentivo de este tipo de actividades que se han dado en el pasado.

Por otro lado, existen acciones impulsadas desde el movimiento ambientalista y campesino, con muy poco o nulo apoyo gubernamental y que marcan la diferencia en cuanto al manejo forestal, tal como ocurre con el Decreto de Aprovechamiento de Madera Caída, el cual permite extraer madera de bosque que cayó en forma natural, mediante técnicas de muy bajo impacto. Asimismo, bajo la figura de REDD+, la metodología de restauración del bosque podría tener un rol importante, pues combina la regeneración secundaria con el enriquecimiento mediante siembra de especies forestales que producen maderas finas y alimentos (para la familia y para la fauna). Se esperaría que acciones de REDD+ apoyaran este tipo de proyectos, pues desde el punto de vista socio-ambiental son más justos y solidarios.

Organizaciones de conservación

Organizaciones de carácter conservacionista, como TNC, y de carácter forestal, como FUNDECOR, apoyan las iniciativas del gobierno en torno a la promoción de acciones REDD. TNC forma parte del equipo negociador de Costa Rica en la Convención de Cambio Climático, junto con otras instituciones gubernamentales, como se dio a conocer en una presentación que realizó FONAFIFO sobre el “Estado de las Negociaciones REDD en la Convención del Cambio Climático”, en Octubre del 2009. TNC reporta proyectos pilotos REDD en Belice y otros países tropicales y considera que este tipo de mecanismos puede “desatar el mercado”, aportando decenas de miles de millones de dólares para apoyar la conservación de bosques y biodiversidad.

Finalmente, la Fundación para el Desarrollo y la Protección de los Bosques de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR) colabora con FONAFIFO en el desarrollo de una metodología para evaluar el potencial de los bosques y el manejo de la cobertura forestal para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y es una de las principales organizaciones aliadas de FONAFIFO en sus iniciativas de promoción de mecanismos REDD+. FUNDECOR jugaría un rol importante en la coordinación de las consultas para preparar el R-PP del FCPF.

Otros actores

Centro Científico Tropical (CCT): El Centro Científico Tropical es una organización no gubernamental de investigación científica y conservación. El CCT ha participado en reuniones sobre los aportes científicos necesarios para la estrategia de REDD+, pero no ha tenido un papel central hasta el momento. A nivel regional, pretende implementar varios proyectos pilotos en territorios indígenas, junto con el Consejo Indígena de Centroamérica (CICA).

El Instituto de Biodiversidad (INBIO): El INBIO, es un centro de investigación y gestión de la biodiversidad, establecido en 1989 para apoyar los esfuerzos por conocer la diversidad biológica del país y promover su uso sostenible. Trabaja en estrecha colaboración con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Aunque no haya tomado un rol central en REDD+ hasta el momento, podría convertirse en actor importante en cuanto al vínculo entre REDD+ y biodiversidad en el país.

PANAMÁ

Panamá cuenta con unas 3.2 millones de hectáreas de bosque y el área de plantaciones aumentó de 12 mil hectáreas en 1992 a 71 mil hectáreas en 2008. Durante los noventa, tasas de deforestación relativamente altas disminuyeron

la cobertura forestal de 49.3 a 44.9% entre 1992 y 2000, mientras que entre 2000 y 2008, la cobertura solo se redujo en 1.54%. Existen diversos factores para esta disminución en la deforestación, incluyendo el agotamiento de algunas zonas de frontera agrícola, la migración hacia centros urbanos y nuevas regulaciones ambientales. Sin embargo, diversas fuentes también insisten en procesos acelerados de deforestación continuada en determinadas regiones del país.

Panamá enfrenta esta situación con una serie de instituciones que podrían sentar las bases para el desarrollo de una estrategia REDD efectiva y beneficiosa para comunidades forestales y pueblos indígenas. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) ha demostrado una capacidad importante para implementar sus políticas, en comparación con otros países. Además, Panamá ha logrado avances importantes en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades forestales, por ejemplo, a través de la consolidación de varias Comarcas, una forma de propiedad colectiva, en al menos 20% del territorio nacional, que está en manos de diversos pueblos indígenas.

Sin embargo, aunque la Comarca reconoce el derecho de estos pueblos sobre la tierra y el territorio, los derechos sobre los recursos en esos territorios, no están suficientemente esclarificados.

Iniciativas y programas sobre REDD

Como los demás países de Mesoamérica, Panamá sometió su R-PIN al FCPF. Desde la preparación de dicho documento, se puede apreciar la orientación y peculiaridades de cómo se visualiza la preparación de Panamá para REDD. Por ejemplo, Panamá enfatiza REDD como una oportunidad para promover ‘negocios verdes’ como una modalidad de mitigar la presión sobre el bosque, pero no profundiza en

las causas subyacentes de la deforestación y la degradación, de modo que no queda clara la manera en que los ‘negocios verdes’ realmente aborden la deforestación. Asimismo, el R-PP no provee información acerca de las dinámicas territoriales dentro de las comarcas, ni acerca de los conflictos territoriales que enfrentan los pueblos indígenas, tanto dentro, como fuera de las distintas comarcas. Entre las principales recomendaciones realizadas por la evaluación externa del R-PP de Panamá, están.

- El Gobierno de Panamá deberá identificar claramente la magnitud y ubicación de las causas directas y subyacentes de los cambios en la cobertura y calidad forestal, de modo que pueda diseñar una estrategia REDD enfocada específicamente en dichas causas. Este esfuerzo, probablemente requerirá involucrar muchas entidades gubernamentales, más allá del sector ambiental tradicional.
- Un aspecto particularmente importante es la consulta con los pueblos indígenas, así como el respeto de sus derechos, sobre todo considerando que 34% de los bosques de Panamá están en cinco de las Comarcas oficialmente reconocidas y un porcentaje desconocido de bosques está en áreas de tierras indígenas con reclamos pendientes de resolver. Panamá ha reconocido más que muchos países, los derechos territoriales y las formas de autogobierno de los pueblos indígenas, y ha desarrollado varios foros y talleres sobre REDD entre la ANAM y líderes de pueblos indígenas. Sin embargo, dichas discusiones aún se encuentran en etapas muy preliminares y la mayoría de autoridades de los pueblos indígenas han expresado una fuerte insatisfacción acerca de la manera en que ANAM ha manejado este asunto. Para que eventuales acciones REDD funcionen satisfactoriamente en territorios indígenas de Panamá, el gobierno deberá

propiciar una participación activa de los pueblos indígenas, tanto en el diseño, como en la implementación de la estrategia REDD y no sólo informar de dichas estrategias.

- Otro elemento crucial será la resolución de conflictos sobre la tenencia de la tierra y los derechos territoriales, ya que los pueblos indígenas poseen derechos relevantes bajo marcos legales nacionales e internacionales.

Por su parte, tal como se discutió antes, el Programa de ONU-REDD en Panamá está orientado a reducir la deforestación y degradación de los bosques, recuperar y aumentar la cobertura boscosa mediante mecanismos innovadores para las comunidades y para la sociedad, y el fortalecimiento de los esquemas de gestión ambiental de Panamá.

El propósito del Programa ONU-REDD es contribuir a la preparación y desarrollo de las capacidades para que Panamá pueda estar listo para implementar actividades que reduzcan las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, para finales de 2012.

Frente a los claros problemas de consulta y representación de los pueblos indígenas, el Programa estableció que la ANAM tendría que impulsar un proceso de diálogo y concertación con los pueblos indígenas, a través del mecanismo de consentimiento libre, previo e informado que identifique la situación jurídica, institucional, social y económica, y la adecuación de las medidas legislativas, administrativas, que evite cualquier forma de discriminación y exclusión de los pueblos indígenas con el fin de garantizar la participación real y efectiva en el Programa ONU-REDD. Con esta lógica, se estableció que la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), los congresos y los consejos generales son las instituciones tradicionales de coordinación en el

proceso de preparación para REDD en territorios indígenas.

Asimismo, durante 2009, se desarrollaron foros sobre cambio climático en Chiriquí, Los Santos, Veraguás, Herrera, Coclé, Bocas del Toro y Darién, en los cuales se abordó el tema de REDD. Más allá de esto, el Programa prevé sensibilizar y consultar a los pueblos indígenas, utilizando los mecanismos internos contemplados en sus costumbres y legislaciones, acerca del establecimiento de una salvaguarda de cumplimiento de las políticas del Programa REDD en los territorios indígenas.

Posiciones y roles de actores no gubernamentales

Panamá es un caso que resalta tanto las disparidades y desequilibrios de conocimiento sobre el tema de REDD entre los actores sociales, como la evolución de posiciones de los grupos indígenas respecto a REDD. Por una parte, resalta el desconocimiento del tema de REDD, en particular entre la base indígena, y la necesidad de explicar y socializar más sobre qué significa REDD. Por otro lado, la postura de las organizaciones indígenas frente a REDD ha pasado por un firme rechazo en defensa de sus territorios, hacia una postura cautelosamente abierta para explorar las posibilidades de fortalecer sus derechos a partir de un posible esquema de REDD.

Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP)

COONAPIP se conformó en 1990 para promover la unidad y fortalecer las estructuras organizativas de los pueblos indígenas. En sus primeros años, la organización jugó un papel importante en el reclamo de los derechos indígenas, sin embargo, tuvo una fuerte decaída y desde inicios del 2009 ha comenzado a fortalecerse nuevamente. Su agenda sigue enfocada en

la seguridad jurídica de las tierras en las comarcas y territorios colectivos. Simultáneamente atienden la finalización de la titulación de tierras colectivas y las solicitudes de creación de Comarcas de los pueblos Naso Tjerdi, Bribri y Dagargunyala. Las prioridades de COONAPIP son el ordenamiento territorial y el fortalecimiento organizativo. Aunque no tiene estatus legal, COONAPIP tienen fuerza política. Las Comarcas tienen categoría de Provincias, pero no tienen los recursos ni los mandatos que reciben las Provincias de acuerdo a la legislación panameña.

Como parte de su preparación para REDD, el gobierno panameño presentó el R-PP en Ginebra a mediados del 2009, afirmando que contaba con el respaldo de los pueblos indígenas. Sin embargo, según COONAPIP, el único intercambio que ellos tuvieron con ANAM fueron algunas informaciones de avance, de modo que eso no puede considerarse como consulta con los pueblos indígenas. Como consecuencia, representantes de las comarcas indígenas expresaron por escrito al gobierno panameño sus preocupaciones por la falta de consulta en sus comunidades acerca del proceso de preparación para REDD. De hecho, como nota el presidente de COONAPIP, la representación que otros hacen de los pueblos indígenas es un problema recurrente que enfrentan como indígenas, pues según ellos, muchas ONG y personas hablan en nombre de las poblaciones indígenas. Aunque tenían previsto participar, decidieron no ir a la Cumbre de Copenhague en Diciembre de 2009, porque el gobierno no los reconoció como parte de la delegación oficial. Sin embargo, a la Cumbre de Copenhague fueron ONG que hablan en nombre de ellos, sin tener la autoridad para hacerlo.

En el marco de UN-REDD han tenido una participación formal en la preparación del Programa y han dado su respaldo al documento, siempre y cuando se respeten los planteamientos

tos acordados en el acta firmada por COONAPIP el 6 de octubre de 2009. Los puntos principales giran en torno al cumplimiento de un plan de participación de los pueblos indígenas en el proceso REDD, el reconocimiento de los derechos colectivos sobre la tierra y los recursos naturales en los territorios de los pueblos indígenas, el fortalecimiento institucional y técnico de sus organizaciones, la revisión y ajustes a las normas sobre derechos indígenas en las leyes nacionales, la seguridad jurídica de sus territorios, el consentimiento previo de los pueblos indígenas, el reconocimiento de áreas de bosque y la solicitud de aval a los pueblos indígenas para desarrollar actividades forestales en sus territorios. Para los Caciques, los territorios indígenas constituyen lugares de conservación de los remanentes de bosque primario y biodiversidad más importantes a nivel nacional. Si REDD se implementa en territorios de pueblos indígenas, debe beneficiar de manera equitativa a las comunidades y pueblos indígenas, siempre y cuando los programas y actividades sean coherentes con los principios de respeto y reconocimiento de los derechos colectivos y los derechos de propiedad colectiva sobre las tierras.

COONAPIP tiene previsto elaborar su propia estrategia sobre REDD, con o sin el gobierno. De hecho, están desarrollando un proceso de consulta con apoyo del Banco Mundial y del Instituto de Investigación y Desarrollo de Kuna Yala. Este proceso abarca los territorios Kuna (Kuna Yala, Kuna de Wargandi, Kuna de Madungandi y Kuna de Dagarkunyala), Emberá (Emberá y Wounaan de la Comarca Emberá y Wounaan de Tierras Colectivas, Emberá de Alto Bayano y Wounaan de Majé Chimán); y Ngöbe-Buglé, Bribri y Naso Tjërdi. Ya se han realizado más de 10 talleres en los Congresos y un taller nacional de síntesis. Los principales planteamientos tienen que ver con los conflictos con la ANAM en relación al traslape de territorios indígenas con Áreas Protegidas, el concep-

to de manejo de bosques, el temor a que grandes empresas se beneficien del carbono de sus bosques y el temor a que les prohíban sus prácticas milenarias de producción de alimento y bienes del bosque.

Algunos miembros de las Comarcas Indígenas también han participado en eventos de diálogo y capacitación en REDD facilitados por otras organizaciones. El Smithsonian Tropical Research Institute, la Universidad de McGill y la Iniciativa ELTI (Environmental Leadership and Training Initiative) desarrollaron una serie de talleres de formación y desarrollo de capacidades en REDD con líderes indígenas, a través de un financiamiento del Blue Moon Fund durante el 2009. De acuerdo a personal técnico de COONAPIP, esperan seguir desarrollando estas capacidades con asistencia de la Fundación Packard, pues tienen elaborado un proyecto de fortalecimiento institucional de COONAPIP.

Fundación Dobbo Yala

Es una organización indígena no gubernamental constituida en los años 90 que tiene como lema: 'El Desarrollo Indígena y la Conservación Ambiental'. Dobbo Yala es la unión de dos palabras indígenas que significan territorio y ambiente. Dobbo, en lengua Gnöbe; y Yala, en lengua Kuna. Esta fundación participó junto con el Smithsonian Institute, la Universidad de McGill y COONAPIP en los talleres sobre REDD realizados en 2009. Desarrolla un proyecto de legalización de tierras colectivas en Darién, con acciones de desarrollo sostenible y conservación de bosques. Dobbo Yala es socia de UICN en la facilitación comunitaria para preparar proyectos en el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico. Actualmente desarrollan los siguientes proyectos: legalización de tierras colectivas Emberá y Wounaan en Darién, con componentes de desarrollo sostenible y conservación; plantas medicinales y procesos curativos entre los Kunas; Etno-

ecoturismo en la Isla de Yandup, Ukubseni, Kuna Yala; legalización del territorio Naso en Bocas del Toro; redacción de la Carta Orgánica en la Comarca de Wargandi (Darién) y elaboración participativa del Plan de Acción Anual de la Comarca; y facilitación para la elaboración comunitaria de subproyectos con el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño.

Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales

El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales trabaja el tema de REDD como parte de su área de trabajo sobre cambio climático y tienen un rol activo como parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). Sus aportes se basan en investigaciones, capacitaciones y programas de conservación de la biodiversidad y ecosistemas. Este Instituto tiene varias iniciativas de conservación y educación, y en el tema de REDD, en el marco de la Iniciativa de Capacitación en Liderazgo Ambiental del Instituto (ELTI), en alianza con la Universidad de McGill, han realizado una serie de cursos de introducción sobre REDD, en los que han participado representantes de pueblos indígenas.

Como parte del Programa conocido como la Opción en Ambientes Neotropicales (NEO), el Instituto y la Universidad de McGill desarrollan un programa de investigación con estudiantes que se han involucrado fuertemente en respaldar científicamente estudios que se espera puedan ayudar a poner en marcha iniciativas REDD en beneficio de comunidades y comarcas indígenas. En las tierras colectivas de Ipetí Emberá han desarrollado estudios para determinar la factibilidad de desarrollar un proyecto MDL que incluyó la estimación de carbono en diversos usos del suelo, que brindan medios de vida a las comunidades. La experiencia en la construcción de una línea de base considerando tendencias futuras de cambios de uso del suelo

ha sido altamente valorada, aunque los resultados pronostican una reducción del 50% de los stocks de carbono para los próximos 20 años. En adición al amplio portafolio de investigaciones, el Instituto desarrolla una estrategia de compensación de sus emisiones a través mercados voluntarios, trabajando con comarcas indígenas en programas de conservación de bosques.

La Autoridad del Canal de Panamá

La Autoridad del Canal de Panamá desarrolla un concepto de la Ruta Verde que tiene tres ejes: el manejo social y ambiental en la cuenca del Canal; la reducción de las emisiones de CO₂; y la puesta en marcha de medidas de mitigación y compensación requeridas en el proyecto de ampliación del Canal. Para la reducción de emisiones trabajan en varias iniciativas que incluyen capitalizar la fijación de dióxido de carbono de los proyectos de reforestación y forestería en 20,000 hectáreas produciendo Certificados de Reducción de Emisiones en un proyecto adscrito al MDL, que tiene proyectado generar 6 millones de tCO₂ adicionales. El programa de ampliación del Canal se visualiza como un modelo de adaptación y mitigación al cambio climático, donde la reducción en el consumo de combustible por el uso de buques eficientes, generará ahorro de emisiones. La reducción de emisiones de CO₂ con el canal ampliado proyecta la mitigación de más de 100 millones de tCO₂ entre 2015 y 2025. Con relación a REDD, han visualizado varias iniciativas que incluyen una tesis doctoral de la universidad de Duke para analizar las capacidades y oportunidades de REDD en la cuenca del canal, una especie de estudio de factibilidad. Entre las oportunidades, además de la deforestación y degradación evitada que se ha calculado, hay un potencial por extracción de madera sumergida en el lago Gatún, para lo cual se están realizando estudios a través de consultores, de modo que informen esta iniciativa. Institucio-

nalmente, el Canal de Panamá busca ser carbono neutral. CATHALAC podría apoyar este proceso en una eventual relación de largo plazo con la Autoridad del Canal. La Autoridad del Canal se ha interesado en el mercado voluntario de carbono y han conversado con algunas firmas de cara a un programa de incentivos económicos, que incluiría mecanismos de pago por servicios ambientales. La Autoridad del Canal participa en el Comité Nacional de Cambio Climático.

Fundación Natura

La Fundación Natura es una organización privada sin fines de lucro, establecida legalmente desde 1991, dedicada a la promoción de planes y programas para la protección y conservación del patrimonio natural de Panamá. Apoya con el fondo FIDECO actividades y operaciones del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; realiza acciones en las zonas degradadas de las provincias centrales, que constituyen el núcleo principal de las migraciones hacia las zonas boscosas del país. Su principal involucramiento en REDD+ han sido acciones de incidencia.

The Nature Conservancy (TNC)

Esta organización ha trabajado en proyectos de carbono forestal por aproximadamente 10 años, en un total de 6 países. Como parte de su iniciativa de Cambio Climático Global, TNC apoya la inclusión de la deforestación en las negociaciones de cambio climático. Ha comprometido 5 millones de dólares para el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial. TNC esta entre las organizaciones que tienen alto conocimiento del tema de REDD+ y tienen incidencia en el tema. En Panamá, TNC ha participado en el desarrollo del R-PP.

ACTORES REGIONALES E INTERNACIONALES

Además de los programas impulsados por el Banco Mundial (FCPF), las Naciones Unidas (UN-REDD) y la Cooperación Alemán (GTZ REDD-CARD), existe un conjunto de otros actores regionales e internacionales que están perfilando posiciones y/o roles importantes en la preparación para acciones REDD en Mesoamérica.

Entre ellos se incluyen: Organizaciones de la sociedad civil; organizaciones de formación e investigación; organizaciones de conservación; y, organizaciones de cooperación. A continuación se presentan un breve resumen de los principales actores de cada uno de estos grupos y los roles que están desempeñando en relación a la preparación de REDD en la región.

Organizaciones de la sociedad civil

Foro Indígena Latinoamericano sobre Cambio Climático

Es un espacio de diálogo e incidencia sobre cambio climático conformado por pueblos indígenas. Incluye la participación del Consejo Indígena de Centroamérica (CICA), el Consejo Indígena Mesoamericano (CIMA), la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Coordinadora Andina de las Organizaciones Indígenas (CAOI), la Red de Mujeres Indígenas sobre la Biodiversidad, El Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica, y el Consejo y la Alianza Internacional para los Pueblos Indígenas y Tribales.

Este Foro se organizó para promover el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en particular los derechos relacionados a la tierra, a los territorios y a los recursos, así como para asegurar la plena y efectiva participación de los pueblos indígenas en los procesos e iniciativas relacionados con el cambio climático, de acuerdo a los principios de consentimiento previo, libre e informado.

Por el momento, el mayor enfoque del Foro se concentra en incidir en las negociaciones bajo la CMNUCC, pero también busca abordar los retos que presenta el cambio climático para los pueblos indígenas en un sentido más amplio. Por ello, el Foro también busca constituirse en un espacio para la construcción de diálogos, propuestas y discusiones sobre el tema. En el 2010, el Foro realizó varias reuniones (San José, en Marzo; Managua, en Mayo y la Ciudad de Panamá, en Junio), donde han avanzado en discusiones, formulación de posiciones y estrategias de cara a las negociaciones de la CMNUCC. Sus posiciones incluyen el rechazo a mecanismos de mercado asociados con estrategias de REDD. Han contado con apoyos de UICN, CI y GTZ (Sur-América).

Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC)

Es una organización de base comunitaria que busca empoderar a las comunidades indígenas y campesinas de la región Centroamericana, por medio de trabajo enfocado en el desarrollo social, cultural, productivo y económico de las organizaciones socias. ACICAFOC tiene varios ejes de trabajo relacionados con cambio climático. A partir de julio de 2010, comenzó una iniciativa para fortalecer la participación de pueblos indígenas en el desarrollo de estrategias REDD+ en toda la región.

Este trabajo se complementa con el Programa de Apoyo a las Organizaciones Comunitarias en Guatemala y El Salvador, el cual busca fortalecer capacidades técnicas y organizativas para lograr una respuesta efectiva ante el cambio climático y el despliegue de iniciativas de mitigación y adaptación.

En enero de 2010 lanzaron un programa regional de tres años para visibilizar el aporte de las comunidades indígenas y campesinas en la mitigación y adaptación al cambio climático.

Organizaciones de formación e investigación

Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC)

CATHALAC opera desde 1992 como organismo especializado en agua bajo el marco de la UNESCO y está ubicado en Panamá. Hay un acuerdo intergubernamental entre los países de la región de América Latina y el Caribe para operar como Centro de gestión integral de recursos hídricos. CATHALAC opera en base a los aportes de los países, pero también se financia por medio de proyectos y venta de servicios, por lo cual han desarrollado una infraestructura de capacitación y enseñanza. Son comunes proyectos y acuerdos de cooperación técnica con entidades como USAID, el BM, el BID, la NASA, la CCAD, CEPREDENAC y otros, así como con universidades.

CATHALAC administra SERVIR, una plataforma que integra información satelital y datos geoespaciales para proveer de información actualizada a diversos actores para la toma de decisiones sobre diversos temas. Aunque SERVIR está enfocado en Mesoamérica, a solicitud de USAID se está expandiendo a otras regiones, como África.

SERVIR trabaja en los 9 temas de GEOSS (Sistemas de Observación Global de la Tierra), todos relevantes para REDD (desastres, ecosistemas, biodiversidad, clima, agua, agricultura, energía etc.). Las agencias involucradas en la plataforma de SERVIR son la NASA, la USAID, la CCAD y el BM. No es claro si estas organizaciones brindan financiamiento institucional (core support) a CATHALAC ó si USAID proporciona financiamiento para administrar SERVIR.

CATHALAC imparte una maestría virtual sobre cambio climático con FUNIBER y otros programas de estudios (study abroad) y pasantías. Con recursos de PREVDA, CATHALAC desarrolla un estudio de cambios en cobertura de bosques comparando 1980, 1990, 2000 y 2009, el cual se espera completar a finales de 2010. Este estudio es parte de un acuerdo más amplio entre CCAD, CDRH y CEPREDENAC.

Desde 2004, CATHALAC coordina acciones con CCAD y en 2005 se acordó junto con NASA y USAID que CATHALAC administrara la plataforma SERVIR. Prácticamente CATHALAC es el nodo regional del Sistema de Información Ambiental Mesoamericano (SIAM). Con el apoyo de USAID se han fortalecido capacidades en los SNIAs (Sistemas Nacionales de Información Ambiental) de Centroamérica y en el marco del DR-CAFTA, se continúa con procesos de capacitación. Con algunas excepciones, la información administrada por SERVIR es prácticamente privada, puesto que se ha generado en base a contratos. Por ejemplo, en 2008, la ANAM contrató a SERVIR para elaborar el Mapa de Cobertura de Panamá y un análisis de los cambios de cobertura. Este mapa todavía no es oficial y está en proceso de verificación de campo.

Por otra parte, CATHALAC está elaborando escenarios de calidad de agua y de stocks de carbono. El modelo TROPICARM ya está en

funcionamiento y se espera que pueda ser utilizado en la región, sobre todo considerando que tiene la capacidad de ser una herramienta regional de monitoreo y validación de los cambios de carbono. En Panamá ya se están realizando experiencias piloto con esta herramienta y han elaborado una propuesta a la Fundación Packard para el monitoreo de “hotspots” para prevenir incendios.

Otros proyectos en ejecución incluyen estudios de biodiversidad en Panamá, cursos de capacitación en manejo de recursos hídricos y cursos en manejo de sistemas de información. Existe el temor de que SERVIR termine siendo una colección de mapas sin mayores vinculaciones a procesos de creación de capacidad en los países de la región. Pareciera que CATHALAC ha administrado muchos proyectos de capacitación y de seguimiento a los SNIAs, pero se desconoce qué tan efectivos han sido y qué valoración tienen los países de estos esfuerzos.

La plataforma SERVIR es pesada y engorrosa para la mayoría de usuarios a la hora de tratar de obtener información útil. Sin embargo, pareciera que es una oportunidad para que los especialistas de SIG tengan acceso a imágenes y en pocos casos orthofotomapas, que hace algunos años atrás, tenían altos costos.

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanzas (CATIE) ha participado en diversas iniciativas de REDD. CATIE es el Socio Latinoamericano de ‘REDD-Net’, una plataforma global de conocimiento sobre REDD, fundada por el Banco Mundial y NORAD. Esta plataforma tiene como objetivo vincular las experiencias, conocimiento y perspectivas de organizaciones de la sociedad civil en el ‘Sur’ para promover políticas y proyectos REDD que

reducen la pobreza. CATIE también ha dado capacitaciones sobre el diseño de actividades REDD, como la que se llevó a cabo en octubre de 2008.

Aunque no existen detalles concretos todavía, existen planes de colaboración del CATIE con el Programa REDD-CARD de GTZ. CATIE también implementa el proyecto FINNFOR, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, el cual busca eliminar las barreras técnicas y legales al desarrollo del sector forestal en los siete países de Centroamérica. Este proyecto de 5.4 millones de Euros no tiene un elemento explícito de REDD, sin embargo, es muy probable una articulación de este proyecto con mecanismos REDD, en particular lo relacionado al componente del proyecto que promueve el ‘acceso a iniciativas y mecanismos para promover el manejo forestal’.

La Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI)

La Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI por sus siglas en inglés) es una coalición global de organizaciones comunitarias, organismos de investigación, ambiente y desarrollo que busca fortalecer los derechos de tenencia de las comunidades forestales y Pueblos Indígenas del mundo. En años recientes, RRI ha colaborado con sus socios regionales, como ACICAFOC, en incidencia en los procesos regionales sobre cambio climático para resaltar los temas de derechos, tenencia y gobernanza en las discusiones de REDD. El trabajo que se realiza en Mesoamérica es parte de incidencia que se realiza también en África y Asia, además de espacios internacionales por medio de publicaciones, diálogos y eventos. Durante años recientes, RRI ha auspiciado varios foros internacionales para discutir el rol de tenencia y derechos en REDD+. Este año RRI colabora con PRISMA y ACICAFOC para realizar un diálogo Mesoamericano en El Salvador, para promover diálogo entre actores clave sobre el rol de tenencia y

derechos en el contexto de REDD en Mesoamérica.

Centro Latinoamericano de Competitividad para el Desarrollo Sostenible - Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (CLACDS-INCAE)

El CLACDS se estableció en 1996 con el objetivo de promover cambios en políticas públicas, estrategias empresariales y acciones de la sociedad civil que le permitan a la región alcanzar mayores niveles de competitividad y sostenibilidad en sus procesos de desarrollo.

El CLACDS ha trabajado de cerca con las iniciativas de competitividad formalmente constituidas en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Estas consideraciones llevaron a la identificación de cinco áreas de trabajo que combinan aspectos de competitividad, ambientales y sociales. Los temas estratégicos son: seguimiento a las agendas regionales y nacionales de competitividad; el desarrollo rural; implicaciones de los tratados de libre comercio; competitividad de las pequeñas y medianas empresas; y utilización de tecnología digital para el desarrollo comunitario. En el marco de estos temas, el CLACDS se interesa en el tema de cambio climático y está preparando una iniciativa de programa REDD, que todavía está en discusión.

Organizaciones internacionales de conservación

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance es una organización referente en materia de certificación forestal en la región. Actualmente promueve varias iniciativas de REDD en Mesoamérica, la mayoría de las cuales tienen un grado sustancial de avance. En general, la mayoría de países de la región desarrollan dos tipos de procesos en relación a REDD. Por un lado, están los países que traba-

jan con el Banco Mundial en crear estrategias y marcos de políticas; y por otro lado, están los países que han comenzado a impulsar actividades para reducir deforestación como parte de estrategias demostrativas de campo, tal como ocurre en Guatemala, Perú, Ecuador y Brasil. La estrategia de trabajo de Rain Forest Alliance es apoyar ambos procesos, pero están más interesados en demostrar cómo se implementan este tipo de acciones en el terreno.

En Centroamérica, Guatemala ha avanzado sustancialmente en el proceso de preparación para REDD, comparado con otros países de la región. Guatemala tiene la particularidad de que la iniciativa REDD nació de grupos de base, sobre todo de comunidades que hacen manejo forestal en la parte norte, tal como ha ocurrido en Petén, donde el proceso comenzó hace prácticamente cuatro años, aún cuando el tema de REDD recién comenzó a perfilarse en Montreal, Canadá. Actualmente ya se está avanzando en el desarrollo de herramientas metodológicas, como la línea de base subnacional y al parecer, Guatemala sería el primer país de la región que lo podría tener, pues ningún otro país está trabajando una línea de base de emisiones. A pesar de muchos esfuerzos de análisis de la cobertura forestal que incluyen muestreos de carbono en diferentes ecosistemas, es evidente la necesidad de integrar esa información para generar líneas de base, herramienta clave para identificar dónde se concentran los procesos de deforestación y las emisiones. Las líneas de base con claves para iniciativas concretas sobre REDD y son determinantes para negociar créditos de carbono.

Guatemala también está trabajando en la institucionalidad de REDD. Se han fortalecido capacidades al interior del MARN, sobre todo en la unidad encargada del tema, que cuenta con tres funcionarios. Sin embargo, también existen capacidades técnicas en el CONAP y en el

INAB, de modo que las tres entidades participan activamente en el tema de REDD.

Conservación Internacional (CI)

El Departamento de Iniciativas de Cambio Climático de Conservación Internacional ha estado involucrado en esfuerzos para evaluar la viabilidad de proyectos de carbono forestal en América Central desde hace varios años. CI también ha participado activamente en los principales cursos de entrenamiento y diálogos sobre carbono forestal entre las ONG y actores relevantes de los gobiernos en los últimos 2 años. CI ha creado un extenso programa de entrenamiento y educación en REDD y ha desarrollado herramientas de compromisos y beneficios compartidos para asegurar que REDD beneficie a comunidades vulnerables. En México y Centroamérica promueven varias iniciativas:

- Iniciativa de Carbono La Cojolita Selva Lacandona, en una región con rica biodiversidad que cubre aproximadamente 1.8 millones de hectáreas. CI se ha asociado con la conservación local y con comunidades indígenas organizadas buscando implementar un proyecto integrado para reducir emisiones por deforestación y separar el carbono adicional en áreas agrícolas degradadas. Actualmente está desarrollando la primera etapa de una iniciativa REDD para Chiapas, la cual contará con varias fases, iniciando por el establecimiento de los escenarios de referencia, una evaluación política y social de los impactos y el establecimiento de las directrices para la implementación.
- Iniciativa de Conservación de Carbono en la Reserva de la Biosfera Maya: La Reserva es parte de un sistema trinacional de áreas protegidas entre Guatemala, Belice y México. CI y otros socios, con la colaboración del

gobierno de Guatemala, están diseñando un proyecto que reduce los índices de deforestación y mejora el manejo de la Reserva. A través de compensaciones por venta de carbono, el proyecto busca generar recursos financieros para mejorar el manejo en las unidades del parque nacional. Actualmente, el proyecto está evaluando cuatro potenciales sitios pilotos dentro de la Reserva (áreas no concesionadas) donde la deforestación puede ser reducida. Adicionalmente, el proyecto reforestará tierras privadas a lo largo del Corredor Maya Jaguar para proveer más hábitat de vida silvestre, incrementando la captura de carbono y mejorando el nivel de vida de las comunidades locales.

- Proyecto Piloto Biosfera Maya y Corredor Jaguar Maya: es un proyecto que actualmente está en preparación. El análisis de deforestación ya se ha completado y ya se ha iniciado el componente técnico del PDD, utilizando la metodología BioCF (WCS con la colaboración de CI). También se ha avanzado en el análisis de factibilidad de Convenios de Conservación (WCS con la colaboración de CI) y en propuestas de acuerdos con el gobierno (con el apoyo de otras ONG). El gobierno ha dado su aprobación para proceder con el diseño del proyecto, sin embargo, falta la aprobación formal para vincular esta iniciativa a mercados de compensación. El proyecto está explorando mecanismos para compartir los ingresos generados por el carbono capturado, promoviendo actividades de sustento sostenible e incrementando ingresos para las comunidades locales.

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

La Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN) tiene una serie de inicia-

tivas relacionadas con REDD+. Primero, UICN está realizando una iniciativa a nivel de Mesoamérica que busca establecer plataformas de capacitación para líderes territoriales en el tema de REDD, para lograr mayor y mejor participación de los Pueblos Indígenas y comunidades forestales en el desarrollo de las estrategias REDD en cada país. Como parte de este trabajo, se está desarrollando junto con ACICAFOC una guía informativa de REDD para los líderes territoriales. Además, esta iniciativa busca realizar diálogos nacionales y territoriales sobre REDD en los diferentes países de la región. Estas iniciativas regionales se complementan por los diferentes programas nacionales que existen en cada país.

The Nature Conservancy (TNC)

TNC está en el mercado de carbono desde hace mucho tiempo, con iniciativas como NASCA, que integra a Costa Rica y Panamá con Sur América. El primer proyecto de carbono lo desarrollaron en Bolivia (Noel Kempff). TNC es contribuyente del FCPF. Su interés en REDD se enfoca en lograr sinergias con la conservación de la biodiversidad y su estrategia de cambio climático vincula esquemas de adaptación con mitigación. TNC trabaja con una nueva lógica, apoyando más a los gobiernos en la definición de estrategias, que en el trabajo de campo. El planteamiento de TNC junto con el Environmental Defense Fund y Woods Hole Research Center, es que las actividades agrícolas no deben ser parte de un mecanismo REDD+, ya que favorecen la degradación de los ecosistemas naturales. La estructura de TNC es bastante descentralizada y a nivel de país hay varias iniciativas, pero hay algunos procesos comunes que se han promovido en varios países. Por ejemplo, han apoyado a los gobiernos de Guatemala y Panamá en la preparación de los R-PIN para el FCPF. Asimismo, estas organizaciones promueven un enfoque nacional para evitar problemas de fugas y creen que un even-

tual funcionamiento de fondos, estarían basados en contribuciones de fuentes públicas, al menos en las primeras etapas. En Centroamérica desarrollan evaluaciones de ecosistemas, utilizando la metodología de Análisis de Vacíos para la Conservación de la Biodiversidad. Estos estudios que existen a nivel de país, pueden brindar información para identificar hotspots de deforestación. La mayoría de los proyectos se desarrollan en áreas protegidas.

Bio-REDD: Mecanismo Interino para Proteger Bosques Tropicales (IMPTE, por sus siglas en inglés)

A pesar de que esta iniciativa todavía no se haya plasmado de forma concreta, ha habido discusiones sobre la creación de un mecanismo de REDD bajo el Convenio de la Diversidad Biológica. En Marzo de 2010, The Wild Foundation, UNESCO, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y UICN convocaron al “Primer Congreso Internacional de Bio-REDD” en San José, Costa Rica, con la Universidad para la Cooperación Internacional como anfitrión, para discutir un mecanismo interino de REDD que podría desplegarse rápidamente en el contexto de las demoras y complicaciones experimentadas con las negociaciones de la CMNUCC y los estándares de carbono. Este mecanismo buscaría ser más accesible para proyectos que tengan una clara adicionalidad de carbono, pero que también se enfoque más en los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, dado que los otros abordajes se limitan a carbono. Se discutió con interés la posibilidad de vincular esta iniciativa al Corredor Biológico Mesoamericano, de modo que esta plataforma se fortalezca, al tiempo que se avanza en proteger la biodiversidad dentro del Corredor Biológico. Se espera que esta iniciativa siga desarrollándose, con la idea de ser propuesta y discutida en las reuniones del Convenio de Diversidad Biológica.

Otros organismos de cooperación

RUTA-IICA-FAO

RUTA está a cargo de la Secretaría de la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS) y está a cargo del monitoreo de su implementación. Actualmente se está sistematizando el proceso de elaboración y negociación de la ERAS, pero hay poco avance. En el marco de la ERAS, GTZ apoya temas relativos a cambio climático y biodiversidad, incluyendo la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) que prepara la CCAD. Pareciera que la ERCC no enfatiza el tema de REDD, pues sólo hace algunas menciones.

RUTA tiene un interés especial en llevar los temas ambientales a un diálogo más allá de los sectores de agricultura y de salud, involucrando en primera instancia a los ministerios de hacienda, de modo que se incida en eventuales reformas y cambios institucionales. Según RUTA, los fondos que se han creado a partir de los ministerios de medio ambiente son demasiado débiles y mueren por falta de alimentación. Por eso, RUTA propone una discusión amplia, en la que el patrimonio natural sea visto como por su potencial de valor económico.

Las preocupaciones con REDD se derivan por la forma en que se está fijando la agenda, sin hacer una reflexión de fondo sobre el tema de la tierra, los bosques y la deforestación. En las últimas décadas ha habido muchos programas de conservación, áreas protegidas, leña, incentivos forestales, agricultura etc. El Banco Mundial y el BID, por ejemplo, tienen al menos 25 años de estar invirtiendo en los temas de tierras y no está claro qué ha pasado, cuáles son las lecciones que han dejado esas inversiones.

Otra preocupación es sobre la coherencia y articulación de los procesos. La región hace menos de un año realizó un ejercicio importante de consulta de la ERAS y más recientemente, sobre la Estrategia de Cambio Climático. Ahora el tema de REDD está presente en la región y no está claro cómo se conectan todos esos procesos, ni cuál es el marco de referencia. Otro punto de preocupación es que hay necesidad de evaluar mejor los programas que han pretendido fortalecer los marcos regulatorios y la gobernanza forestal en Centroamérica. Para FAO, el tema de REDD todavía no está en agenda, pero sí están apoyando a los países de la región en el levantamiento de los inventarios forestales, que obviamente contribuyen a mejorar los sistemas de información que alimentan la planificación estratégica, la evaluación y el desarrollo de políticas relacionadas con el sector forestal. En Nicaragua por ejemplo, el último inventario se levantó entre 2007 y 2008. FAO también ha apoyado a todos los países de la región en la evaluación de mecanismos de PSA, ha produ-

cido materiales de capacitación y análisis en el tema.

USAID–Panamá

USAID-Panamá está considerando montar un centro de excelencia en Panamá, para concentrar expertos en temas ambientales, de bosques y otros. Desde allí se analizarían las propuestas, programas y estrategias de USAID para América Latina. Esto se debe a que Panamá enlaza con dos regiones estratégicas (Mesoamérica y Sur América). Aunque no hay mucha claridad sobre la agenda referida a REDD, sí están a la espera de la manera en que dicho tema se desarrolla en la región. De hecho, han manifestado interés en que los sistemas de monitoreo de carbono puedan basarse en la plataforma SERVIR, que además de tener una cobertura regional, y una capacidad instalada, tendría un costo marginal pensándola como plataforma de un eventual esquema de monitoreo de carbono, sin embargo, habría que desarrollar un esfuerzo de cabildeo y convencimiento a los países para un arreglo en este sentido.

Personas entrevistadas

México

Ana Peña del Valle	Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS)
Ben de Jong	Colegio de la Frontera Sur (ECO-SUR)
Carlos Gay	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Carlos Marcelo Pérez	Servicios Ambientales de Oaxaca (SAO)
Carlos Muñoz Piña	Director del Instituto Nacional de Ecología (INE)
Celia Piguérón	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
David Ross	Consultor
Edgar Moisés Rivero Cob	Instituto Nacional de Ecología (INE)
Elsa Esquivel	Cooperativa AMBIO, S.C.
Fernando Paz	Colegio de Postgraduados (COLPOS)
Francisco Chapela	Rainforest Alliance
Gustavo Sánchez	Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF)
Héctor Soberón	Greenpeace
Jorge Rickards	World Wildlife Fund (WWF)
José Armando Alanís de la Rosa	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
José Eduardo Rolón Sánchez	Instituto Nacional de Ecología (INE)
José Romo e Iris Jiménez	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
Juan Bezaury-Creel	The Nature Conservancy (TNC)
Juan Manuel Frausto	Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN)
Juan Manuel Torres Rojo	Director de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
Judith Domínguez	Colegio de México (COLMEX)
Karla Barclay	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Leonel Iglesias Gutiérrez	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
Leticia Merino	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Liliana Davila	World Wildlife Fund (WWF)
Marco Antonio González	Sistema Comunitario para la Biodiversidad (SICOBI)
Mariana Bellot	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

Paloma Neumann	Greenpeace-México
Ricardo Hernández Murillo	Banco Mundial
Ricardo Rivera	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
Romeo Domínguez	Pronatura Sur
Rosa Vidal	Pronatura Sur
Sergio Madrid	Director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS)
Sotero Prieto	Cooperativa AMBIO, S.C.
Thea Konstantinidis	Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental (GAIA)

Guatemala

Adelso Revolorio	Instituto Nacional de Bosques (INAB)
Ana Lucrecia Contreras	Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)
Byron Villeda	Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO)
Camilo Ernesto Medina	Fundación del Bosque Tropical
Carlos Chex	Asociación Sotzil
Carlos Mansilla	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
Carlos Rodríguez	Conservation International (CI)
Carmen Torselli Bech	Fundación Solar
César Sandoval	Universidad Rafael Landívar (IARNA)
Dr. Edwin Castellanos	Universidad del Valle
Edelweiss Hildebrand	Fundación para la Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Mario Dary Rivera (FUNDARY)
Elian Jacobo E. Cotto G	Instituto Nacional de Bosques (INAB)
Eluvia Morales	Fundación Solar
Emilio Ollin Garcia	Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno (Fundación CALMECAC)
Francisco Escobedo Grotewold	Gremial Forestal
Gerardo Segura	Banco Mundial, BM
Glenda Lee	Agroindustrial Occidente
Idar Instefjord	Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD)
Igor de la Roca	Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)
Iliana Monterroso	Rights and Resources Initiative (RRI)
Israel Ruiz	Fundalachuá

Jennifer Tikka Teresa Robles	Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional, USAID
Jorge Cabrera	Kukulkan
Juan Carlos Godoy	The Nature Conservancy , TNC
Juan de Dios Mattos	Banco Interamericano de Desarrollo, BID
Juan Giron Manzanero	Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP)
Karen Aguilar Ponce	Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO)
Karinn Johanna Sandoval	Universidad de San Carlos (CECON)
Lorena Córdova	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
Marcedonio Cortave	Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP)
Marcel Oseida	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
María Marta Molina	Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno (Fundación CALMECAC)
Mario Escobedo	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
Mark Zimsky	Global Environmental Fund (GEF)
Ogden Rodas	The Growing Forest Partnership (GFP)
Olov Atterfors	Países Bajos (Holanda)
Omar Samaoya	Rainforest Alliance
Oscar Rojas	Defensores de la Naturaleza
Richard Carter	Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID)
Roan Balas	Wildlife Conservation Society (WCS)
Roberto Chuc	CARE
Rosa Maria Chan	Pro-Petén
Silvel Elias	Grupo Promotor de Tierras Comunales
Thomas Nielson	Programa de Apoyo al Medio Ambiente en Centroamérica (PREMACA-DANIDA)
Victor Moscoso	Instituto Nacional de Bosques (INAB)
Vivian Marycruz Villegas Rivas	Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT)
Walter Alvarado Mayra	Asociación de Forestería Comunitaria Ut'z Che'

Honduras

Carlos René Romero	Vice-Ministro – Instituto de Desarrollo y Conservación Forestal (ICF)
Kennedy Raymundo	Federación Indígena de la Zona Mokoron y Segovias (FINZMOS)
Eduardo Sarmiento	HACOFOG-Gualaco y Guata

El Salvador

Álvaro Moisés	Fundación Ecológica Salvadoreña (SalvaNatura)
Francisco Rodríguez	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
Francisco Soto	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
Herman Rosa Chávez	Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
Josué Guardado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Luis Girón	Fundación Ecológica Salvadoreña (SalvaNatura)
Maritza Erazo	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
Yvette Aguilar	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Nicaragua

Ann Larson	CIFOR, Nicaragua
Aurelia Patterson	Vice-Alcaldesa, Municipalidad de Rosita
Danilo Saaravia	Consultor

Costa Rica

Alvaro Umaña	Asesor del Ministerio de Ambiente, Energía, Minas y Telecomunicaciones (MINAET)
Vicente Watson	Centro Científico Tropical (CCT)

Panamá

Edilberto Dogirama	Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP)
Gabriel Labbate	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
Leovigildo Doviaza Machuca	Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP)
María Sujey Blanco	Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
Yanel Venado	Comarca Ngäbe-Bugle

Nivel regional e internacional

Alberto Chinchilla	Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC)
Andy White	Rights and Resources Initiative (RRI)
Arturo Santos	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
Danilo Saravia	Consultor
Deborah Barry	Rights and Resources Initiative (RRI)
Gerardo Segura	Banco Mundial (BM)
Jorge Cabrera	Asesor de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
Joshua Lichtenstein	Bank Information Center (BIC)
Laszlo Pancel	Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ)
Raúl Artiga	Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
Roberto Rodríguez	Secretario Ad-Interim de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
Román Carrera	Rainforest Alliance
Rubén Pasos	Asesor-Consultor
Ruth Quintanilla	Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC)

Bibliografía y documentación utilizada

Angelsen, A., Brockhaus, M., Kanninen, M., Sills, E., Sunderlin, W.D. y Wertz-Kanounnikoff, S., eds (2009) *Realising REDD+: National strategy and policy options*. CIFOR. Bogor.

Angelsen, A., Brown, S., Loisel, C., Peskett, L., Streck, C., Zarin, D. (2009). *Reducción de Emisiones de la deforestación y la degradación de bosques (REDD): Reporte de Evaluación de Opciones*. Meridian Institute preparado para el Gobierno de Noruega.

Carr, David L. (2008). *Farm Households and Land Use in a Core Conservation Zone of the Maya Biosphere Reserve*. *Human Ecology*, Vol. 36: p. 231-248.

CONAP (2004). *Plan Maestro del Parque Nacional Sierra del Lacandón 2005–2009*. Guatemala.

CONAP-INAB (2003). *Plan Maestro Parque Nacional Laguna Lachuá*. Guatemala, 2003.

Davis, Andrew (2010). *Reducción de emisiones por deforestación y degradación en Guatemala: Iniciativas, territorios y actores de un proceso en marcha*. PRISMA-CABAL. San Salvador

Davis, Crystal, Smita Nakhooda y Florence Daviet (2010). *Getting Ready: A Review of the World Bank Forest Carbon Partnership Readiness Preparation Proposals*; World Resources Institute. Washington D.C.

Ecosystem Marketplace and New Carbon Finance (2009). *Fortifying the foundation: State of the carbon markets 2009*. Washington DC-New York.

Elías, S.; Larson, A. y Mendoza, J. (2009). *Tenencia de la Tierra, Bosques, y Medios de Vida en el Altiplano Occidental de Guatemala*. CIFOR-FAUSAC. Guatemala.

FAO-UNDP-UNEP (2008). *UN collaborative programme on reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries (UN-REDD)*. Framework Document.

Forest Carbon Partnership Facility (2008). *Costa Rica Readiness Plan Idea Note (R-PIN) Template*.

Forest Carbon Partnership Facility (2008). *El Salvador Readiness Plan Idea Note (R-PIN) External Review Form*.

Forest Carbon Partnership Facility (2008). *Guatemala Readiness Plan Idea Note (R-PIN) Template*.

Forest Carbon Partnership Facility (2008). *Guatemala Readiness Plan Idea Note (R-PIN) External Review Form*.

Forest Carbon Partnership Facility (2008). *Honduras Readiness Plan Idea Note (R-PIN) External Review Form*.

Forest Carbon Partnership Facility (2008). *Mexico Readiness Plan Idea Note (R-PIN) Template*.

Forest Carbon Partnership Facility (2008). *Nicaragua Readiness Plan Idea Note (R-PIN) Template*.

Forest Carbon Partnership Facility (2008). *Nicaragua Readiness Plan Idea Note (R-PIN) External Review Form*.

Forest Carbon Partnership Facility (2008). *Panama Readiness Plan Idea Note (R-PIN) Template*.

Forest Carbon Partnership Facility (2009). *Costa Rica Readiness Preparation Proposal (R-PP) External Review Template*.

Forest Carbon Partnership Facility (2009). *El Salvador Readiness Plan Idea Note (R-PIN) Template*.

- Forest Carbon Partnership Facility (2009). *Honduras Readiness Plan Idea Note (R-PIN) Template*.
- Forest Carbon Partnership Facility (2009). *Panama Readiness Preparation Proposal (R-PP) Template*.
- Forest Carbon Partnership Facility (2009). *Panama Readiness Preparation Proposal (R-PP) External Review Template*.
- Forest Carbon Partnership Facility (2010). *Costa Rica Readiness Preparation Proposal (R-PP) Template*.
- Forest Carbon Partnership Facility (2010). *Mexico Readiness Preparation Proposal (R-PP) External Review Template*.
- Forest Carbon Partnership Facility (2010). *México Readiness Preparation Proposal (R-PP) Template*.
- Fradejas, Alonso; Fernando Alonzo y Alberto Jochen Durr (2008). *Caña de azúcar y palma africana: combustibles para un nuevo ciclo de acumulación y dominio en Guatemala*; Instituto de Estudios Agrarios y Rurales (IDEAR) Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP). Guatemala.
- Fundalachuá (2010). *The Forests Dialogue*. <http://en-vironment.yale.edu/tfd/dialogue/forests-and-climate/third-redd-readiness-field-dialogue>. Accedido el 23 de enero de 2010.
- Global Canopy Programme (GCP). <http://www.global-canopy.org/>
- Grupo Ecológico Sierra Gorda y Bosque Sustentable. <http://www.sierragorda.net/carbon/index.htm>
- GTZ (s.f.). *Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de Bosques en Centroamérica y la República Dominicana*. s.l.
- GTZ-CCAD (s.f.). *Antecedentes del Programa REDD-CARD de GTZ*. San Salvador.
- GTZ-CCAD (s.f.). *Resultados de la evaluación para un nuevo proyecto regional de reducción de emisiones por deforestación y degradación en Centro América y República Dominicana (REDDCA)*. San Salvador.
- <http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/Vision%20SAGARPA%20REDD%20LG.pdf>.
- INAB (2004). *Evaluación de los Recursos Forestales: Inventario Forestal Nacional 2002–2003*. Guatemala.
- INAB/CONAP/MARN/UICN (2009). *Guatemala: Implementación de Mecanismos REDD para la contextualización de actores en el Diálogo Forestal*. Guatemala.
- Krznaric, Roman (2005). *The Limits on Pro-Poor Agricultural Trade in Guatemala: Land, Labour and Political Power*. Occasional Paper. United Nations Development Programme. New York.
- Larson, Anne (2009). *Guatemala Tenure Scoping*. Rights and Resources Group. Washington D.C.
- Lovera, S. (2008). *The hottest REDD issues: Rights, equity, development, deforestation and governance by indigenous people and local communities*. Global Forest Coalition and the Commission on Environmental, Economic and Social Policies (CEESP).
- MARN (2010). *The Forests Dialogue*. <http://environment.yale.edu/tfd/dialogue/forests-and-climate/third-redd-readiness-field-dialogue>. Accedido el 27 de enero, 2010.
- Merger, E. (2008). *Forestry Carbon Standards 2008 - A comparison of the leading standards in the voluntary carbon market and the state of climate forestation projects*.
- Monterroso, Iliana y Deborah Barry (2009). *Tenencia de la tierra, bosques y medios de vida en la Reserva de Biosfera Maya en Guatemala*. Sistema de Concesiones Forestales. CIFOR-FAUSAC. Guatemala.

Núñez de León, Delia Lucrecia (2008). *Aplicación de atributos de buena gobernanza ambiental en paisajes clave de Guatemala para su adhesión a la red regional de bosques modelo*. CATIE. Turrialba, Costa Rica.

Palacio-Prieto, J. L. Bocco, G., Velásquez, A., Mas, J. F., Takaki, F. Victoria, A., Luna, L., Gomez, G., Lopez, J., Palma, M., Trejo, I., Peralta, A., Prado, J., Rodríguez, A., Mayorga, R., y Gonzalez, F. (2000). *La condición actual de los recursos forestales en México: Resultados del Inventario Forestal Nacional 2000*. Nota Técnica. Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía. UNAM. No. 43. pag. 183-203.

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC inglés) <http://www.ipcc.ch/>

Parker, C.; Mitchell, A.; Trivedi, M. and Mardas, N. (2009). *The little REDD+ book*. Global Canopy Foundation, UK.

Peña del Valle, Ana; Ramírez, Gmelina; y Madrid, Sergio (2010). *Reducción de emisiones por deforestación y degradación en México: Iniciativas, territorios y actores de un proceso en marcha*. PRISMA-CABAL-CCMSS. San Salvador.

Peskett, L., Huberman, D., Bowen-Jones, E., Edwards, G., and Brown, J. (2008). *Making REDD work for the poor. A poverty Environment Partnership Report*. IUCN, ODI, UNDP, SIDA, ADB, DFID, UNEP, WCMC

Plan Vivo. www.planvivo.org

Pronatura, mercado voluntario http://www.pronatura.org.mx/mercado_voluntario.php

Rainforest Alliance. <http://www.rainforest-alliance.org/>

REDD web platform. http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php

REDD-Monitor. <http://www.redd-monitor.org/>

SAGARPA (2009). *Postura de la SAGARPA respecto al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD)*. Documento consultado en: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). http://www.iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/sudamerica/sur_trabajo/sur_bosques/mecanismos_redd/

UN-REDD Programme (2009). *Borrador del documento de programa nacional de Panamá*. Documento de Programa Conjunto. ANAM-UNEP-FAO-PNUD. Panamá.

UN-REDD Programme (2009). *Rules of procedure and operational guidance*.

UN-REDD Programme <http://www.un-redd.org>

Siglas utilizadas

ACACES	Asociación Campesina de Agroforestería Comunitaria de El Salvador
ACICAFOC	Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana
ACOFOP	Asociación de Comunidades Forestales de Petén
ACRA	Asociación de Cooperación Rural en África y América Latina
ADI	Asociación de Desarrollo Indígena (Costa Rica)
AGEXPORT	Asociación Guatemalteca de Exportadores
ANAM	Autoridad Nacional del Ambiente
ANARAM	Asociación Nacional de Reforestadores y Afines de Panamá
ANCON	Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza
ASCOMAFOR	Asociación para la Conservación de Bosques Comunitarios
ASILCOM	Asociación de Silvicultores Comunitarios
ASOCUCH	Asociación de Organizaciones de los Chuchumatanes
ASORECH	Asociación Regional Campesina Ch'orti
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
BMI	Banco Multisectorial de Inversiones
BMZ	Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo
CADPI	Centro para la Autonomía de los Pueblos Indígenas
CALMENAC	Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno
CAOI	Coordinadora Andina de las Organizaciones Indígenas
CATHALAC	Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y El Caribe
CATIE	Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
CCAD	Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
CCMSS	Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible
CCBA	Climate, Community and Biodiversity Alliance
CDI	Comisión de Desarrollo Indígena

CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPREDENAC	Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central
CIAM	Centro de Incidencia Ambiental de Panamá
CI	Conservación Internacional
CICA	Consejo Indígena Centroamericano
CICA	Centro Internacional para la Capacitación Ambiental (Panamá)
CICC	Comisión Intersecretarial de Cambio Climático
CIMA	Consejo Indígena Mesoamericano
CIMS	Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles
CLACDS	Centro Latinoamericano de Competitividad para el Desarrollo Sostenible
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CNTC	Central Nacional de Trabajadores del Campo
COG-MANGLAR	Coordinadora Guatemalteca para la defensa de los manglares y la vida,
COICA	Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
COLMEX	Colegio de México
COLPOS	Colegio de Post-graduados
CONAFOR	Comisión Nacional Forestal
CONAI	Consejo Nacional Indígena
CONANP	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
CONAP	Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala
CONGCOOP	Coordinación de ONG y Cooperativas
COONAPIP	Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá
COP	Conferencia de las Partes
CopinH	Consejo Popular Indígena de Honduras
COSUDE	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
DANIDA	Asistencia Danesa para el Desarrollo Internacional
DIPRONA	División de Protección de la Naturaleza
DR-CAFTA	Tratado de Libre Comercio Republica Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos

ECOSUR	Colegio de la Frontera Sur
EIA	Agencia de Investigaciones Ambientales
ELTI	Environmental Leadership and Training Initiative
EMSA	Estrategia Mesoamericana de Sostenibilidad Ambiental
ERAS	Estrategia Regional Ambiental y de Salud
ESNACIFOR	La Escuela Nacional de Ciencias Forestales (Honduras)
ERCC	Estrategia Regional de Cambio Climático
FAO	Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FCPF	Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
FINNFOR	Forests and Forest Management in Central America
FEDECOVERA	Federación de Cooperativas de las Verapaces
FEDERAFOGUA	Federación de Asociaciones Agroforestales, Ambientales y Agroecológicas del Occidente de Guatemala
FETRIX	Federación de Tribus Xicaques de Yoro
FHONDIL	Federación Hondureña de Indígenas Lencas
FINZMOS	Federación Indígena de la Zona Mokoron y Segovias (Honduras)
FMCN	Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C.
FONAFIFO	Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales
FUNDECOR	Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central
FUNIBER	Fundación Universitaria Iberoamericana
GAIA	Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental
GBBC	Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático (Guatemala)
GEI	Gases de efecto invernadero
GEOSS	Sistemas de Observación Global de la Tierra
GFP	The Growing Forest Partnership
GOFOs	Comités de Gobernanza Forestal
GTE	Grupos Técnicos Especializados
GTREDD	Grupo Interinstitucional de Trabajo
GTZ	Agencia de Cooperación Alemana

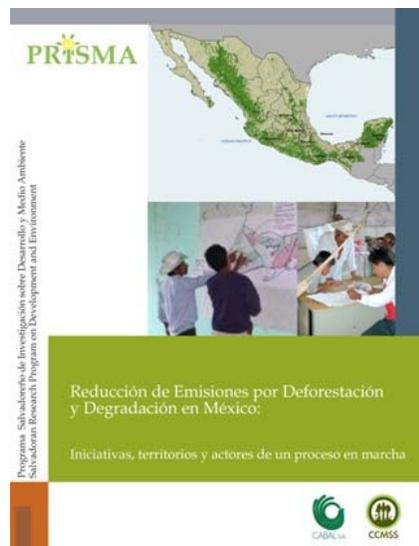
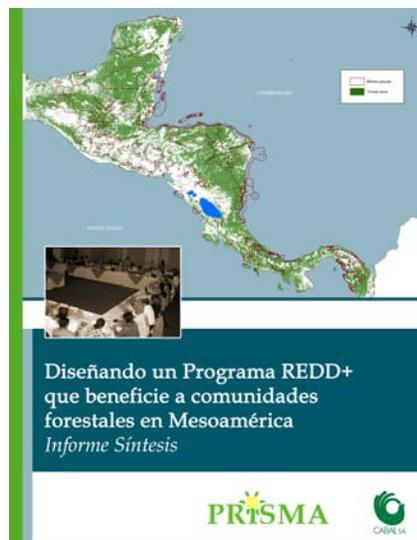
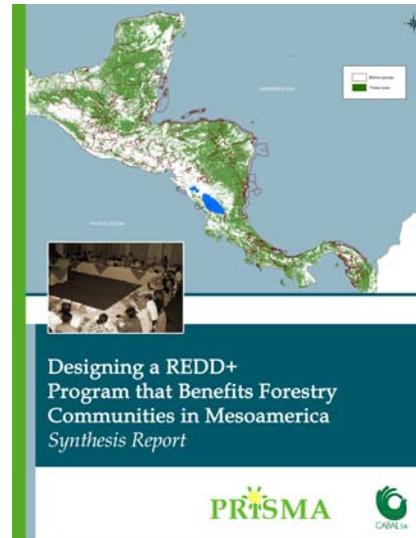
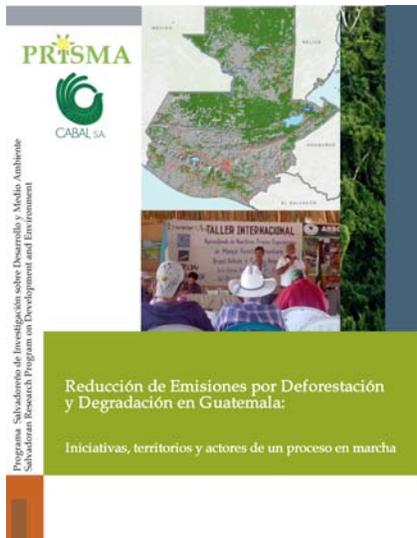
ICF	Instituto de Conservación Forestal
IHCAFE	Instituto Hondureño de Café
IICA	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
INAB	Instituto Nacional de Bosques (Guatemala)
INAFOR	Instituto Nacional Forestal
INBIO	Instituto de Biodiversidad (Costa Rica)
INE	Instituto Nacional de Ecología
INETER	Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales
IPACC	Comité Coordinador de Pueblos Indígenas de África
IPCC	Panel Intergubernamental de Cambio Climático
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MAGA	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Guatemala)
MAGFOR	Ministerio Agropecuario y Forestal
MARN	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Guatemala y El Salvador)
MARENA	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MASRENACE	Programa Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Fomento de Competencias Empresariales
MASTA	Mosquitia Asla Takanka (Honduras)
MDL	Mecanismo de Desarrollo Limpio
MEM	Ministerio de Energía y Minas
MFC	Manejo Forestal Comunitario
MIDA	Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Panamá)
MOPAWI	Mosquitia Pawisa Apiska (Honduras)
MRV	Monitoreo, Reporte y Verificación
NASA	Agencia Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (EEUU)
NEO	Ambientes Neotropicales
NITLAPAN	Instituto de investigación aplicada y promoción del desarrollo local
NORAD	Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo
OFRANEH	Organización Fraternal Negra Hondureña

OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONG	Organización no gubernamental
ONU-REDD	Programa Colaborativo de las Naciones Unidas sobre REDD
PARCA	Plan Ambiental Regional de Centroamérica
PERFOR	Programa Estratégico Regional sobre el Manejo de Ecosistemas Forestales
PFN	Programa Nacional Forestal de Guatemala
PINFOR	Programa de Incentivos Forestales
PINPEP	Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación Forestal o Agroforestal
PMC	Programa Mexicano del Carbono
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PREVDA	Programa Regional de Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación
PRISMA	Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente
PROCAMPO	Programa de Apoyo al Campo
PROCOCES	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (México)
PROCYMAF	Programa de Desarrollo Forestal Comunitario
PRONAT	Programa Nacional de Administración de Tierras
PRORENA	Fomento al Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Desarrollo Local en Honduras
PSA	Programa de Pago por Servicios Ambientales
RA	Rainforest Alliance
RAAN	Región Autónoma del Atlántico Norte
RAAS	Región Autónoma del Atlántico Sur
RAS	Red de Agricultura Sostenible
RECOFT	The Center for People and Forest
RED	Reducción de Emisiones por Deforestación
REDD	Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación

REDD+	Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, y la función de la conservación forestal, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono
REDD-CARD	Programa de REDD para Centroamérica y República Dominicana implementado por la GTZ
RED MOCAF	Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales
R-PIN	Readiness Plan Idea Note
R-PP	Readiness Preparation Proposal
RUTA	Unidad Regional de Asistencia Técnica (por sus siglas en inglés)
SAGARPA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SalvaNATURA	Fundación Ecológica Salvadoreña
SAO	Servicios Ambientales de Oaxaca
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SERNA	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
SERVIR	Sistema Regional de Visualización y Monitoreo
SESA	Valuaciones ambientales y sociales estratégicas
SIAM	Sistema de Información Ambiental Mesoamericano
SICA	Sistema de Integración Centroamericana
SINAC	Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Costa Rica)
SINAP	Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Panamá)
SNIA s	Sistemas Nacionales de Información Ambiental
TAP	Technical Advisory Panel (FCPF)
TNC	The Nature Conservancy
TROPICARMS	Sistema Integrado de Monitoreo de las Reservas de Carbono Tropical
UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
UNACHI	Universidad Autónoma de Chiriquí
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UNES	Unidad Ecológica Salvadoreña
URACCAN	Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense

USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
UTP	Universidad Tecnológica de Panamá
VCS	Voluntary Carbon Standard
VERs	Reducción de Emisiones Certificadas
WWF	World Wildlife Fund

Publicaciones relacionadas





PRISMA



www.prisma.org.sv

prisma@prisma.org.sv

3a. Calle Poniente No. 3760, Colonia
Escalón, San Salvador

Tels.: (503) 2298 6852, (503) 2298 6853,

(503) 2224 3700

Fax: (503) 2223 7209

Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente
Salvadoran Research Program on Development and Environment

El proceso de Preparación para REDD+ en Mesoamérica:
Actores, tendencias y temas críticos